

**Colección
Ciencias Sociales
y Humanidades**

DEL AULA Y EL BARRIO

**REFLEXIONES
SOBRE LA PRODUCCIÓN
DESIGUAL DEL ESPACIO URBANO**

Madisson Yojan Carmona Rojas
(Compilador)



**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL**

Educación de la Ciudadanía

Colección Ciencias Sociales y Humanidades

Del aula y el barrio

Catalogación en la fuente - Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional

Del aula y el barrio. Reflexiones sobre la producción desigual del Espacio urbano / Madisson Yojan Carmona Rojas y once Autores más. – Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2022. 135 páginas. Ilustraciones a color. – (colección Ciencias Sociales y Humanidades)

Incluye Referencias bibliográficas al final de cada capítulo.

ISBN impreso: 978-628-7518-39-1

ISBN PDF: 978-628-7518-42-1

ISBN ePub: 978-628-7518-41-4

Urbanismo – Aspectos Socioeconómicos. 2. Desarrollo Urbano. 3. Espacio Urbano – Aspectos Sociales. 4. Urbanismo – Investigaciones. 5. Sociología Urbana–Investigaciones. 6. Ordenamiento Territorial. I. Murcia Sánchez, Iván Felipe. II. Valcárcel Gómez, Lina Daniela. III. Sánchez Beltrán, Jhody Katerine. IV. Cubillos Rodríguez, Moisés V. Díaz Sanabria, Martín Andrés. VI. Gómez Gómez, Jessica Alejandra. VII. Martínez Munar, Michael Steven. VIII. Ruiz Rojas, Edwin Giovani. IX. González Ávila, Carlos Andrés. X. Botía Cella, Carolina. XI. Torres- Tovar, Carlos Alberto.

307.14 21 ed.

Del aula y el barrio

Reflexiones sobre la producción
desigual del espacio urbano

MADISSON YOJAN CARMONA ROJAS
(COMPILADOR)



**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL**

Educadora de educadores

Alejandro Álvarez Gallego
Rector

Yeimy Cárdenas Palermo
Vicerrectora Académica

Mireya González Lara
Vicerrectora de Gestión Universitaria

Fernando Méndez Díaz
Vicerrector Administrativo y Financiero

Gina Paola Zambrano Ramírez
Secretaria General

Colección Ciencias Sociales y Humanidades

Compilador:

Madisson Yojan Carmona Rojas

Autores:

Moisés Cubillos Rodríguez

Martín Andrés Díaz Sanabria

Jessica Alejandra Gómez Gómez

Edwin Giovanni Ruíz Rojas

Michael Steven Martínez Munar

Carlos Andrés González Ávila

Carolina Botía Cella

Colectiva Huertopía

Jhody Katerine Sánchez Beltrán

Lina Daniela Valcárcel Gómez

Iván Felipe Murcia Sánchez

© Universidad Pedagógica Nacional

Primera edición, 2022

ISBN impreso: 978-628-7518-39-1

ISBN PDF: 978-628-7518-42-1

ISBN ePub: 978-628-7518-41-4

Fechas de evaluación:
04-09-2020 / 13-09-2020

Fecha de aprobación:
30-11-2020

Preparación editorial

Grupo Interno de Trabajo Editorial

Universidad Pedagógica Nacional

Carrera 16A n.º 79-08

editorial.pedagogica.edu.co

Teléfono: (57 1) 347 1190 - (57 1) 594 1894

Bogotá, Colombia

Alba Lucía Bernal Cerquera
Coordinación

Pablo A. Castro Henao
Miguel Ángel Pineda Cupa
Edición

Fernando Carretero
Corrección de estilo

Juan Camilo Pachón
Diagramación

Mauricio Esteban Suárez Barrera
Diseño de cubierta y Finalización de artes

Xpress Estudio Gráfico y Digital S. A. S./Kimpres
Carrera 69 H n.º 77-40
Impresión

Hecho el depósito legal que ordena la Ley 44 de
1993 y decreto reglamentario 460 de 1995.



Esta publicación puede ser distribuida, copiada y exhibida por terceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial. No se pueden realizar obras derivadas.

A nuestro Brayan

Tabla de contenido

PRÓLOGO	11
<hr/>	
Carlos Alberto Torres	
INTRODUCCIÓN. PENSAR LA CIUDAD Y LO URBANO	17
<hr/>	
Madisson Yojan Carmona Rojas	
PRIMERA PARTE. ESPACIOS DE FORMACIÓN-ACCIÓN	31
<hr/>	
Capítulo 1. “A estudiar y a luchar”: la resistencia contra el extractivismo urbano en los barrios del Alto Fucha, Bogotá	33
Colectiva Huertopía (Jhody Katerine Sánchez, Lina Daniela Valcárcel e Iván Felipe Murcia)	
Capítulo 2. Espacios de acción sociopolítica	61
Moisés Cubillos Rodríguez	
SEGUNDA PARTE. ESPACIOS DE REFLEXIÓN	77
<hr/>	
Capítulo 3. Discursos y debates sobre el sector informal urbano en América Latina	79
Madisson Yojan Carmona Rojas	
Capítulo 4. Aproximaciones al problema de urbanización informal en América Latina	99
Martín Andrés Díaz Sanabria	
Capítulo 5. Segregación espacial: una mirada a los pares socioeconómicos	115
Jessica Alejandra Gómez Gómez	

TERCERA PARTE.	
ESPACIOS DE INVESTIGACIÓN	133
<hr/>	
Capítulo 6. La producción del espacio desde la actividad informal. Soacha, un escenario en disputa	135
Edwin Giovanni Ruíz Rojas y Michael Martínez Munar	
Capítulo 7. La producción del espacio urbano en Usme	151
Carlos Andrés González Ávila	
Capítulo 8. Universidades como agentes urbanos	167
Carolina Botía Cella y Madisson Yojan Carmona Rojas	
SOBRE LOS AUTORES	191
<hr/>	

Prólogo

Cuando revisamos a lo largo de la historia, particularmente el hecho urbano, nos preguntamos por qué la producción desigual del espacio urbano se mantiene de manera continua, a pesar de los avances de la sociedad, de los progresos científicos tecnológicos y de reconocer que, cada día que pasa, esta aldea global es más urbana.

Se menciona, entonces cómo, desde hace mucho tiempo, se considera la ciudad como la mayor realización de los seres humanos, dado que en ellas se concentran todas las oportunidades y posibilidades que garantizan a través de los avances acumulados a lo largo de siglos que todos los que la habitan puedan disfrutar y tener la mejor calidad de vida posible. Sin embargo, dicho postulado, aunque deseable, no ha logrado su materialización, sobre todo en aquellas sociedades con altos niveles de desigualdad e inequidad.

Por eso, resulta fundamental seguir pensando la ciudad y lo urbano, no solo como un hecho del pasado, sino como un fenómeno del presente y futuro sobre el cual todos los que habitamos en ella tenemos responsabilidades tanto individuales como colectivas. La producción del espacio urbano, en América Latina, ha sido un hecho asociado a las formaciones económico-sociales que han estado presentes en nuestros países, determinando las formas de acción e intervención en el territorio en relación con los intereses hegemónicos que se posan sobre las mayorías, sin reconocerles sus capacidades de acción y pensamiento.

La ciudad no es la misma a lo largo de la historia, ni en un futuro seguirá siendo la misma que hoy reconocemos. Sin embargo, sí seremos quienes habitamos la ciudad y el territorio quienes tendremos la responsabilidad de moldear el espacio urbano en función de los intereses mayoritarios de la sociedad y no de sectores minoritarios que usurpan y expolían las riquezas colectivas y obligan a las mayorías a vivir en condiciones indignas, de penuria bajo la égida del capital, en una lógica donde lo que determina únicamente la posibilidad de superación de las condiciones de pobreza y miseria están asociados a las prácticas de mercado y, por tanto, a la acumulación del capital.

El título de este libro, *Del aula y el barrio. Reflexiones sobre la producción desigual del espacio urbano*, da cuenta de dos hechos fundamentales presentes en la ciudad. Primero, el papel que cumple la educación, en todos sus niveles, en la formación de una sociedad y la determinación de su quehacer, donde la educación tenga un rol liberador y emancipador, o simplemente limitarse a reproducir las condiciones del *statu quo* que solamente produce y capacita mano de

obra barata y cualificada para atender las demandas del modelo de desarrollo que se asocia al modo de producción capitalista y su actual etapa de mercado. Segundo, el barrio, como herencia colonial vinculada a lo que en ese entonces se denominaban *las parroquias*, fragmentos de ciudad que se articulaban en torno a una iglesia la cual reconocían como eje de su dinámica en el interior de la ciudad diferenciándose de otras parroquias. En el caso colombiano, el barrio, unidad urbana, se entiende como la porción de espacio urbano que la comunidad ha construido y habita, reconociéndolo y apropiándolo culturalmente como su territorio, trabajando y luchando por su mejoramiento y consolidación. Es la unidad con la cual lo identifica la ciudad, al igual que sus habitantes. Es el resultado de la articulación de elementos físicos, económicos, políticos y culturales (Torres-Tovar, 1993, p. 35). En él construyen una identidad, crean tejido social, relaciones de comunidad y convivencia, y se diferencian de otros barrios.

La relación *aula/barrio* se traduce inicialmente en dos perspectivas. La primera, la conexión existente entre las comunidades académicas y el territorio al que pertenecen, del cual son sujetos de su accionar en el día a día. Este hecho es matizado por el tipo de institución, sea pública o privada, dado que cada una no solamente segmenta la sociedad, le brinda oportunidades diferenciadas, sino que a su vez entiende el territorio en perspectivas diversas. Para la primera, el territorio y la producción del espacio forman parte de su esencia y de su responsabilidad en términos de la necesidad de transformación de una realidad conflictuada por múltiples problemáticas. Aquí la educación pública y de modo particular la universidad pública tiene la responsabilidad de aportar en la solución de los problemas nacionales y del conjunto de la sociedad como corresponsabilidad por los recursos que invierte el conjunto de la sociedad en esta. Por su parte, las instituciones privadas, en su mayoría, actúan bajo la lógica de empresa, y por tanto los sujetos presentes en ellas son clientes a los que se les oferta una mercancía, cuya calidad dependerá del pago de esta. En esta primera conexión prima la relación educación/sociedad/mercado.

En la segunda perspectiva, se reconoce que los procesos de formación hoy en día deben estar absolutamente imbricados en términos de las demandas y exigencias del conjunto de la sociedad y la atención a sus necesidades básicas, y no exclusivamente a atender las demandas del mercado o de los intereses de los gobiernos de turno. Por ello, el barrio continúa siendo el soporte en el hecho urbano de las dinámicas sociales presentes en las sociedades latinoamericanas y, de modo particular, en el caso colombiano. Así, nuestras sociedades urbanas de la tercera década de este siglo XXI, son sociedades desiguales que materializan y expresan esta condición a través de la segregación, no solo físico-espacial, sino a través de otras formas de afectación, presentes en las dinámicas de las sociedades y sus sectores mayoritarios y siguen privilegiado los intereses del

mercado. A través de prácticas urbanísticas e inmobiliarias, como la gentrificación, la verticalización de la ciudad, la privatización del acceso y disfrute de bienes y servicios urbanos, entre otros, asociados a las ideas de modernización de la ciudad, de renovación, de revitalización, de regeneración, y de otras denominaciones, se busca imponer un modelo de ciudad y una manera particular de organización del espacio urbano que se le impone al conjunto de la sociedad, sin reconocer en ella su capacidad de organización y la posibilidad de que esta tome las decisiones sobre su territorio.

En esta perspectiva, *Del aula y el barrio. Reflexiones sobre la producción desigual del espacio urbano* constituye un aporte a estas discusiones desde el Semillero de Investigación Problemas Urbanos Contemporáneos (PUC), que nace en 2015 como un espacio de encuentro, reflexión y acción desde la formación geográfica en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la ciudad de Bogotá. A 2021, después de cinco años de trayectoria, recoge en este texto tres momentos significativos de su existencia, reflejando la importancia que cada día adquiere no solamente la lectura y discusión sobre las teorías y asuntos urbanos, sus críticas y perspectivas, sino también las conexiones que estas tienen en la cotidianidad, en el espacio urbano y, de modo particular, en los barrios de los que provienen en muchos casos o donde convergen a partir de dinámicas de acción territorial.

Este título se estructura en tres partes. La primera da cuenta del proceso de conformación del Semillero de Investigación PUC, y refleja algunas de las experiencias en las cuales este ha participado. Esta primera parte consta de dos capítulos: el primero, elaborado por estudiantes articulados a la Colectiva Huertopía, presenta la relación entre formación y acción a partir de la resistencia contra lo que denominan el extractivismo urbano en los barrios del Alto Fucha en la ciudad de Bogotá. En estas se da cuenta de los procesos de poblamiento de los cerros orientales y de modo específico los que se suceden en la cuenca alta del río Fucha y cómo los intereses del capital buscan, a 2021, despojar a los pobladores de su territorio para impulsar prácticas económicas vinculadas con el ecoturismo y la denominada vivienda interés social, generando procesos de despojo y desposesión.

El segundo aborda una reflexión sobre los espacios de acción sociopolítica, desde la perspectiva de la geografía crítica y su relación con el trabajo comunitario barrial. En este se reconocen diversos momentos de articulación de las apuestas investigativas con procesos de formación adelantados con líderes y lideresas, donde se destaca, entre otros, la dinámica “Clases a la Calle”, desarrollada en el marco del Paro Nacional Universitario (2018), como un mecanismo de llevar la universidad a los territorios a partir de los debates que le son propios a la sociedad y, por tanto, entender la construcción de la realidad desde la arista de construir de abajo hacia arriba.

La segunda parte del libro aborda los análisis adelantados en el Semillero de Investigación, así como sus conceptualizaciones y tematizaciones. Esta parte se desarrolla en tres capítulos que dan cuenta de los discursos y debates sobre la informalidad urbana y el problema de la vivienda autoproducida en América Latina, así como el fenómeno de la segregación socioespacial en Bogotá.

En cuanto a los discursos y debates sobre la informalidad urbana, se presentan las principales tendencias de análisis de la realidad socioeconómica en tres grandes grupos: miradas institucionales, miradas neomarxistas y miradas neoliberales. Sobre el problema de la vivienda autoproducida, el texto profundiza en un análisis que va mucho más allá de la relación dual formal/informal, mediante la examinación de las distintas articulaciones, así como las contradicciones que permitan comprender la informalidad urbana en cuanto complejo arreglo entre agentes urbanos e intereses presentes en los barrios autoproducidos. También trata el fenómeno de la segregación socioespacial en Bogotá, desde lo que los autores denominan *los arreglos espacio-temporales del patrón de reproducción del capital*, tomando como referente las experiencias de trabajo comunitario en el barrio La Palma, en la localidad de Suba (Bogotá).

La última parte del libro presenta algunos de los ejercicios de investigación desarrollados por estudiantes pertenecientes al Semillero de Investigación. Son tres los capítulos que se desarrollan en este apartado y que dan cuenta de tres fenómenos urbanos contemporáneos que afectan la producción del espacio y la articulación territorial más allá de las fronteras urbanas, pero de modo particular en la relación ciudad/región. Así, se presenta la producción del espacio de la informalidad en el municipio de Soacha desde la perspectiva de las dinámicas económicas de la población en estos territorios a través de la economía informal, las implicaciones de la producción del espacio urbano en la localidad de Usme (Bogotá), a partir de los procesos de expansión del suelo urbano que afectan las dinámicas del espacio rural, y lo que representa la relación con la especulación en la ciudad de Bogotá al profundizarse los procesos de privatización. Por último, se analizan las implicaciones de la reducción de la capacidad de la universidad pública y su cobertura, junto al aumento de las restricciones para el acceso de la población de más bajos ingresos a esta.

Referirse a cada autor en particular no es pertinente para esta publicación, a pesar de reconocer que cada cual tiene su identidad, su proyección y su capacidad de desarrollar y enfatizar los asuntos relativos a las desigualdades que se producen en el espacio urbano. Sin embargo, este conjunto de elaboraciones que da cuenta de tres momentos en el desarrollo y evolución del Semillero de Investigación Semillero de Investigación PUC, liderados por el geógrafo Madisson Yojan Carmona Rojas, desde una institución pública como la UPN, da cuenta de

lo que implica la materialización de una idea, el recorrido de esta y los avances en esa trayectoria. No son solamente los tres ejes temáticos que se destacan en este libro los que ha trabajado el Semillero de Investigación PUC, son mucho más y su producción académica, su conexión con los contextos socioespaciales y sus dinámicas de trabajo, pensamiento y acción continúan profundizando la perspectiva que se trazaron desde su origen, la cual no se limita a reconocer y entender los procesos urbanos contemporáneos, sino simultáneamente interactuar en algunos espacios urbanos junto con los procesos sociales y comunitarios allí manifiestos. Teoría y praxis son las aristas que marcan su quehacer y que señalan un camino a desarrollar por muchos otros escenarios donde se profundice esa relación de intercambio, coproducción de conocimiento entre academia y comunidad, para la búsqueda de alternativas a las múltiples problemáticas que generan las actuales ciudades en el ámbito latinoamericano y, particularmente, en nuestro entorno colombiano.

Considero importante señalar, como cierre de este texto, algunos de los retos por abordar en las reflexiones sobre la producción desigual del espacio urbano sobre los que se debe seguir trabajando, analizando y produciendo propuestas que apunten a garantizar, para el caso colombiano, la construcción de una verdadera paz con justicia social, estable y duradera. Ante este escenario, es indispensable que la ciudad se convierta efectivamente en ese espacio donde todos los que la habitamos podamos disfrutar de la oferta que ella brinda, y que esta no se limite a los designios del mercado sino a su construcción social, además, donde lo que se encuentre en el centro del debate y la acción no sea la reproducción del capital, sino los seres humanos. La ciudad convertida en un espacio para el buen vivir indistintamente de la condición de clase, raza, sexo o ideología.

La ciudad debe ser el espacio de la construcción colectiva de la sociedad que reconozca la diversidad y la diferencia como oportunidades y no como deficiencias. La construcción de la ciudad con su espacio urbano debe dignificar la vida humana en todas sus dimensiones, sin ningún distingo, a partir de la construcción de un modelo de ciudad que reconozca y garantice la redistribución de la riqueza que se genera en pos del bienestar general y la garantía de una calidad de vida adecuada para todos sus habitantes y comunidades.

Entre los retos por abordar en las reflexiones sobre la producción desigual del espacio urbano están la identificación de los múltiples planos de desigualdad, reconociendo que la única mirada no es la económica vinculada al ingreso, para lo cual es necesario reconocer otros como los asociados a la localización, el acceso a bienes y servicios básicos, a las aspiraciones vinculadas con el bienestar y a la calidad de vida en términos de salud, educación, recreación, empleo

entre otros. Así mismo, Dammert *et al.* (2019) señalan que es necesario incorporar distintas escalas de análisis que incluyan lo individual, los arreglos institucionales, los estructurales, las redes sociales, las prácticas e interacciones sociales, entre otras.

Para abordar el estudio de las desigualdades urbanas y su relación con la producción del espacio urbano, se proponen cuatro dimensiones de análisis: 1) sobre la persistencia de los regímenes de desigualdad como parte de la acumulación capitalista y, por ende, de urbanización; 2) el estudio de los patrones de segregación residencial; 3) el análisis de los patrones de socialización, interacción social e intercambio entre distintos grupos sociales, reconociendo el traslape de fronteras sociales y simbólicas, o a través de los distintos repertorios de acción que movilizan actores sociales, es decir, aquella ciudad practicada, y 4) el reconocimiento de las nuevas formas que asumen las desigualdades urbanas.

Es decir, el ejercicio de análisis de la producción desigual del espacio urbano debe continuar, tanto desde el Semillero de Investigación PUC, como desde otros escenarios de investigación-acción. Por ello, son pertinentes trabajos como los que aquí se presentan, donde se ponen en circulación ideas, reflexiones, experiencias y conceptos sobre el presente y el futuro de la ciudad.

Carlos Alberto Torres-Tovar

Ciudad Universitaria,

Universidad Nacional de Colombia

10 abril del 2021

Referencias

Dammer Guardia, M., Delgadillo, V. y Erazo, J. (2019). La ciudad, espacio de reproducción de las desigualdades. *Andamios*, 16(39), 7-13. <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632019000100007&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1870-0063. <https://doi.org/10.29092/uacm.v16i39.672>

Torres-Tovar, C. A. (1993). *La comunidad, el Estado y la iniciativa privada. Agentes sociales en la consolidación de la ciudad periférica informal. El caso de Ciudad Bolívar* [Tesis de Maestría en Urbanismo]. Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia.

Introducción.

Pensar la ciudad y lo urbano

Madisson Yojan Carmona Rojas

• Qué significa escribir un libro? En sus cinco años de actividades, el Semillero de Investigación: Problemas Urbanos Contemporáneos (PUC) (2015-2020) ha desarrollado una propuesta de educación geográfica que, con fundamento en la lectura y discusión de teoría urbana crítica, articula las reflexiones resultantes de este ejercicio de análisis con la vida cotidiana de los y las estudiantes. El objetivo es acompañar espacios de trabajo de colectivos barriales, juntas de acción comunal e instituciones educativas en la ciudad de Bogotá, en un diálogo permanente entre quienes día a día disputamos la ciudad para la reproducción de la vida y no para la acumulación del capital.

La experiencia adquirida durante estos cinco años de trabajo logra consolidar, con la llegada constante de estudiantes, sus inquietudes y experiencias de trabajo, una senda de reflexión que se abre paso en un escenario académico que, aunque busca mostrarse abierto a “aquello que está más allá de los muros de la universidad”, experimenta la clausura propia de las agendas de investigación urbana productivista y empirista. Con estos presupuestos en mente, nos hemos acercado a la voz de aquellos y aquellas que, desde diferentes escenarios de acción, ocupan sus días en la construcción de alternativas socioespaciales a un mundo urbano que se nos presenta, por parte de las élites, como una realidad acabada e inapelable. Esto ha permitido trazar un rumbo de reflexión-acción sobre el sentido de pensar la ciudad y lo urbano desde un programa de formación de maestros y maestras de Ciencias Sociales, y ello conduce, necesariamente, a superar la artificial división entre geografía escolar y geografía universitaria.

**

El PUC nace en 2015 como producto de la confluencia, en el marco del curso Sistemas Espaciales de América, de inquietudes de un grupo de estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Ciencias Sociales: Jessica Alejandra Gómez Gómez, Jeimy Katherine Malagón Carrillo y Carlos Andrés González Ávila, y quien coordina este libro, Madisson Yojan Carmona Rojas. El interés inicial giró en torno a un ejercicio de investigación formativa sobre la protesta urbana y el sistema Transmilenio. Nos interesaba, en una primera fase, analizar

la cobertura de los medios masivos de comunicación en las protestas por las fallas en este servicio de transporte. Sosteníamos que, en un escenario de tensión política vinculada con la alcaldía de Gustavo Petro (2012-2015), existía un tratamiento diferencial a la protesta no solo en el discurso periodístico, sino también institucional, particularmente el de la Policía Nacional. En un segundo momento, el trabajo se orientó a comprender, a partir de revisión documental, cómo el transporte público se articulaba a un proceso de producción desigual del espacio urbano, y cuáles eran las manifestaciones de esta realidad socioespacial en la vida cotidiana de los habitantes de menores ingresos de la capital, quienes en un porcentaje importante habitan en las periferias. Aun con trayectorias biográficas, y por tanto espaciales, distintas, nos encontramos en la lectura de nuestros lugares de vivienda, de nuestra infancia, en última instancia, de nuestra vida.

En el curso de Sistemas Espaciales de América, se desarrolló, retomando experiencias pasadas, una perspectiva de análisis geográfico para América Latina a partir de la teoría urbana crítica, y con ello se cuestionaron las miradas deterministas producidas no solo desde la geografía, sino desde otras disciplinas de las Ciencias Sociales, con el fin de problematizar su permanencia en los discursos de enseñanza de la geografía y también para llamar la atención sobre la necesidad (urgencia) de comprender la formación de universos urbanos marcados por la explotación, el despojo y la segregación. Los postulados del determinismo geográfico y la geografía regional poseen raíces profundas tanto en la escuela como en la universidad. Así, contrarrestar el triunfo de estas gastadas miradas hegemónicas fue una de las primeras apuestas para un proyecto de enseñanza de la geografía con perspectiva radical.

¿Por qué contra el determinismo? Después de doscientos años de prevalencia en la geografía y su enseñanza de un discurso que habla de cómo la naturaleza y el medio ambiente determinan el accionar y el carácter de los individuos, en la escuela se continúan reproduciendo rasgos de una ideología que, al presentarse bajo rasgos de objetividad, oculta los intereses y agentes de poder que la producen (Peet, 2012).

Las raíces positivistas, imperialistas y deterministas de la geografía, profundas y expansivas, señalan, como acota Neil Smith (2020), el camino hacia la división internacional del trabajo: algunas naciones por su superioridad cultural y ambiental están destinadas al desarrollo industrial, mientras que otras, en particular aquellas que sufren la inclemencia de la humedad, las altas temperaturas y precipitaciones propias del trópico, estarán destinadas a ser proveedoras de materias primas. Así, la dimensión espacial del capitalismo se volvió más relevante para el progreso inexorable de este (Peet, 2012, p. 148). Por lo anterior, es imperativo preguntarnos si es verdad entonces que estamos

condenados por nuestra geografía (Gallup, Gaviria y Lora, 2010), o, también, si existe realmente un *orden natural* que determina, en cuanto fuerza exterior e inapelable, el devenir social.

Aunque los cuestionamientos a la permanencia de esta geografía decimonónica en la escuela son extensos y complejos, lo que se busca señalar aquí es el contexto en el cual surge el interés por aprender y hacer geografía más allá de los estrechos marcos reproducidos históricamente por el establecimiento académico, el Estado y el capital. La tierra fértil para las semillas que vienen creciendo se encontraron en el campo de una geografía sensible y abierta con las contradicciones de un régimen social y político que se sostiene en la expropiación progresiva de los derechos de los más pobres (Harvey, 2007). Asumir que no hay algo en la naturaleza que induzca a la división racial o socioespacial (Smith, 2020) implica pensar en una geografía capaz de cuestionar, pero también de combatir aquellas prácticas que reproducen el sistema de desigualdad.

Tomando en consideración lo anterior, la geografía, más allá de ser un catálogo de lugares, regiones y paisajes, entra a la vida cotidiana y permite interpelarnos. Así, desde las primeras reuniones de trabajo se fueron sumando cada vez más personas con preguntas sobre los problemas de la ciudad, la emergencia de una indignación colectiva por no poder acceder a una red de transportes eficiente que los llevara de su casa a la universidad, la angustia familiar por las dificultades para adquirir vivienda y la creciente violencia del Estado ante los brotes de protesta social por el despojo de la tierra y el elevado costo de vida. Todo esto lleva a que finalmente se configure un grupo preocupado por comprender, enseñar y actuar ante los problemas diarios de la ciudad latinoamericana contemporánea que no está en crisis por su ubicación geográfica, como sostiene el determinismo, sino por los efectos de la voracidad del capital que a su paso deja una estela de expolio.

Uno de los primeros espacios de aprendizaje propuestos por el PUC fueron los ciclos de fundamentación teórica que giraron en torno a la necesidad de comprender los fundamentos del pensamiento urbano crítico: David Harvey (2007), Henri Lefebvre (2013) y Manuel Castells (2008). Estos tres autores, reconocidos por su impronta marxista, abren, desde la década de 1970, un espectro fecundo de lectura las dinámicas urbanas y su articulación con el modo de producción capitalista. Se estudió, en primer lugar, el texto *Urbanismo y desigualdad social* (David Harvey, 2007), paradigmático no solo para la teoría de la geografía, sino también para la teoría social contemporánea. Aunque su publicación fue en 1973, sus denuncias al sistema de desigualdad capitalista se tornan vigentes y pertinentes para el escenario latinoamericano. Luego, vino la lectura de Castells (2008) y Henri Lefebvre (2013), para complementar una necesaria perspectiva crítica y militante sobre la ciudad y lo urbano.

A partir de estas horas de lectura se reconoce que la ciudad no puede ser entendida de manera independiente del régimen de acumulación, pues su principal recurso –el suelo– constituye la mercancía de mayor valor para los especuladores; la renta del suelo es un factor determinante en la acumulación de excedentes a lo largo de la historia del capital (Harvey, 2007). De allí se deriva que, por ejemplo, el valor de cambio de la vivienda, asociado a las tendencias contemporáneas de financiarización, toma distancia del valor de uso, y así quienes habitamos la ciudad nos encontramos ante una estructura socioespacial que reproduce las condiciones de acumulación del capital.

Yo me di cuenta de que esto era un problema que me tocaba a mí y a mi familia cuando observé que el barrio donde vivimos lo quieren tumbar para hacer torres de apartamentos supercostosas. Las inmobiliarias dicen que nuestras casas tienen muchas falencias en su estructura, que por eso debemos dejarlas y venderlas a precios bajos. El problema es que, si hacemos eso, ¿a dónde vamos a poder volver a comprar una casa que se ajuste al presupuesto que tenemos? Ellos dicen que nuestras casas no valen nada, pero los apartamentos que van a construir sí serán de gran valor. Ellos quieren quitarle el derecho de vivienda a la gente a costa de las grandes ganancias que van a recibir por su negocio. (Paola, integrante del PUC, 2018)

En cada sesión de trabajo y discusión, las inquietudes por el destino del barrio se hacían presentes. El acorralamiento de las inmobiliarias con proyectos de renovación urbana develó una ciudad mercantilizada en la que el espacio se produce como condición de lucro, posicionándose por encima del valor de uso que defienden las personas que, a partir de la autogestión, han construido sus barrios y los han dotado de servicios públicos y demás equipamientos urbanos.

Con los testimonios de estudiantes, profesores y habitantes de las periferias urbanas de Bogotá fue posible completar el rompecabezas no solo de los estudios sobre la ciudad y lo urbano, sino también sobre la forma como se ha producido el espacio urbano en Bogotá. Además, llegan las imágenes de *Los condenados* de Luis Buñuel, *La zona* de Rodrigo Plá, *Ciudad de Dios* de Fernando Meirelles y Kátia Lundde, o *La estrategia del caracol* de Sergio Cabrera, para señalar no solo el panorama de expoliación urbana (Kowarick, 1979), sino también las posibilidades de producir una ciudad desde abajo.

**

Tener como principio orientador del trabajo del semillero PUC el reconocimiento, interpretación y comprensión de los conflictos espaciales en Bogotá llamó la atención de estudiantes que se vincularon al equipo; además, logró

captar la atención de familiares, líderes y lideresas barriales que acompañan a los jóvenes en distintos espacios de organización barrial en localidades como Suba, Usme y San Cristóbal. Y allí Brayan Nicolás Cárdenas Ávila, nuestro Brayan, representa un momento particular de apertura del PUC. Habitante del suroriente de Bogotá, rapero, líder y activista ambiental, jugador de microfútbol y estudiante de la Licenciatura, nos llama a la calle, busca que dialoguemos con los barrios, con las movilizaciones por el derecho a la ciudad, con las luchas por la educación pública. Así, cuando el activismo social y político experimenta ataques desde diversos flancos, el PUC entiende que la praxis social es experiencia viva que se construye en el cotidiano de quienes resisten y construyen alternativas.

Por otra parte, en 2017, Marisol Ávila, profesora del Departamento de Ciencias Sociales, se vincula al PUC, y en su interés, compartido por estudiantes que se incorporan al trabajo, está la preocupación por acompañar espacios de reconstrucción colectiva de la historia barrial (RCH). La integración de la profesora Marisol Ávila fomentó la creación de nuevas estrategias de formación dirigidas no solo a los estudiantes de la licenciatura, sino también para las personas externas a la universidad que empezaron a acompañar dichos escenarios de reflexión en torno a las problemáticas urbanas. La construcción de este eje de formación-acción se materializó en la creación de talleres para la reconstrucción de la memoria colectiva o RCH (Torres, 2014).

¿Por qué la memoria resulta ser un mecanismo para comprender las dinámicas urbanas? En páginas anteriores se mencionaba cómo las lecturas de fundamentación también daban paso a dialogar acerca de las historias familiares que confluyen en la lucha por adaptar sus formas de vida rural a las complicadas formas de lo urbano. Como parte de las reflexiones desarrolladas en este eje, los estudiantes reconocen que para hacer frente a la maquinaria del urbanismo neoliberal no solo basta con denunciarlo por medio de la labor académica, sino que también se necesita escuchar a quienes lideraron la construcción de una ciudad desde abajo (Torres, 2014). Esto supone identificar en dichas iniciativas organizativas que el valor de una casa no está determinado por las decisiones unilaterales del gobierno distrital o por los agentes del capital inmobiliario, sino que es el valor de uso el que prevalece en estas viviendas, el valor simbólico sostenido en el esfuerzo de levantar el primer piso, la compra de muebles, el crecimiento de la familia y la seguridad de tener casa propia.

Los talleres de RCH tienen como propósito el fomento de encuentros intergeneracionales para hablar de la construcción de sus barrios, de los cambios producto de la llegada de nuevos pobladores, de las prácticas juveniles, de las permanencias y las transformaciones, de la resistencia del pasado campesino manifestado en las huertas, los bazares y la solidaridad vecinal. Todo ello

sustentado en mecanismos activadores de la memoria como piezas fotográficas, escritura de microcuentos y espacios para compartir piezas musicales para evocar los distintos pasados que habitan en el relato de cada hombre y mujer que prestó su voz en diversas sesiones.

En particular, se han adelantado dos talleres de reconstrucción colectiva de la historia:

- a. *Comunidad de recicladores Comuneros*. Ubicada en la localidad de Suba, los hoy pobladores del barrio La Palma constituyeron en la década de 1950 la invasión más grande de Bogotá en la zona industrial de Puente Aranda. Allí persistieron durante treinta años, hasta que los proyectos de construcción de infraestructura para el Metro Bus provocaron un violento desalojo por parte de las autoridades locales durante la primera alcaldía de Antanas Mockus (1995-1997). En 1996 fueron reubicados en la localidad de Suba, donde continúan viviendo. Allí denuncian una serie de ataques hacia la integridad de la comunidad, pues son segregados por los barrios vecinos que estigmatizan la labor del reciclador. El barrio de reubicación tiene una serie de fallas estructurales que ha provocado el abandono de muchas de estas viviendas, llevándose consigo la unidad de una comunidad que ha resistido durante décadas los embates de la renovación, la segregación y la violencia estatal.
- b. *Colectiva Huertopía*. La defensa del alto Fucha ante el proyecto del Sendero de las Mariposas¹ propuesto por la alcaldía de Enrique Peñalosa (2016-2019) es uno de los ejes de esta organización barrial y popular que se caracteriza por hacer llegar las reivindicaciones de las poblaciones afectadas por este tipo de proyectos hasta escenarios como el Senado de la República. La labor de la Colectiva está centrada en denunciar cómo las administraciones distritales buscan desplazar a las comunidades que habitan los alrededores del alto Fucha bajo del discurso de la gestión del riesgo, y argumentan que las zonas urbanizadas pueden verse afectadas por su vecindad con la ladera río. Los líderes y lideresas de la colectiva, algunas de ellas vinculadas al PUC, por su parte, exponen que la verdadera razón de estos desalojos está relacionada con la valoración del paisaje natural de los cerros, el páramo y el mismo río Fucha.

1 Proyecto propuesto por la Alcaldía Distrital que consiste en construir una red de caminos con una longitud de 102 km en los Cerros Orientales para unir el municipio de Chía con la localidad de Usme. Este ha sido uno de los planes más polémicos para los colectivos ambientales de la ciudad, porque dicho corredor pondría en grave peligro la biodiversidad que habita en los cerros y el proceso de revitalización y mantenimiento de la cuenca alta del río Fucha.

Por otra parte, este trabajo de acompañamiento de trabajos de RCH en comunidades barriales de Bogotá está articulado con una perspectiva de la práctica educativa en la que se reconoce que el ejercicio de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales en la escuela representa una realidad multiescalar abierta a la acción de diversos agentes sociales. Así, en cuanto campo de tensiones, la escuela, como institución primordial en la reproducción de las relaciones sociales hegemónicas, también se dispone como espacio de posibilidades para la producción de horizontes de transformación de estas lógicas de exclusión y despojo.

Por lo anterior, es necesario señalar que el proceso de formación de licenciadas y licenciados en Ciencias Sociales pasa tanto por el reconocimiento de las realidades escolares, como por la problematización de los espacios que circundan la escuela, lo que lleva al imperativo de leer, desde la óptica de la geografía, su dimensión espacial. De esta manera, en el marco de las indagaciones desarrolladas en el PUC, los estudiantes han logrado comprender cómo los proyectos de renovación y de valorización del suelo afectan el desarrollo de infraestructura educativa cuando las tácticas del urbanismo neoliberal apuntan a la construcción de edificaciones susceptibles al consumo y a la extracción de rentas y a consolidar propuestas urbanísticas orientadas a mejorar los niveles de bienestar social. ¿Cuántas hectáreas de suelo bogotano dedicadas a la construcción de centros comerciales podrían destinarse a la construcción y mejoramiento de planteles educativos?; ¿por qué las dinámicas contemporáneas de urbanización en los países del capitalismo dependiente reproducen las condiciones de segregación socioespacial?; ¿cómo se articula la escuela con los procesos actuales de financiarización de la vida social? Preguntas que se formulan las y los docentes en formación cuando observan que, por ejemplo, en las periferias urbanas la construcción de megacolegios públicos y colegios en concesión parece estar regida más por las dinámicas del lucro que por el interés de transformación social que se espera de la educación pública.

Desde esta perspectiva, para el PUC la acción educativa no se limita al trabajo curricular, que sin duda corresponde a una parte fundamental del ejercicio docente. De allí que se haga un constante llamado a observar la escuela y todos los espacios educativos en el marco de la totalidad de las realidades de reproducción social. Las y los estudiantes de primaria y secundaria podrían así comprender, desde el marco de la geografía, que la vida cotidiana y aquello que experimentan en sus escenarios de actividad está mediado por relaciones de poder que se espacializan en formaciones socioespaciales contradictorias, manifiestas en realidades incontestables y objetivas en las cuales, aparentemente, no hay posibilidad de contestación o subversión. ¿Por qué nuestros padres o con quienes vivimos no pueden ayudarnos a hacer las tareas?; ¿por qué al terminar el bachillerato no podemos acceder a la educación superior o

solo se nos ofrece como alternativa la educación técnica?; ¿por qué en nuestros colegios se insiste en la educación en contexto, pero este pensado como marco restrictivo de las expectativas socioespaciales?; ¿por qué en las clases de geografía se reproducen marcos analíticos deterministas o neodeterministas para explicar la exclusión social?

**

Cada estudiante que integra el PUC representa una trayectoria biográfica que moviliza inquietudes y experiencias que alimentan nuestro quehacer. En este espacio de lo común, consideramos que una geografía comprometida con la justicia espacial, con el reconocimiento de la organización comunitaria y con la construcción de escenarios escolares como espacios de acción sociopolítica, nos lleva a trazar sendas abiertas al tiempo-espacio de la reproducción de la vida y no del lucro. Denunciamos, así, la existencia de una geografía decimonónica lastrada por los presupuestos dualistas de la modernidad capitalista. Buscamos construir una geografía radical de la liberación y la emancipación.

Justamente, la necesidad de comprender el espacio urbano como un producto social nos ha llevado a pensar y repensar, constantemente, los fundamentos del trabajo adelantado. Así, desde los primeros ejercicios de exposición sobre las configuración del campo de investigación en estudios urbanos y en geografía urbana en América Latina, observamos que era indispensable ampliar nuestros horizontes analíticos para así captar e incorporar en nuestras miradas las perspectivas críticas contemporáneas sobre los problemas urbanos, sin que esto implicara dejar de lado las lecturas de autores clásicos, principalmente de cuño marxista, como Henri Lefebvre (1969, 1983, 1969, 2013), David Harvey (2007) o Neil Smith (2012, 2020), o autoras como Doreen Massey (1984, 1994) y Cindi Katz (2002, 1998).

El libro está dividido en tres ejes que responden a tres momentos espaciales en la trayectoria del PUC. El primer eje-momento, está referido a los trazos que articulan la configuración del Semillero de Investigación: Problemas Urbanos Contemporáneos con experiencias de reflexión-acción en las cuales este ha participado. El segundo vincula el resultado de análisis conceptuales y temáticos sobre ámbitos de los estudios urbanos que han ocupado la atención de los espacios de formación al interior del PUC. Finalmente, el tercer eje-momento da cuenta de ejercicios de investigación desarrollados por estudiantes vinculados a diferentes *generaciones* del PUC.

En el primer eje-momento, el capítulo “A estudiar y a luchar: la resistencia contra el extractivismo urbano en los barrios del Alto Fucha, Bogotá”, Jhody Katherine Sánchez, Lina Daniela Valcárcel e Iván Felipe Murcia, integrantes de la

Colectiva Huertopía, parten de un ejercicio de síntesis de las actividades de formación y acción sociopolítica de la Colectiva en el marco de un proyecto de defensa y apropiación del territorio en el suroriente de la capital, y a partir de allí muestran sus principales líneas de acción. Para ello, las autoras y el autor desarrollan una síntesis sobre los procesos de poblamiento en los cerros orientales de Bogotá, particularmente aquellos que tienen lugar en la cuenca alta del río Fucha, y a partir de este marco espacio-temporal trazan una ruta de análisis sobre las dinámicas de despojo promovidas tanto por iniciativas de promoción del ecoturismo como el Sendero las Mariposas, como por el desarrollo de programa de vivienda de interés social. Desde esta mirada crítica sobre los impulsos de la especulación con el suelo urbano, se ofrece un panorama de la configuración de la Colectiva, en el cual se resaltan las estrategias de organización comunitarias auspiciadas por esta. Como resultado del trabajo organizativo, el capítulo incorpora una semblanza sobre la Escuela Ambiental Brayan Cárdenas, y allí muestra cómo el PUC se articula a esta iniciativa de trabajo barrial.

El capítulo “Espacios de acción sociopolítica”, de Moisés Cubillos, sitúa una necesaria discusión por el sentido de pensar, desde la perspectiva de la geografía crítica, el trabajo comunitario y barrial. Para el autor, construir reflexiones orientadas “a cuestionar la estructura desigual e injusta de los espacios urbanos” conduce a proyectar este ejercicio analítico sobre los diversos momentos de articulación de las apuestas investigativas generadas desde el espacio académico universitario, particularmente de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), con los procesos de formación adelantados con líderes y lideresas sociales. De allí se deriva que la construcción del *espacio urbano desde abajo* pasa indefectiblemente por un diálogo constante entre los actores sociales que se ubican a la orilla opuesta de los intereses del capital inmobiliario y del Estado neoliberal. El capítulo cierra con la revisión de una experiencia de formación promovida desde el PUC en el marco del paro estudiantil universitario del segundo semestre de 2018. Bajo la dinámica de clases a la calle, llevada a cabo en diversos lugares de la capital y de otras ciudades del país por diversos colectivos universitarios, Moisés Cubillos comenta cómo el Semillero consideró pertinente discutir con los transeúntes el problema de la especulación financiera y su vínculo con la producción desigual del espacio urbano particularmente relacionada con dos asuntos: la vivienda de interés social y el equipamiento educativo destinado a las instituciones de educación superior pública, golpeada por los efectos de programas gubernamentales como el “Ser pilo paga”.

En el segundo eje-momento, el capítulo “Discursos y debates sobre el sector informal urbano en América Latina”, escrito por Madisson Carmona, recoge las discusiones sobre el sector informal urbano (SIU) que se dieron en el Seminario de Formación sobre Informalidad Urbana en América Latina, realizado

por el PUC entre agosto y septiembre de 2018. A partir de un cuidadoso ejercicio de revisión bibliográfica sobre los trabajos producidos en diversas latitudes respecto a la configuración del SIU, el autor señala las principales tendencias de análisis de esta realidad socioeconómica. Sobresalen, en este panorama de análisis, tres grandes tendencias, movilizadas tanto por agentes gubernamentales como por académicos cercanos a la crítica marxista de la década de 1980: en primer lugar, se ubican los análisis institucionales (clásicos) derivados de las misiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las cuales se desprende el Programa Regional para el Empleo en América Latina y el Caribe (Prealc); en segundo lugar, se configuran las miradas neomarxistas, cuyo análisis se centra en las dinámicas del empleo encubierto; en tercer lugar, aparece la mirada neoliberal, que tiene en Hernando de Soto uno de sus principales impulsores. El capítulo cierra con un llamado a tomar distancia de las perspectivas dualistas propias del desarrollismo latinoamericano para así encontrar, desde una postura crítica, una senda de articulación entre informalidad y dinámicas urbanas contemporáneas como la financiarización urbana.

Por su parte, en el capítulo “Aproximaciones al problema de urbanización informal en América Latina”, Martín Díaz retoma las discusiones del Seminario de Formación sobre Informalidad Urbana en América Latina, para incorporarlas al análisis de las dinámicas de acceso al suelo y la vivienda en el continente. En su revisión documental, da cuenta de los principales debates sobre el problema de la vivienda, para luego identificar las líneas generales de las políticas públicas promovidas, en gran medida, por organismos internacionales, destinadas a atender las necesidades de habitación de los pobladores de menores ingresos de las urbes continentales. El autor es enfático en señalar las tensiones políticas e ideológicas que subyacen al despliegue de los grandes programas de vivienda construidos en el periodo desarrollista. Así, desde una mirada cercana a las perspectivas marxistas latinoamericanas, Martín Díaz insiste en la necesidad de comprender la informalidad urbana lejos del marco dualista propio de las perspectivas de la modernización urbana, y por ello llama a la necesidad de entenderla como un complejo arreglo de agentes urbanos e intereses en el que los límites entre lo formal e informal, particularmente en los barrios de autoconstrucción, no se manifiestan como campos de acción escindidos, sino en constante articulación y, por lo mismo, en contradicción dialéctica.

Entretanto, Jessica Gómez retoma, en el capítulo “Segregación espacial: una mirada a los pares socioeconómicos”, una de las discusiones más fecundas de los estudios urbanos en América Latina. Ahora bien, la revisión de los principales debates en torno a esta categoría analítica se enmarca en una reflexión más amplia orientada a leer la configuración de relaciones de segregación entre pares. Para avanzar en esta tarea, la autora sostiene que los procesos

urbanos contemporáneos deben leerse en el marco de la expansión de las políticas neoliberales por el continente, pero ello no como un mero encuadre histórico, sino como una posibilidad de análisis de la espacialización de los arreglos espacio-temporales propios de este patrón de reproducción del capital. En este punto, Jessica Gómez establece un puente que va de las políticas económicas del Consenso de Washington hacia el contenido ideológico del discurso que sustenta la racionalidad del libre mercado y la apertura. Así, se llega a la tensión entre colectividad e individuo, que reconoce en la producción desigual del espacio urbano una de sus manifestaciones más palpables. Con la expansión de este discurso de exacerbación de la individualidad, la autora encuentra que el estigma social que recae sobre aquellos percibidos como diferentes responde a los estímulos ideológicos del discurso neoliberal, y es en este punto que cobra sentido la discusión por la segregación entre pares. Es importante referir que este ejercicio analítico se configura a partir de las experiencias de trabajo comunitario de las que participa en PUC en la localidad de Suba, particularmente en el barrio La Palma.

El tercer eje-momento se abre con el capítulo “La producción del espacio desde la informalidad en Soacha”, de Edwin Ruiz y Michael Martínez. Aquí se retoman, al igual que en los textos de Madisson Carmona y Martín Díaz, las reflexiones surgidas del Seminario de Formación sobre Informalidad Urbana en América Latina. En este caso, los autores incorporan los elementos analíticos de las perspectivas críticas sobre informalidad urbana para acercarse a la lectura de las dinámicas del comercio informal en este municipio del área metropolitana de Bogotá. Frente a las miradas institucionales que por décadas se han encargado de perseguir o regular el comercio en vía pública sin antes comprender las dinámicas socioeconómicas y espaciales que subyacen a estas prácticas de subsistencia, Ruiz y Martínez sostienen que una de las limitaciones de las políticas para tratar el *problema del ambulante* radica en que estas se implementan desde una lógica vertical que desconoce no solo los condicionantes estructurales, sino las prácticas mismas de producción del espacio que llevan a que estas, contrario a la intención del gobierno municipal, se expandan y ocupen progresivamente nuevas zonas de actividad. El capítulo ofrece, así, una mirada crítica sobre las ventas ambulantes y el cuidado de vehículos en vía pública, y para ello se recurre a un juicioso trabajo de campo con el que se busca tensar las miradas formalistas (institucionales) con las perspectivas de quienes a diario ocupan las aceras y las calles del municipio como recurso de subsistencia.

El capítulo “Voces de la producción del espacio urbano en Usme”, de Andrés González, estructura una apuesta narrativa-analítica sobre el proceso de expansión de Bogotá hacia el borde sur, en concreto, la localidad de Usme. Tomando

como referencia insumos metodológicos y teóricos derivados de los encuentros de formación realizados por el PUC, en este texto se recorren tres momentos personales-colectivos: la historia de vida, la historia urbana y la historia barrial, y desde ellos se construye un relato en primera persona que, de la mano de la búsqueda de una casa propia para la familia, estructura un cuadro espacio-temporal sobre algunos aspectos destacables del proceso de poblamiento de la localidad de Usme. La autoconstrucción de la vivienda, mediada, conforme los ingresos familiares aumentan, por el acontecimiento de *echar la plancha* y con ello aumentar los espacios de habitación encuentra en este capítulo un lugar protagónico. Pero no es solo la autoconstrucción, sino el recuento de aquello que permite que ello se materialice: la formaleta. Andrés González recupera los testimonios de los trabajadores de la formaleta y de la mano de ellos conduce el relato a las realidades cotidianas de esta actividad económica. Enseguida enlaza la narración con los cambios en el mercado del suelo y la vivienda, hasta llegar a la Biblioteca Agroecológica El Uval, en la cual desarrolló su trabajo de grado y desde allí problematiza cómo la llegada de Metrovivienda a la localidad ha alterado no solo las dinámicas y los ritmos de autoconstrucción, sino también las prácticas agrícolas que perviven en el borde de la Localidad aun con el acoso del capital inmobiliario que no encuentra en las fincas más que suelo urbanizable.

Finalmente, el capítulo “Universidades como agentes urbanos”, escrito por Carolina Botía y Madisson Carmona, sitúa en el centro del debate urbano los vínculos entre los procesos contemporáneos de financiarización de la vida social y la configuración de las instituciones de educación superior como agentes urbanos. Habitualmente los análisis sobre el neoliberalismo y su impacto en la educación superior se han orientado a observar cómo la disminución de las transferencias económicas de los gobiernos nacionales y locales a las universidades públicas ha supuesto restricciones en el acceso para los estudiantes de ingresos bajos. Por otra parte, también es usual encontrar análisis sobre el crecimiento exponencial de instituciones privadas que han encontrado en la educación superior un espacio de oportunidad económica altamente redituable. Sin embargo, como sostienen Carolina Botía y Madisson Carmona, el espectro de estudios referidos ha descuidado comprender las dimensiones espaciales tanto del deterioro en las finanzas de las universidades públicas como del crecimiento de las universidades privadas. Por ello, en el capítulo se sostiene que para comprender las dinámicas de este sector es indispensable volver la mirada al lugar destacado que ocupan estas últimas, particularmente en las últimas décadas, en la promoción de desarrollos inmobiliarios bien sea por la vía de la expansión de sus campus como por la gestión de planes parciales amparados en los lineamientos de renovación urbana de los planes de ordenamiento territorial. Así abre un campo de problematización que se orienta a pensar cómo las dinámicas de financiarización han impactado en la educación superior.

Este libro, escrito en su mayoría por estudiantes y egresados que participan y participaron de la formación, la consolidación y el constante repensar del Semillero de Investigación: Problemas Urbanos Contemporáneos, trae las voces múltiples y plurales que han orientado el sentido de este espacio. No solo están las manos de quienes los escriben, sino la presencia de todas y todos aquellos que han considerado que es posible, desde la formación de maestras y maestros en Ciencias Sociales, propender reflexiones teóricas críticas y radicales sobre el espacio urbano, aun cuando, en su formalidad, estas no estén vinculadas con lo pedagógico y educativo. Por ello consideramos que la presente obra se orienta por el sentido último de nuestro quehacer: transformar la desigual y, en ocasiones, agobiante realidad social.

En tal medida, las reflexiones sobre la ciudad y lo urbano desarrolladas desde el PUC encuentran aquí un momento de síntesis que se suma a otros en los cuales hemos compartido aquella ciudad que día tras día disputa espacios para la reproducción de la vida. Para comprender de dónde emerge este proyecto editorial fue necesario recorrer los momentos de reflexión del PUC, en el entendido de que el proceso de maduración de ideas y perspectivas críticas sobre aquello que nos convoca no es resultado del enclaustramiento en lo individual y tampoco del espontaneísmo, sino que más bien se configura como resultado de la práctica cotidiana de reflexión-acción compartida. En este marco, el presente libro ofrece una reflexión sobre el proceso de formación (en un doble sentido) del PUC y sobre la importancia de sistematizar experiencias de trabajo; ello puede contribuir a alentar la apertura al necesario diálogo entre formas de producir horizontes sociales de lo posible.

Del aula y el barrio. Reflexiones sobre la producción desigual del espacio urbano busca responder, aunque sea de forma provisional, a la pregunta que encabeza esta introducción. Pues bien, para nosotros escribir un libro significa construir posibilidades de diálogo; por ello, ponemos en sus manos el resultado de cinco años de trabajo. Convencidos estamos de que la atención que ustedes dediquen a estas páginas será el inicio de nuevos momentos de trabajo educativo y comunitario a los que el PUC, con un espíritu abierto y solidario, espera contribuir. Así lo quiso, entre muchas otras personas, nuestro Brayan.

Referencias

- Castells, M. (2008). *La cuestión urbana*. Siglo XXI.
- Gallup, J. Gaviria, A. y Lora, E. (2010). *América Latina. ¿Condenada por su geografía?* Banco Interamericano de Desarrollo.

- Harvey, D. (2007). *Urbanismo y desigualdad social*. Siglo XXI.
- Katz, C. (2002). Vagabond capitalism and the necessity of social reproduction. *Antipode. A Radical Journal of Geography*, 33(4), 709-728.
- Kowarick, L. (1979). *A espoliação urbana*. Paz e Terra.
- Lefebvre, H. (1969). *El derecho a la ciudad*. Península.
- Lefebvre, H. (1983). *La revolución urbana*. Alianza.
- Lefebvre, H. (2013). *La producción del espacio*. Capitán Swing.
- Massey, D. (1994). *Space, place and gender*. Polity Press.
- Massey, D. (1984). *Spatial divisions of labour: social structures and the geography of production*. Macmillan.
- Peet, R. (2012). Desigualdad y pobreza: una teoría geográfico marxista. En N. Benach (ed.), *Richard Peet. Geografía contra el neoliberalismo* (pp. 95-113). Icaria.
- Smith, N. (2012). *La nueva frontera urbana. Ciudad revanchista y gentrificación*. Traficantes de Sueños.
- Smith, N. (2020). *Desarrollo desigual. Naturaleza, capital y la producción del espacio*. Traficantes de Sueños.
- Torres, A. (2014). *Hacer historia desde abajo y desde el sur*. Ediciones Desde Abajo.

Primera parte

Espacios de formación-acción

Capítulo 1. “A estudiar y a luchar”: la resistencia contra el extractivismo urbano en los barrios del Alto Fucha, Bogotá

*Jhody Katherine Sánchez, Lina Daniela Valcárcel e Iván Felipe Murcia
Integrantes de la Colectiva Huertopía*

La presente experiencia se enmarca en las tensiones territoriales del Alto Fucha, un territorio en los cerros orientales de Bogotá que ha sido continuamente presionado, a través de las políticas gubernamentales e intereses privados, al despojo de sus habitantes. Este conflicto puede ser caracterizado en tres vías que se conectan entre sí: 1) la lucha que llevan los habitantes por la permanencia en el territorio, contra la administración distrital y el capital privado. 2) Una lucha por el reconocimiento y la reivindicación de formas distintas de habitar la ciudad, entendiendo que esta no es ni debe ser vista en sí misma como un espacio totalmente urbano, sino que, por el contrario, coexisten espacios como el territorio Alto Fucha que, si bien están inmersos de cierta manera en las dinámicas de la ciudad urbana, tienen también características territoriales y vivenciales que obedecen a dinámicas propias de la ruralidad. 3) La lucha por detener el crecimiento urbano de la ciudad, lo cual, desde el territorio, se entiende dentro de un marco de justicia socioambiental, dado que nuestro fundamento es la defensa del río Fucha, los cerros orientales y el páramo de Cruz Verde.

Los cerros orientales y la configuración espacial de sus barrios

Los cerros orientales de Bogotá ocupan un área de aproximadamente 14 000 hectáreas. Antes de ser declarada en 1977 como Reserva Forestal Bosque Oriental (en adelante Reserva), existían innumerables minas de extracción de arenisca

y carbón, los cuales atrofiaron gran parte de la flora y fauna nativa del bosque alto andino que los cubría. Quienes vivían en los cerros en su mayoría eran entonces los trabajadores de las minas o campesinos.

La historia de los barrios que conforman los cerros orientales de Bogotá se encuentra dentro de los procesos de urbanización informal que caracterizan las ciudades de América Latina; estos se gestan en la necesidad de acceso al suelo y la vivienda urbana por familias empobrecidas (personas de bajos ingresos) (Torres, 2012), que ven la posibilidad de acceso a la vivienda a través de lo que se denomina la *urbanización pirata*: parcelación de un terreno que posteriormente se comercializa de manera irregular mediante una transacción de compra-venta y donde predomina la autoconstrucción; así, se adquieren predios con o sin título de propiedad pero con restricciones urbanísticas.

Tras una larga lucha por la legalización de sus barrios, en 2005 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) propone a través de la Resolución 463:

[...] establecer una franja de adecuación entre la reserva forestal protectora y el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá, que actúe como espacio de consolidación de la estructura urbana y como zona de amortiguación y de contención definitiva de los procesos de urbanización de los cerros orientales. (MAVDT, 2005, p. 6)

Allí se extrae parte de la Reserva para lograr que la mayoría de los barrios informales puedan entrar en proceso de legalización; sin embargo, esto no se viabiliza en su totalidad.

Esta configuración de lo que se denomina la *ciudad popular*, en el contexto de un capitalismo periférico, ha estado también caracterizada por la lucha colectiva de los pobladores urbanos para buscar la formalización de los barrios, servicios públicos, equipamientos, etc. En otras palabras, la ausencia y vulneración del Estado ante las necesidades de los pobladores urbanos populares ha constituido un escenario de lucha constante por la adquisición y defensa de sus derechos, en principio, por el reconocimiento como habitantes urbanos bajo la idea de legalización, pero, posteriormente, y debido a las dinámicas del capital de maximización de la renta del suelo, orientados a la defensa y resistencia social y ambiental (Torres, 2006).

Gracias a estas luchas organizadas, en 2013 el Fallo del Consejo de Estado establece unas líneas generales que van a concretar la propuesta de la Franja de Adecuación y así darle paso a la legalización de los barrios de los cerros, tres de ellos ubicados en lo que denominamos el territorio Alto Fucha.

Alto Fucha: legalización y despojo

Este territorio se caracteriza por estar en un espacio de transición entre lo urbano y lo rural, administrativamente forma parte de la localidad de San Cristóbal, en la unidad de planeamiento zonal (UPZ) San Blas y se conforma por siete barrios: Aguas Claras, Los Laureles, La Cecilia, Gran Colombia, Manila, Montecarlo y San Cristóbal Alto.

En 2015, se dan a conocer las resoluciones definitivas de legalización de los barrios La Cecilia, Los Laureles y Aguas Claras, y, con estas, se presenta un conflicto territorial con múltiples afectaciones. Según la Corporación Autónoma Regional (CAR), a través de la Resolución 1078 de 2015, el barrio La Cecilia se encuentra afectado por el paso de un hilo de agua denominado drenaje del río Fucha, el cual, por su importancia, debe ser conservado y por tanto se deben de reubicar los predios que se encuentran cercanos. Por su parte, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger) emite el concepto técnico N.º CT-7901 de diciembre de 2014 que concluye que los barrios Los Laureles y Aguas Claras se encuentran afectados por amenaza media y alta por fenómenos de remoción en masa y, por ende, deben ser excluidos de la legalización de predios para ser incluidos en programas de reasentamiento de familias.

Ahora bien, esta legalización y las particularidades dadas en cada concepto técnico ponen de manifiesto las contradicciones existentes dentro de la configuración urbana de la ciudad neoliberal, y evidencian la distancia entre la práctica urbana y la institucionalidad. Respecto al *riesgo*, por ejemplo, se denota la omisión por parte del Estado de su responsabilidad en cuanto a la producción y reproducción de condiciones de vulnerabilidad (García, 2005), manifiestas por un lado, en las pocas oportunidades de acceso al suelo y por ende a la vivienda urbana por parte de sectores populares, y, por otro lado, en relación con la poca voluntad política de respetar los derechos adquiridos dentro del fallo de consejo de Estado de 2013 y ahondar en la posibilidad de una mitigación comunitaria del *riesgo*.

Así, a raíz de la amenaza de reasentamiento o desalojo, también se evidencia en los otros barrios del Alto Fucha que algunos habitantes deciden conformar la Comisión en Defensa del Territorio Fucha en 2015, con el fin de emprender acciones legales por medio de las cuales se exigen claridades sobre el impacto real de estas medidas, y se solicita que se adelanten la socialización y participación efectivas frente a los diagnósticos de riesgo y desalojo de la comunidad. Desde entonces, las actividades de la Comisión se enfocan en el fortalecimiento del tejido comunitario, a través de la construcción social del hábitat y la lucha por el *derecho a la ciudad*.

Entre el ecoturismo y la especulación inmobiliaria

La legalización entra a ordenar los barrios para el capital con el apoyo del Estado. La administración de Enrique Peñalosa impulsó una serie de proyectos de renovación urbana que pretendían profundizar dinámicas de segregación socioespacial: casos como la Reserva Thomas van der Hammen, Lagos de Torca, Lagos de Tunjuelo y, en nuestro caso, el Sendero de las Mariposas, se convierten en la punta de lanza de un programa político centrado en la acumulación del sector financiero.

El Sendero de las Mariposas es un proyecto en el cual están involucrados los 64 barrios que colindan con los cerros en cinco localidades. Este proyecto fue presentado por la Secretaría de Ambiente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en 2018:

El proyecto del Sendero de los Cerros Orientales de Bogotá se desarrollará a lo largo de la ladera occidental de los Cerros Orientales de Bogotá e inicia al norte de la ciudad, en la localidad de Usaquén en el sector denominado Parques de Torca y finaliza al sur en la localidad de Usme, sobre la calle 138B sur, aledaño a la antigua Cervecería Alemana. El trazado del sendero atraviesa de norte a sur cinco (5) localidades de la ciudad de Bogotá, 64 barrios y se encuentra dentro de la Reserva Forestal de los Cerros Orientales de Bogotá. (ANLA, 2018, p. 3)

Desde nuestra perspectiva, este proyecto encubre los planes de renovación urbana y entrega al sector inmobiliario los barrios de los cerros para que se profundicen la especulación y gentrificación:

[Es] una estrategia en donde intervienen a grandes rasgos dos tipos de agentes, el Estado y las entidades financieras. El primero con toda su capacidad de movilización deliberada de capital hacia áreas específicas y su poder para crear y orientar la política y la normativa urbanística que permite el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o vivienda. (López, 2014, p. 6, citado por Benavides, 2017, p. 31)

Por su lado las entidades financieras son agentes con capacidad de crear con apoyo del Estado, instituciones, instrumentos y estrategias para apalancar tanto los desarrollos inmobiliarios privados de inversionistas nacionales o internacionales como para agilizar la gestión y comercialización de los proyectos de urbanización, vía facilidades de crédito necesarios para su funcionamiento. Todo esto en función de la obtención de la maximización y circulación de los beneficios generados por los costes de localización y el aprovechamiento de áreas servidas bajo las lógicas de productividad. (Benavides, 2017, p. 31)

Por otra parte, el Parque Lineal Río Fucha pretende ser una ciclorruta que borde el río Fucha desde su cuenca alta hasta la desembocadura en el río Bogotá,

[...] serán 17 kilómetros de ciclorrutas y senderos peatonales los que se construirán, bajo la supervisión de la Empresa de Acueducto. En el corredor se encontrarán más de 16 hectáreas que integran el río con el espacio público del entorno, a través de senderos, siete plazoletas y 11 puentes que servirán como conectores entre barrios, cruzando el cuerpo de agua, generando integración y garantizando la continuidad de la ciclorruta. (ElTiempo.com, 2019)

Estos proyectos no están aislados de una perspectiva de ciudad, ni de intereses financieros. A través del espacio público se cambia el uso del suelo, por esto ambas iniciativas se encuentran inmersas en el “Proyecto de Acuerdo” del Plan de Ordenamiento Territorial propuesto por la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) del 2019.

Es de este modo que el espacio público se ve alterado por nuevos usos que el capital inmobiliario le asigna de acuerdo con su potencial económico; de ser un lugar de encuentro y socialización de la población, poco a poco se convierte en espacio privado de consumo, accesible solo a aquellos que pueden pagar la nueva oferta de vivienda, servicios y comercio instalado, encareciendo el suelo para amplios sectores de la población que la mayoría de las veces, se ven obligados a salir de estas zonas revalorizadas y elitizadas. (Gómez, 2018, p. 4)

La venta del paisaje privilegiado como forma de estatus, también conocido como *gentrificación verde*, es otro de los efectos de que estos proyectos se lleven a cabo:

[...] el verde condensa una serie de ideas y significados asociados a un estilo de vida vinculado a la tierra y la naturaleza. No obstante, estos se traducen en la realidad como formas de vida marcadamente urbanas pero enmarcadas en zonas rururbanas que permiten un cierto grado de contemplación de la naturaleza. Estos conjuntos residenciales y sus estilos de vida asociados están reservados exclusivamente a un cierto grupo de población [...]. Es decir, esta forma de vida está de moda para estos grupos sociales, entre quienes poseer este tipo de residencias se asocia con un alto estatus y prestigio. Por último, es importante señalar que la idealización de esta forma de vida rururbana es promovida en gran parte por los agentes inmobiliarios quienes obtienen una gran plusvalía en la ejecución de este tipo de proyectos. En últimas, la conjunción de todos estos procesos contribuye de manera fundamental en los procesos de gentrificación rururbana de estas zonas, lo cual se traduce en una serie de efectos para las poblaciones. (Fioravanti, García y Holguín, 2016, p. 108)

La gentrificación verde fortalece un concepto general que es extractivismo urbano con la apropiación de excedentes de capital que se dan en y a través del

espacio urbano, y cuya característica fundamental es que, en líneas generales, esos excedentes que se apropian privadamente (ligados a poderes concentrados) se producen de forma colectiva. Así, el capital se apropia en los espacios urbanos, bajo las lógicas predatorias de los paisajes operacionales (Brenner, 2018, p. 241) de las *commodities*, de rentas que contribuyen a aumentar los márgenes de ganancia de los grandes monopolios.

Así surge la necesidad de la organización comunitaria en el Alto Fucha y su necesidad de reclamar el *derecho a la ciudad*, fundamentado por teóricos como Henri Lefebvre (2017) y David Harvey (2013):

El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos. Es, además, un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. (Harvey, 2013, p. 20)

La organización comunitaria: Huertopía como parte de la Comisión en Defensa del Territorio Alto Fucha

La Colectiva Huertopía es una organización social y comunitaria conformada por niños, niñas, adolescentes, jóvenes y vecinos interesados en la construcción de propuestas de habitabilidad sustentable en la ciudad, principalmente, en los cerros orientales de Bogotá, pero con miras a tejer con otras experiencias en la ciudad. Así, el primer foco de actividad es el territorio Alto Fucha ubicado en la localidad de San Cristóbal, una de las localidades de Bogotá que colinda con los Cerros Orientales.

La apuesta política y comunitaria de Huertopía surge de un posicionamiento crítico respecto a la configuración urbana de la ciudad de Bogotá; así, en el transcurso de la experiencia colectiva hemos tenido la necesidad de comprendernos a través de la conformación de los barrios del Alto Fucha, de la configuración de los sectores populares y periféricos de Bogotá, y de cómo se enfrentan las múltiples tensiones que surgen al anteponerse a la planeación urbana neoliberal.

Como Colectiva Huertopía nos organizamos de manera horizontal en la toma de decisiones y proyección de acciones en el territorio, y para ello aplicamos el principio zapatista de “obedecer y no mandar”, “representar y no suplantar”, “convencer y no vencer” y “proponer y no imponer”, con los cuales dirimimos las discusiones. De esta forma logramos puntos de consenso entre todos los participantes, quienes tienen voz y voto sin ningún tipo de privilegio o censura. Hoy, la Colectiva Huertopía, de la mano de la Comisión y de todos los

actores interesados, trabaja para consolidar el Alto Fucha y otros territorios de la ciudad como un *ecoterritorio*; una apuesta de habitabilidad sustentable que se contrapone a la manera mercantil de ocupar y de hacer ciudad, y por esto cuestionamos las relaciones sociales y ambientales hegemónicas.

Ecoterritorios: el plan alternativo para habitar la ciudad en los cerros

Los ecoterritorios tienen su base en el Plan Alternativo Ecobarrial del Alto Fucha –en adelante Plan Alternativo–. Este surge como muestra de que “es el espacio y el tiempo que vivimos lo que nos define, es donde nos conformamos como seres, donde constituimos nuestra identidad y construimos nuestra personalidad y particular visión del mundo” (Tamayo y Wildner, 2005, p. 20), es lo que permite generar ese vínculo fundamental entre espacio urbano y sujetos, en últimas, es nuestro plan para permanecer y ejercer el derecho a la ciudad.

Para generar los lineamientos del Plan Alternativo, la Comisión diseñó una serie de talleres desde la educación popular, entendiendo que es “un proceso educativo que implica la participación popular en búsqueda teórica, en la comprensión de su realidad y organización de una acción con vistas a la transformación social de las comunidades” (Pérez *et al.*, 2013, p. 42). Esto se llevó a cabo en espacios asamblearios, de tal manera que la comunidad discutiera cómo querían sus barrios y qué programas consideraban necesarios implementar, esto se organizó en ejes y se consolidó en un documento que hasta hoy no ha tenido la aprobación de ninguna entidad institucional:

La Comisión en Defensa del Territorio Fucha y las Juntas de Acción Comunal expresamos nuestra preocupación por las tensiones y presiones que viven las comunidades en el territorio con respecto a los planes, programas y proyectos de la Administración Distrital para nuestros barrios. Por ello, hemos decidido como habitantes construir los Lineamientos Comunitarios para una Política Integral de Mejoramiento Territorial del Alto Fucha, a partir del ejercicio democrático fundamentado en la participación directa, el diálogo y el consenso, para dar cuenta de las dificultades que nos imponen las políticas establecidas inconsultamente para alcanzar una vida digna. (Comisión en defensa del Alto Fucha, 2018)

Para señalar de manera general lo que es un *ecoterritorio*, es imperativo remitirnos a investigaciones como las de Montañez (1998), quien retoma a Santos (1997) y señala aspectos relevantes del espacio tales como que: 1) es una producción histórica y 2) una construcción social, es lo material lo que lo hace perdurar en el tiempo y da cuenta de un conjunto de formas espaciales representativas de relaciones sociales pasadas y presentes integradas a una estructura social. Pero la

lucha por la permanencia de las personas en el territorio no está mediada únicamente por el plano de las ideas y la política (territorio inmaterial), también está anclada a una dimensión sensible, sensorial, perceptual del espacio entendido como experiencia del individuo (Tuan, 1977, citado por Yory, 2003).

La topofilia es ese sentimiento que liga a los seres humanos a aquellos lugares con los cuales, por una u otra razón, se sienten identificados. Yory (2003) la define como algo que va más allá, los que nunca han tenido nada (los pobres o excluidos) y que por tanto conservan y defienden como única propiedad; a fin de cuentas, *el sentido de pertenencia* no es otra cosa que una autoafirmación cultural y, de tal suerte, una especie de *declaración de existencia* (Yory, 2003, p. 402). Entonces, más allá de la emocionalidad que se reduce a una perspectiva psicológica individual, se propone la topofilia como experiencia ontológica del sujeto, *el ser en el mundo*.

Desde esta perspectiva se entiende el territorio dentro del ecoterritorio. Lo *eco* pasa por los sentidos de la sustentabilidad dentro del campo de la ecología política, la cual “problematiza los principios éticos, epistemológicos, ontológicos, atrayéndolos de su campo originario de la metafísica y de la filosofía, al del conflicto de intereses en torno a la apropiación social de la naturaleza” (Leff, 2003). Esto implica

- a) Pasar de la comprensión y la intervención social sobre la naturaleza centralizados en el campo privilegiado de las ciencias y de la racionalidad dominante para pensar la sustentabilidad desde el encuentro de seres constituidos por saberes.
- b) La construcción de una racionalidad ambiental dentro de un campo conflictivo de intereses y concepciones diversos, que pone en juego una disputa sobre los sentidos de la sustentabilidad, problematizando el lugar del conocimiento, de la racionalidad, del saber y de la ética en la construcción de un futuro sustentable.
- c) El pensar y construir sociedades sustentables trascendiendo la relación del conocimiento con la objetividad [...] abriendo la puerta de la historia desde la relación ética del ser con lo otro. (Leff, 2003)

Nos entendemos como Ecoterritorio Alto Fucha atendiendo a una necesidad de darle mayor alcance a los ecobarrios (Álvarez, 2010), pasando de ser lugares ya establecidos administrativamente por la planeación gubernamental, a ser lugares que comparten una identidad más sólida en sus pobladores. El Ecoterritorio, si bien parte de unas particularidades concretas del lugar, invita a reconocer lo común de nuestros barrios aledaños en los cerros y la ciudad para potenciar las luchas y mantener nuestro ser en el mundo. No queremos promover una idea fragmentada de las luchas territoriales, ni del ecosistema. De manera que el Ecoterritorio en su planeación debe tener en cuenta las dinámicas ecosistémicas y la biodiversidad, comprender la conexión entre los diferentes sistemas hídricos, montañosos y tróficos, es decir, tienen en cuenta otras formas de vida diferentes a la humana. Por ello, su base radica en una ética del cuidado de la vida que promueva estrategias sustentables en las dimensiones del Ecobarrio que se retoman en los Ecoterritorios con sus matices.

La ética del cuidado de la vida pasa por una reflexión constante que conlleve a deconstruir en un mediano plazo las relaciones sociales actuales basadas en el patriarcado, reconociendo que históricamente han existido unas relaciones de poder jerárquicas que enaltecen al hombre, blanco europeo y que recaen en el *modus operandi* de todos los aspectos de la vida cotidiana. De ahí que la ética de la vida necesariamente debe partir de un principio antipatriarcal, esto es, que se fundamenten en el respeto por todas las formas de vida, la diversidad biológica, cultural y sexual, fortaleciendo las relaciones horizontales, apuntando a la toma de decisiones consensuadas.

Así mismo, en los ecoterritorios el valor de uso de los habitantes debe prevalecer sobre el valor de cambio. Lo anterior obedece a lo que propone el geógrafo marxista Harvey (2017): “el término valor de uso puede ser aplicado pues a todo tipo de objetos, actividades y acontecimientos en determinados contextos sociales y naturales”, teniendo en cuenta a Marx (1890) cuando afirma que “el valor de uso no tiene valor más que para el uso y no adquiere realidad más que en el consumo o disfrute” (Marx, 2000, p. 6). Entonces, un valor de uso que satisface las necesidades del disfrute o la subsistencia propias no se puede convertir en mercancía, a menos que pase a manos de otro y esté mediado por un valor de cambio. Lo anterior tiene mayor complejidad cuando de lo que se habla es del valor de uso del espacio y no de un simple objeto, porque el suelo y sus mejoras no pueden ser trasladados como otras mercancías, esta localización fija confiere privilegios monopolistas a la persona que posee el derecho a determinar el uso de dicha localización (Harvey, 2017). En ese sentido, el valor de uso puede variar para cada actor del territorio, lo que puede conllevar o no a un valor de cambio.

Para el caso del Alto Fucha, lo que se encuentra en tensión es que los valores de uso de los habitantes están en lo que Harvey denomina “sistema de sostén de vida”; el valor de uso en su sentido cotidiano “queda fuera de la esfera de la economía política”. Por el contrario, las constructoras y las empresas turísticas crean valores de uso para otros a fin de conseguir valores de cambio para sí mismos. Cada actor concibe el valor de uso de manera diferente, por eso en el Ecoterritorio se insiste en darle relevancia al valor de uso de los habitantes de los cerros, teniendo en cuenta que:

El espacio es un valor de uso, pero más aún es tiempo, con el cual está íntimamente vinculado, porque el tiempo es nuestra vida, nuestro valor de uso fundamental. El tiempo ha desaparecido en el espacio social de la modernidad. El tiempo vivido pierde la forma y el interés social a excepción del tiempo de trabajo. El espacio económico subordina al tiempo, mientras que el espacio político lo erradica, ya que está amenazando a las relaciones de poder existentes. (Lefebvre, 1976)

Finalmente, dentro de los ejes fundamentales del Ecoterritorio se encuentra la Educación Popular Ambiental (EPA), la cual permite llevar estas discusiones con metodologías pertinentes a los habitantes para que sean reflexionadas y nutridas sus ideas y sentires. La EPA tiene un enfoque pedagógico ligado a la vida cotidiana, en el marco de una ética por la vida y de respeto por la naturaleza, promoviendo la construcción colectiva de nuevas acciones y valores alternativos a los imperantes en cuanto a la relación entre los seres humanos, los seres humanos y los demás seres vivos, y entre los seres humanos y el planeta que habitamos (Fuentes, 2007). Lo anterior se entiende porque somos seres sociales, cargados de cultura, con dinámicas políticas y económicas diversas, pero retomando y volviendo al origen, esto es, entender que somos naturaleza, somos animales que como cualquier organismo influye en las dinámicas energéticas del ecosistema, pero también somos animales sociales capaces de producir el espacio en el que habitamos.

Universidad en el barrio: la Escuela Ambiental Guardianes/as de los Cerros “Brayan Cárdenas”, una experiencia desde la EPA por el derecho a la ciudad

Teniendo en cuenta lo expuesto en los anteriores apartados, se vio la necesidad de realizar talleres de formación con los vecinos enfocados en el derecho a la ciudad desde el contexto local y distrital. Los talleres pretendían analizar la relación entre los proyectos de renovación urbana: como lo es el Parque Lineal Río Fucha y el Sendero de las Mariposas que involucra a los cerros orientales en general, con el fin de convertirlo en un sendero ecoturístico enmarcado en los procesos de *gentrificación verde* y metropolización con vista hacia una megalopolización de Bogotá. Partiendo de ello, en 2018, de la mano del Semillero Problemas Urbanos Contemporáneos (PUC), en memoria de Brayan Cárdenas, junto con la alianza y acompañamiento del Transnational Institute, se construyó un espacio de escuela popular que desde el apoyo pedagógico permitió dar un norte valioso a las discusiones de ciudad en el Alto Fucha.

La EPA, fundamentada en la educación popular, genera diálogos que permiten reflexionar sobre lo cotidiano de manera crítica, develando cómo las dinámicas estructurales inciden sobre nuestras vidas, promueve la empatía, el aprender de los demás y la construcción de afectos que permitan reconocernos en los otros. Por esto, la Escuela Ambiental Guardianes/as de los Cerros “Brayan Cárdenas”, tuvo como temática principal la memoria y el territorio. Para su desarrollo se propusieron cuatro sesiones a las que asistieron personas tanto del Alto Fucha, como habitantes de otras localidades de la ciudad con el objetivo de discutir las diversas manifestaciones de extractivismo urbano en Bogotá.

La memoria y el territorio, como ejes transversales en la Escuela, tejieron lazos entre la memoria individual, colectiva e histórica, ya que las memorias individuales se inscriben en el seno de la memoria colectiva de un grupo de pertenencia social primario (Halbwachs, 1994 [1925], p. 123, citado por Aravena, 2003). De esta manera se generaron avances argumentativos en los discursos y acercó las historias entre los vecinos para continuar hacia un horizonte común. A continuación se presentan de manera general los temas y resultados de las cuatro sesiones.

Historia y memoria barrial

La Escuela Ambiental partió de la discusión acerca de la ruralidad del territorio, sus historias, consolidación y prácticas contemporáneas, contrapuestas al modelo de ciudad dominante, a través de la reconstrucción de la memoria barrial de la comunidad. Esto se generó a través de un ejercicio de cartografía social que consiste en la reconstrucción de la memoria colectiva a través de relatos hechos con fotografías u objetos, lo que permitió evidenciar las similitudes de algunos relatos, los vínculos, las relaciones establecidas con el entorno natural, el cambio de los lugares a través del tiempo, la lucha por la construcción de sus casas, servicios públicos y legalización de los barrios, etc.

En ese sentido, cobra relevancia la historia barrial, la cual tiene como propósito exponer relatos individuales y colectivos que han sido invisibilizados bajo una idea de desarrollo que es expansiva, comercial y urbana, que se impone de manera generalizada y excluyente respecto al espacio y la ruralidad, sin tener en cuenta los derechos y las particularidades de los territorios y sus habitantes.

De esta manera, uno de los principales aprendizajes se realizó en torno a la consolidación de criterios para la construcción de la memoria barrial, considerando, por un lado, los lugares, el tiempo y los objetos como ejes fundamentales para pensar la memoria, y por otro, ampliando la reflexión acerca de las propuestas comunitarias y de las organizaciones sociales, ambientales y juveniles que tienen como horizonte avanzar hacia la consolidación de los ecoterritorios como alternativa para la permanencia desde la justicia ambiental.

Esta sesión también fue una invitación a de-construir la historia única, reivindicando el ejercicio de la historia oral y barrial participando activamente de esta construcción como protagonistas y portadores de la historia que no forma parte del discurso hegemónico (Parada, 2014), lo que permitió además el reconocimiento de la riqueza natural con la que cuentan el territorio, el río, la montaña, el canto de las aves, el aire puro y el silencio, pero también las prácticas asociadas al disfrute del espacio como el juego en la calle, paseos familiares al río, o caminatas a la montaña, recetas medicinales con plantas del bosque, entre otras que llevaron a:

Reconocer el valor simbólico de un ecosistema y la conectividad que este tiene con otras para la fluidez orgánica de la vida y reconocer al mismo tiempo que la pérdida de alguno de los elementos de este ecosistema es la pérdida de un conocimiento acumulado durante cientos de años se constituyen en la sabiduría y la memoria que guardan estos otros lenguajes. (Censat, 2018, p. 27)

Usos del suelo y especulación inmobiliaria

Esta sesión se centró en la especulación inmobiliaria y el papel que presentan las periferias rurales en la consolidación urbana, en la lógica de la ciudad capitalista. Allí se discutieron las tensiones existentes en los territorios *rururbanos*, es decir, entre la consolidación de los espacios del capital y espacios comunitarios donde priman las relaciones colectivas y con la naturaleza.

Por un lado, encontramos que, dado el crecimiento informal extendido a las periferias de la ciudad latinoamericana, el proceso de conurbación se ha consolidado de manera poco planeada, quedando las ciudades con espacios rurales donde los procesos extractivos de minería y explotación petrolera están presentes y se mantienen, dada la forma como se inserta la región al mercado mundial. En este sentido, encontramos una posición que explica el extractivismo urbano desde la actividad pura de arrebatar *recursos naturales* que están insertos en el entramado de las grandes ciudades del tercer mundo.

Sin embargo, el extractivismo urbano se asume como un proceso que está mediado por la forma de acumulación del capitalismo en su fase neoliberal, en una lógica que expresa cómo las manifestaciones del poder económico se despliegan en lo político y en el espacio urbano. En este sentido, Viale (2017) explica que en las ciudades no son los terratenientes sojeros, ni las megaminerías, ni las petroleras, sino que es la especulación inmobiliaria la que expulsa y aglutina población, concentra riquezas, produce desplazamientos de personas, se apropia de lo público, provoca daños ambientales y desafía a la naturaleza, todo esto en un marco de degradación social e institucional. Se nutre de la misma lógica extractivista que los monocultivos y la megaminería, dando resultados similares: destrucción de la multiplicidad, acumulación y reconfiguración negativa de los territorios urbanos. Las tierras, los inmuebles del Estado y los espacios verdes son convertidos por la especulación inmobiliaria en la pata urbana de la desposesión, aquella de la que habla David Harvey y nos ayuda a comprender los procesos de acumulación por desposesión que se dan con la megaminería en la cordillera andina o con el agronegocio en el campo.

Se encontró que, en el Alto Fucha, existen disputas claras por el uso del suelo, ejemplo de ello fue el proyecto inmobiliario liderado por Compensar, donde los lugares comunitarios y los escasos espacios públicos se ven afectados y reducidos cada vez más por el interés del capital financiero que afecta drásticamente

las prácticas rurales de los barrios y aumenta el valor del suelo. Estas formas de apropiación privada se ven fortalecidas por las prácticas predatoras del modelo de financiarización (Harvey, 2004) y la inserción en el sistema de crédito; en el mundo urbano, se expresa de manera principal a partir del mercado inmobiliario y el desarrollo del mercado de hipotecas *basura*, que terminan por expropiar a las clases marginales y beneficiar la acumulación del sector bancario.

Planeación local y distrital

En esta sesión, uno de los principales aprendizajes giró en torno a la comprensión de los intereses del capital detrás de la planificación de la ciudad y la región. En este sentido, se intentó analizar los impactos del *por* sobre los Cerros Orientales y la ruralidad, a través de servicios inmobiliarios y ambientales en Bogotá.

La dimensión contemporánea del ordenamiento territorial enfrenta las lógicas de globalización de la inversión transnacional con los esfuerzos comunitarios de relocalización del territorio. El corporativismo se vincula con la política neoliberal, como una puerta para el capital; el ordenamiento territorial se convierte en un orden para los negocios. Es posible advertir la incidencia del orden transnacional si se observa el avance discursivo de la perspectiva neoliberal de la descentralización; la clave del proyecto economicista del capital es el espacio, el territorio, la nueva dimensión de la acumulación (Harvey, 2007).

En síntesis, la estructura de acumulación capitalista, que guía las políticas públicas sobre el espacio, y en especial, sobre el uso del suelo, reproduce una estructura de concentración del poder de decisión por parte de sectores económicos y a su turno, configura una naturaleza de exclusión de la concertación y de la participación del poder local, permitiendo la apropiación del espacio y el territorio para el desarrollo de los proyectos del capital nacional y transnacional, afectando así las dimensiones políticas, culturales, ecológicas y sociales de la ordenación del territorio.

Este tipo de orientación política, económica y jurídica se expresa de manera concreta en las políticas distritales sobre el uso del suelo, tanto en Bogotá, como en la zona metropolitana (municipios aledaños) lo cual afecta a las comunidades asentadas en los bordes rurales y rururbanos, y a la Estructura Ecológica Principal.

Capitalismo verde y soberanía alimentaria

El deterioro ambiental al que ha llevado el modelo económico imperante ha creado estrategias de mercantilización de la naturaleza impulsada por la economía verde; este modelo se materializa sobre el territorio Alto Fucha a través de los pagos por servicios ambientales (PSA) o la contraparte identificada por la comunidad, los impuestos por servicios ambientales.

Los PSA desde la década de 1980 han crecido, dada la importancia del denominado *conservacionismo de mercado* (Smith, 1995, citado por Gómez, 2011), que conceptúa los servicios ambientales no mercantiles como externalidades positivas a ser valoradas e incorporadas en los sistemas de precios mediante mecanismos fiscales y financieros (Corbera *et al.*, 2007, citados por Gómez, 2011). Esto significa que lo que en la economía clásica tenía exclusivamente valor de uso, desde la perspectiva neoliberal pasa a tener valor de cambio, es decir, se convierte en mercancía sin ser producto del trabajo humano, en palabras de Gómez (2011):

Una vez transmutados en mercancías dichas funciones son incorporadas a los procesos de acumulación de capital y puestas al servicio el crecimiento económico. Desde esta óptica los PSA pueden ser entendidos como una nueva forma de *acumulación por desposesión* (Harvey, 2004; Prudham, 2007), mediante la apropiación mercantil de nuevos medios ecológicos de subsistencia. (P. 46)

Lo peligroso de esto, primero, es la disociación entre el ser humano y la naturaleza, pues esta perspectiva es altamente antropocéntrica y desconoce la relación que históricamente han tenido culturas indígenas, campesinas y nosotros como pobladores rurbanos; segundo, la mercantilización de la naturaleza, y, tercero, la especulación en los territorios.

Por lo anterior, en la sesión inicialmente se hizo un ejercicio que permitió activar la memoria a través de los sentidos en torno a las plantas medicinales, con sus usos tradicionales en cuanto reivindicación de soberanía local; esto facilitó la consolidación de una serie de metodologías para la reflexión sobre las relaciones entre la ruralidad y lo urbano, de forma que estas se construyeron en torno a la reflexión de la memoria barrial, reconocimiento del uso de los suelos, relaciones urbano-rurales y sensibilización ante un tema nodal: la soberanía alimentaria, entendida como

[...] el derecho fundamental de todos los pueblos, naciones y estados a controlar sus alimentos y sus sistemas alimentarios y a decidir sus políticas asegurando a cada uno alimentos de calidad, adecuados, accesibles, nutritivos y culturalmente apropiados. Ello incluye el derecho de los pueblos para definir sus formas de producción, uso e intercambio tanto a nivel local como internacional. (La Vía Campesina, 2013)

Con estas consideraciones, al final de la sesión se hizo una minga en una de las huertas del territorio, para reflexionar con los participantes a través de estas iniciativas sobre la soberanía alimentaria, en contraposición al capitalismo verde y los pagos por servicios ambientales. Así, se enfatizó en el reconocimiento de las economías comunitarias que se tejen en los barrios por medio de las huertas, pero también por medio de otros tipos de economías y prácticas

de la ruralidad, tales como la producción de chicha, intercambio de semillas y productos cosechados en las huertas, elaboración de artesanías y la apicultura.

De esta forma concluyó la primera Escuela en aras de consolidar argumentos y reconocer nuestra propia historia. Además, hubo otros aprendizajes que valen la pena ser rescatados y que se presentan en el siguiente apartado.

Aprendizajes de la Escuela Ambiental Brayan Cárdenas

Esta Escuela constituye la primera propuesta de EPA que se realizó de manera sistemática con el objeto de formarnos como habitantes del Alto Fucha y los Cerros Orientales, un espacio educativo no formal que forma parte de ese proceso amplio de organización del Alto Fucha, que teje alianzas con la educación formal, consolidando vínculos políticos con organizaciones sociales, semilleros de investigación –como el de Problemas Urbanos Contemporáneos–, y plataformas por el derecho a la ciudad para articular acciones de formación y movilización de carácter distrital.

Sus alcances se enmarcan en el proceso de resistencia, construcción o fortalecimiento del *sujeto político colectivo* que pueda responder de manera acertada al conflicto existente dentro del territorio, desde una perspectiva político-pedagógica de la EPA. Con el fortalecimiento del sujeto colectivo que se ha constituido en el territorio, la Escuela fortaleció la Comisión en Defensa del Territorio Alto Fucha. Como resultado, fue posible fortalecer las organizaciones de base para asumir, en 2019, movilizaciones ciudadanas en contra del Sendero de las Mariposas, proyecto que finalmente fue archivado junto con la lesiva propuesta de POT. De acuerdo con lo anterior, consideramos que la Escuela, en primer lugar, dio paso a la apertura de un espacio de formación para la cualificación interna del proceso de Huertopía y la discusión de los conflictos con la comunidad, desde un punto de vista comunitario, teórico y político.

Otro elemento de reflexión política, central y generado por la escuela, consistió en el reconocimiento del rol que cumplen los cerros orientales en el modelo de ciudad neoliberal, la cual se manifiesta a través de procesos multifacéticos que orientan las políticas urbanas de ordenamiento territorial hacia una reestructuración económica del capital que se conecta con la privatización, liberalización y movilidad del capital o desposesión de espacios rentables de la ciudad, con el objetivo de incrementar la circulación vertiginosa del capital y su consumo productivo, generando que la plusvalía urbana se convierta en un criterio de peso en la transformación de la ciudad (De Mattos, 2006, 2007, citado por Hidalgo y Janoschka, 2014). Así se constituye la ciudad neoliberal como modelo

impuesto y totalizante que intenta imponer una lógica individualizante, y que condiciona el territorio como espacio para la valorización y el lucro.

En esa medida, este modelo de ciudad, planeado desde el capital y el Estado, considera a los cerros orientales y la cuenca alta del río Fucha como una fuente de servicios ambientales, inmobiliarios y turísticos, que capitalizan las ventajas comparativas del paisaje y el ambiente natural. Estos servicios son pensados, cuidados y construidos para el beneficio de los sectores económicos más poderosos y no para la reproducción de la vida, concepción que entra en clara contradicción con las valoraciones territoriales y los usos construidos comunitariamente.

Es necesario resaltar que, si bien la Escuela permitió poner en debate estas tensiones y abrir espacios de reflexión para abordar el conflicto territorial del Alto Fucha y de los cerros en general desde renovados conceptos, se identifican como necesidades: 1) profundizar en la discusión sobre desarrollo urbano desigual; 2) continuar con los espacios de formación, con el fin de elaborar un posicionamiento político de mayor amplitud en la discusión de las relaciones urbano-rurales, y 3) articular de manera más amplia con otros procesos comunitarios y académicos que promuevan la consolidación de los ecoterritorios en la ciudad.

En los barrios: retos y consideraciones finales

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), como educadora de educadores, tiene el reto de continuar fortaleciendo los debates tanto en la academia como en los barrios para nutrirlos de forma dialéctica, y así continuar aportando a la construcción de conocimientos, estrategias metodológicas, didácticas y lúdicas para que los habitantes de los barrios populares consoliden sus argumentos y tengan un análisis crítico de la realidad.

Entre las discusiones formales que quedan está el extractivismo urbano, en el que se encuentran dos posiciones. La primera entiende la categoría como la explotación minero-energética en las ciudades en ocupación de estructuras ecológicas generalmente únicas o con alto grado de biodiversidad. En este marco aparecen lecturas que integran esta mirada con perspectivas urbanas críticas, que centran su atención en la necesidad/posibilidad de comprender las particularidades de los procesos urbanos de América Latina.

La segunda perspectiva, que se articula con la primera, extiende los alcances del extractivismo urbano para comprender cómo el capitalismo en su fase neoliberal despliega una lógica en la cual ya no es solo el aparato minero-energético el principal agente, sino que la especulación inmobiliaria, que expulsa y aglutina población, también contribuye de manera decidida a concentrar

riquezas, producir desplazamientos de personas y apropiarse de los bienes comunes. De esta forma, las tierras, los inmuebles del Estado y los espacios verdes son convertidos por la especulación inmobiliaria en la pauta urbana de la desposesión, aquella de la que habla David Harvey (2004). Si bien es cierto que existen énfasis diferenciados sobre el extractivismo urbano, el margen de representación del concepto puede sintetizarse así:

- En todos los casos prima el interés económico sobre el interés general.
- Los derechos fundamentales entran en la lógica de acumulación capitalista, y en ella el Estado se convierte en un agente facilitador de las maniobras especulativas del sector financiero.
- El acceso al suelo y a la vivienda están bajo la égida del mercado, y este se convierte catalizador de las estrategias de realización-circulación del capital.

Por otro lado, la invitación es a que nuevas comunidades se sumen a la experiencia comunitaria y apuesta política de reivindicar el derecho a la ciudad desde una perspectiva crítica al orden dominante, y los procesos de extractivismo urbano y dominación de la naturaleza, en aras de construir nuevas formas de habitar la ciudad. Por tanto, como Colectiva tenemos también el reto de seguir ampliando la posibilidad de transformación e incidencia política de la mano de la educación popular ambiental (EPA) en espacios más allá del territorio Alto Fucha. Es el caso de los barrios Colina I y II de la localidad Ciudad Bolívar, lugar que venimos caminando y que presenta condiciones sociales similares a las de Alto Fucha por su origen informal y carencia de posibilidad de acceso de sus habitantes al suelo urbano formal; sin embargo, en términos ambientales presenta un reto divergente dentro de la perspectiva ecoterritorial, ya que se caracteriza por ser un espacio altamente contaminado debido a su cercanía al mal llamado relleno sanitario Doña Juana y a procesos de extractivismo urbano asociados en principio a la explotación minera.

Entonces, un escenario de este tipo implica un reto, no solamente para la comunidad y la colectiva, sino también para la academia crítica, teniendo en cuenta que además de todas las aristas que complejizan la situación de los sectores populares en el marco del modo de producción capitalista dependiente, se configura, desde una perspectiva del *sufrimiento ambiental* (Auyero y Swistun, 2008), una posición más de desigualdad relacionada a un ambiente altamente contaminado. El reto es entonces que nuestra apuesta por reclamar el derecho a la ciudad de Harvey nos incluya a todos los territorios que hemos padecido un modelo económico y social opresivo y excluyente.

Existe una necesidad de las organizaciones sociales de profundizar las discusiones sobre el futuro de los territorios y su relación con las formas de opresión del capital, para que esta reflexión se convierta en una herramienta útil que transforme realidades a través de la exigibilidad de derechos. Por ello cobra cada vez más vigencia la consigna de “A estudiar y a luchar”, ya no solo como reivindicación de los estudiantes universitarios, sino como sentir del conjunto de la sociedad colombiana en búsqueda de condiciones de vida dignas y de construcción de territorios para la reproducción de la vida y no del capital.

Finalmente, en vista de los recientes logros y nuevos retos, urge dialogar para construir una metodología pertinente en defensa del territorio, que nos permita problematizar junto a la comunidad el desarrollo desigual de la ciudad, y buscar alternativas que partan de las necesidades de la gente y busquen armonizar la relación de las comunidades con la naturaleza que integra el territorio.

Referencias

- Álvarez, H. (2010). *Pensando en ecobarrios*. Internón Oxfam, Agencia Catalana para la Cooperación y Cinep. <https://issuu.com/escobarriosscc/docs/ecobarrios>
- Aravena, A. (2003). El rol de la memoria colectiva y de la memoria individual en la conversión identitaria mapuche. *Estudios Atacameños*, (26), 89-96. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-10432003002600010>
- Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) (21 de diciembre de 2018). *Auto N.º 08233*. Bogotá.
- Auyero, J. y Swistun, D. (2008). *Inflamable: estudio del sufrimiento ambiental*. Paidós SAICF.
- Benavides, M. (2017). *Una mirada a la gentrificación: el caso Bogotá* [Tesis de grado, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio de la Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/59406/mariaceciliabenavidesescobar.2017.pdf?sequence=1>
- Brenner, N. (2018). *Espaços da urbanização: o urbano a partir da teoria crítica*. Observatório das Metrôpoles-Letra Capital.
- Censat. (2018). *Memoria ambiental y reconciliación*. https://co.boell.org/sites/default/files/memoriambiental1_web.pdf
- Comisión en Defensa del Alto Fucha. (2018). *Plan alternativo del Alto Fucha*. Sin publicar.
- ElTiempo.com. (9 de junio de 2019). *Alameda del río Fucha tendrá 17 kilómetros de senderos y ciclorrutas*. <https://www.eltiempo.com/bogota/parque-lineal-del-rio-fucha-tendra-17-kilometros-373262>

- Fioravanti Álvarez, H., García Arias, M. F. y Holguín Vélez, D. (2016). “El verde está de moda”: el proceso de gentrificación rururbana en La Florida (Manizales-Villamaría). *Revista de Sociología y Antropología: Virajes*, 18(2), 95-113. <http://dx.doi.org/10.17151/rasv.2016.18.2.7>
- Fuentes, N. (2007). ¿Educación ambiental, educación popular o simplemente educación? *Anales de la Educación Común*, 3(8), 76-83. http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/revistacomponents/revista/archivos/anales/numero08/archivosparaimprimir/10_fuentes_st.pdf
- García, V. (2005). El riesgo como construcción social y la construcción social de riesgos. *Desacatos*, (19), 11-24. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2005000300002&lng=es&tlng=es
- Gómez, E. (2011). Análisis crítico de los pagos por servicios ambientales: de la gestación teórica a la implementación. *Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros*, (228) 33-54. https://ageconsearch.umn.edu/record/186509/files/pdf_REEAP_r228_33_54.pdf
- Gómez, G. (2018). Gentrificación contemporánea y derecho a la ciudad: la defensa del espacio urbano en la Ciudad de México. *Revista de Urbanismo*, (39), 1-14. <http://dx.doi.org/10.5354/0717-5051.2018.48816>
- Harvey, D. (2004). *El nuevo imperialismo*. Akal.
- Harvey, D. (2013). *Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana*. Akal.
- Harvey, D. (2017). *Urbanismo y desigualdad social*. Siglo XXI.
- Hidalgo, R. y Janoschka, M. (eds.). (2014). La ciudad neoliberal. Gentrificación y exclusión en Santiago de Chile, Buenos Aires, Ciudad de México y Madrid. *Revista de Geografía Norte Grande*, (58), 261-264. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022014000200014>
- Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger). (2014). *Concepto técnico para programa de legalización y regularización de barrios CT-7901*. Bogotá.
- Jiménez, P. (trad.). “El espacio: producto social y valor de uso”: Henri Lefebvre [En línea]. *Marxismocritico.com*. <https://marxismocritico.com/2017/04/27/el-espacio-producto-social-y-valor-de-uso/>
- La Vía Campesina. Movimiento Campesino Internacional. (12 de junio de 2013). *El llamado de Yakarta* [En línea]. <https://viacampesina.org/es/llamamiento-de-yakarta/>
- Lefebvre, H. (2017). *El derecho a la ciudad*. Capitán Swing.
- Leff, E. (2003). La ecología política en América Latina: un campo en construcción. *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana*, 1(5), 125- 145.

- Marx, K. (2000). *El capital*. Tomo I. Primera reimpresión. Fondo de Cultura Económica.
- Montañez Gómez, G. y Delgado Mahecha, O. (1998). Espacio, territorio y región: conceptos básicos para un proyecto nacional. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*, 7(1-2), 120-134. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/70838>
- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). (14 de abril de 2005). *Resolución 0463*. <https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac7d92429928.pdf>
- Parada, G. (2014). La enseñanza de la historia urbana y barrial. El caso del barrio San José de Bogotá. *Civilizar*, 14(27), 183-202. <http://www.scielo.org.co/pdf/ccso/v14n27/v14n27a13.pdf>
- Pérez, M., Reyes, E., Moreno, Y. y Márquez, H. (2013). Trabajo comunitario y educación popular en Cuba. En B. Hernández Becerra y R. Pablos de la Rosa, *Un tejido de muchos puntos. Compilación sobre educación popular* (pp. 43-59). Editorial Caminos.
- Tamayo, S. y Wildner, K. (coord.) (2004). *Identidades urbanas*. Colección "Cultura universitaria", 85. Serie Ensayo. Universidad Autónoma Metropolitana. <https://core.ac.uk/download/pdf/48393457.pdf>
- Torres, A. (2006). *Identidad y política de las organizaciones populares y luchas urbanas en América Latina. El caso de Bogotá entre 1980 y 2000*. [Tesis de doctorado]. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Torres, C. (2012). Legalización de barrios: acción de mejora o mecanismo de viabilización fiscal de la ciudad dual. *Bulletin de l'Institut français d'études andines*, 41(3):441-471. <http://journals.openedition.org/bifea/304>; <https://doi.org/10.4000/bifea.304>
- Viale, E. (2017). Prólogo. En A. M. Vásquez Duplat (comp.), *Extractivismo urbano: debates para una construcción colectiva de las ciudades* (pp. 15-22). Fundación Rosa Luxemburgo; Centro de Estudios y Acción por la Igualdad (Ceapi).
- Yory, C. (2003). *Topofilia, ciudad y territorio: una estrategia pedagógica de desarrollo urbano participativo con dimensión sustentable para las grandes metrópolis de América Latina en el contexto de la globalización: "el caso de la ciudad de Bogotá"*. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia. <https://eprints.ucm.es/4698/1/t26725.pdf>



Figura 1. Parte de los cerros orientales

Fuente: @Jhody Sánchez (2020).



Figura 2. Foto mural “Somos raíz y resistencia”

Fuente: @Bryan Sotomonte (2020).



Figura 3. Arriba, Enrique Peñalosa en visita al territorio Alto Fucha. Abajo, habitantes del Alto Fucha en protestas contra el Sendero de las Mariposas

Fuente: archivo de la Colectiva Huertopía (2017).



Figura 4. Huertopía

Fuente: archivo Colectiva Huertopía (2017).



Figura 5. Huerta Huertopía

Fuente: @Jhody Sánchez (2020).



Figura 6. Diversidad en el Alto Fucha

Fuente: @Jhody Sánchez (2020).

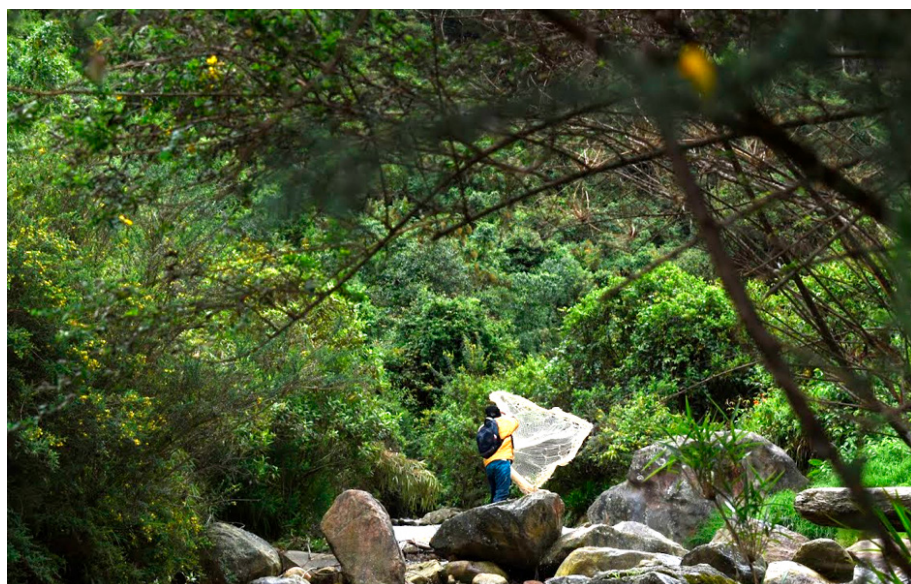


Figura 7. De pesca en el río Fucha

Fuente: @Jhody Sánchez (2020).



Figura 8. Objetos de la memoria barrial

Fuente: @Bryan Sotomonte (2019).



Figura 9. Paseo de olla en el río Fucha

Fuente: @Vanesa Arévalo (2018).



Figura 10. Mapeando el Alto Fucha

Fuente: @Jhody Sánchez (2020).



Figura 11. Dibujo de un participante de la Escuela en el que muestra la inestabilidad que le genera habitar en el Alto Fucha

Fuente: @Bryan Sotomonte (2019).



Figura 12. Semillas

Fuente: @Jhody Sánchez (2019).



Figura 13. Minga

Fuente: @Jhody Sánchez (2019).



Figura 14. Mural “¿Mitigación del riesgo para quién?
No+inmobiliarias en los cerros”

Fuente: @Benjamin Baracaldo (2017).

Capítulo 2. Espacios de acción sociopolítica

Moisés Cubillos Rodríguez

La reflexión pedagógica sobre los procesos urbanos contemporáneos constituye una posibilidad de acción sociopolítica, porque se comprende a la ciudad y la geografía no solo como objetos de estudio para el trabajo académico, sino como realidades en las cuales se producen escenarios políticos de acción socioespacial. Como consecuencia, en este ejercicio de reflexión y acción, se pone en juego un sentido particular de lo pedagógico que, orientado por los fundamentos de la pedagogía crítica, se posiciona políticamente como posibilidad de transformación de la vida, en los que se toman como fundamento la acción compartida en los espacios de la cotidianidad, la protesta social, las movilizaciones y los trabajos barriales o comunitarios.

Desde esta perspectiva, el presente documento orienta sus reflexiones hacia la relación de la investigación y la pedagógica crítica, con respecto a la producción del espacio desde abajo. En ese sentido, en primera instancia se enuncian los postulados teóricos que acompañan las reflexiones individuales y colectivas de las comunidades académicas que han construido apuestas investigativas y pedagógicas orientadas a la transformación de los espacios reproducidos por el capital.

Con este propósito, se recurre a la teoría crítica urbana para sustentar el marco de formación/acción que incorpora los aportes de teóricos latinoamericanos como Rolnik (2017) o Di Virgilio (2015), y autores de otras latitudes como Harvey (1977), Smith (2020) y Brenner (2013). De igual forma, se entiende que la participación en escenarios de movilización social permite posicionar debates necesarios en la disputa por los espacios urbanos contemporáneos, y para ello se toma como fundamento las discusiones lefebvrianas sobre la producción social del espacio (Lefebvre, 1974). Por último, se realizan consideraciones sobre los alcances de la investigación-acción en la movilización social; se enfatiza

en las experiencias de producción de conocimiento junto a las comunidades a través de la espacialización de discusiones del orden urbano multiescalar, como una posibilidad de transponer de manera didáctica las reflexiones junto a los sectores populares.

¿Cómo construir las reflexiones?

Los procesos de reflexión-acción adelantados con los agentes urbanos que habitan los barrios populares, o que son partícipes de los escenarios de movilización social, permiten ampliar las posibilidades investigativas sobre la producción del espacio urbano; lo anterior, porque se piensa a la ciudad y a la geografía como una posibilidad de reflexión y acción sociopolítica, es decir, no se estudian los procesos urbanos desde la comodidad de la academia tradicional, sino que se realiza un involucramiento en el que el investigador/docente se entiende a sí mismo como agente urbano que produce ciudad desde abajo.

Dicha perspectiva requiere de rupturas teóricas y epistemológicas con respecto a la producción de conocimiento geográfico. Por tanto, más allá de una concepción de la geografía tradicionalista, tan reproducida en aulas escolares, de lo que se trata es de asumir una lectura de la realidad espacial con enfoque de criticidad y en proyección transformadora. Lo anterior demanda lecturas interdisciplinarias y heterogéneas que apunten a la producción de espacios alternativos, a los impuestos por las lógicas del capital.

Ahora bien, es sabido que la academia latinoamericana, en particular la colombiana, le ha otorgado prevalencia investigativa a las instituciones educativas que supeditan la discusión urbana a las facultades de Arquitectura y Geografía; sin embargo, el acumulado reflexivo de licenciados y maestros en formación permite otorgarle a la pedagogía crítica y a la educación popular la preponderancia que merecen al momento de discutir y reflexionar sobre problemas urbanos contemporáneos. Por consiguiente, las investigaciones adelantadas en capítulos precedentes se adhieren a los postulados construidos por investigadores sociales como Torres (2013), por cuanto se considera a la educación popular como una práctica sociopolítica que cuestiona el contexto político, social, cultural y espacial donde actúa:

Dado que su razón se define por su cuestionamiento y resistencia a las realidades injustas y su articulación con las luchas y movimientos populares, la educación popular incorpora como práctica permanente la realización de lecturas críticas de los entornos locales, nacionales y continentales en los que se desenvuelve. (P. 20)

De ahí que las investigaciones y el trabajo junto a las comunidades o agentes urbanos populares, tal como se expresa en los capítulos sobre Usme, Alto Fucha y Soacha, logren interrelacionar concepciones emanadas de la geografía crítica, y procesos de educación popular que se acompañan de metodologías participativas. En clave de lo anterior, se busca, desde una perspectiva educadora, la concientización, formación y viabilización de organización social o comunitaria que logre concederle a la movilización social el alcance que merece en términos de reestructuración espacial desde la base.

Por lo anterior y en diálogo con los ejemplos mencionados, se considera importante incorporar en los debates urbanos contemporáneos discusiones teóricas que han emergido gracias a estudiosos de las ciudades latinoamericanas, las cuales han servido como punto apoyado para la formulación de teoría y práctica urbana crítica orientada a comprender la lógica desigual en la que se estructuran los espacios urbanos. En tal sentido, se recurre a autores-activistas como Rolnik (2017) y Di Virgilio (2015) para develar las particularidades de los espacios latinoamericanos, en plena articulación con planteamientos y las ideas de alcance global difundidos por Neil Smith (2020), Jean-Pierre Garnier (1976), Neil Brenner (2013) y David Harvey (1977). Y no solo para reflexionar desde la burbuja de la academia y de los claustros universitarios, sino también en clave de trasladar los debates a la calle, al son de la injusta cotidianidad urbana que se necesita transformar.

De acuerdo con la anterior, se asume la necesidad de cuestionar la estructura desigual e injusta de los espacios urbanos, y para ello se requiere de formación constante con los agentes urbanos que hacen posible la ciudad. Los procesos formativos permiten clarificar debates y acompañar agendas de movilización de alcance global, nacional y distrital. Sin embargo, al ser docentes o educadores populares, no solo se posicionan debates en lo concerniente a políticas del orden educativo, sino que también se busca el cuestionamiento de agendas gubernamentales que legitiman la expoliación de los habitantes del suelo urbano.

Ahora bien, la reflexión/acción y la construcción de comunidades académicas no pretenden homogenizar las discusiones sobre los espacios urbanos contemporáneos, o sobre los métodos para el trabajo comunitario; más allá de análisis reduccionistas o unívocos, la intención de construir reflexiones en la calle, barriada o en procesos organizativos, implica otorgarles voz en la producción de conocimiento y de espacio a los de abajo. Lo anterior no implica alejarse de concepciones globales sobre las reestructuraciones urbanas, los reajustes institucionales o la reproducción de estrategias de expoliación por parte del capital, pero sí supone el acercamiento a subjetividades políticas diversas que poseen unas lecturas particulares en la escala local sobre los problemas del orden espacial.

Como resultado de la lectura pedagógica y reflexiva entre escalas espaciales, se logra develar el carácter contradictorio de las estructuras urbanas en la contemporaneidad, porque no es posible comprender los regímenes normativos transnacionales o los sistemas de transferencia normativa interjurisdiccional (Brenner, Peck y Theodore, 2010), sin acercarnos a los procesos de modelación espacial reproducidos por los agentes populares. Precisamente, el enfoque otorgado por la educación popular permite situar las particularidades, y al mismo tiempo las tendencias globales, con sus derivados en términos de contradicción espacial, lo que en términos de Lefebvre (2017 [1978]) significa que

[...] según una racionalidad de lo idéntico y lo repetitivo que permita introducir en las esquinas más remotas [...] la presencia del Estado, el control y la supervisión. Entre los intereses “privados” y la acción de los poderes “públicos”, a veces hay colusión, así como colisión. Lo que engendra la paradoja del espacio homogéneo-roto. (P. 265)

La perspectiva hasta aquí planteada comprende el horizonte pedagógico y a la educación popular como un escenario reflexivo y de ruptura con respecto al orden oficial del capital; en este punto, recurriremos a Smith (2020) para sustentar nuestra perspectiva crítica, en el entendido de que en el capitalismo “el componente básico fundamental del espacio urbano es el espacio absoluto individual de la propiedad privada, y cada uno de estos espacios tiene un precio en la forma de renta de suelo” (p. 187). Entonces, en aras de proyectar posibilidades espaciales alternativas a las impuestas por el modo de producción capitalista y por el modelo de neoliberalización, es pertinente cuestionar de manera integral los componentes estructurantes de ese orden urbano injusto, oficialista y privado, y allí, las reflexiones brindadas por la educación son de relevancia para el posicionamiento y la producción de otros espacios posibles.

Ahora bien, se ha referido de manera breve el sustento teórico que alimenta las reflexiones sobre asuntos problemáticos del orden urbano,¹ sin embargo, es necesario ahondar sobre las apuestas desde la pedagogía y su relación con la teoría crítica urbana en el marco de proyectos investigativos que le apunten a fortalecer discusiones de agentes urbanos populares, como estudiantes, organizaciones sociales y ciudadanía en general. Por ese motivo, es importante mencionar que las investigaciones desarrolladas en otros capítulos son el resultado de espacios de formación teórica y metodológica diseñados para el fortalecimiento de las capacidades críticas y analíticas en las que se articula la movilización social con la formación ciudadana.

Simultáneamente a las reflexiones teóricas, la pedagogía crítica recurre a las salidas de campo y a ejercicios de reconocimiento territorial urbano-rura-

1 Reflexiones profundizadas en otros capítulos.

les, como una posibilidad de articular esfuerzos con organizaciones sociales o con agentes urbanos populares en aras de visibilizar las marcadas diferencias del orden urbano, según las condiciones sociales o económicas de los agentes. Por tanto, se ha promovido como apuesta pedagógica crítica el trabajo mancomunado entre los estudiantes de universidades y los procesos barriales comunitarios que se llevan a cabo en las zonas visitadas. El trabajo de campo es concebido como un momento insoslayable en la formación de licenciados sensibles ante los problemas urbanos, rurales y regionales, pues la teoría y el conocimiento de los debates dados en sesiones de fundamentación deben ser consolidados mediante la acción constante, integradora y comprometida con los escenarios populares.

La investigación-acción cree que otra ciudad es posible, y que la reflexión sobre el orden urbano debe pasar por la enseñanza de la geografía desde perspectivas críticas y comprometidas. En tal sentido, el conocimiento que se construye desde la academia en diálogo con los procesos organizativos y la movilización social debe propiciar un proyecto investigativo democrático, en su difusión y en su creación, por ello, en el sentido de Zibechi (2007), la educación proyectada a la investigación y organización social es “una forma de construcción de los movimientos, al convertirla en un aspecto esencial de la vida cotidiana [...] el despliegue del poder-capacidad de acción de los colectivos, los pone en condiciones de reconstruir saberes destruidos por el neoliberalismo” (p. 30).

Por ende, la academia debe salir a la realidad de las ciudades, debe construirse en las calles y en las aulas; tal como se evidencia en la figura 1, los mítines, marchas y cualquier escenario de acción colectiva se convierten en una posibilidad para la reflexión sobre los problemas urbanos, y al mismo tiempo, para la construcción de geografía crítica con las comunidades y en la cotidianidad. Dicha apuesta se aleja de las visiones simplistas sobre la educación geográfica en la que se concibe que solo en las aulas de clase es posible producir conocimiento. Por el contrario, es en la calle en donde se identifican las injustas realidades; entonces, la ciudad se convierte en un aula de clase que propicia la transformación y la organización.

Coherentes con estos principios y apuestas, las investigaciones adelantadas son el resultado de espacios de formación abiertos a todas las personas interesadas en el conocimiento de la ciudad, la geografía y, por su puesto, de su enseñanza. Pero más allá de la formación, como ya hemos enunciado, se propician debates y se acompaña la movilización social; en concordancia con los postulados de la teoría urbana crítica se entiende que la disputa espacial por el orden urbano debe pasar por la formación de ciudadanías críticas. De acuerdo con Harvey (2013):

Lo urbano funciona pues, obviamente, como un ámbito relevante de acción y rebelión política. Las características propias de cada lugar son importantes, y su remodelación física y social, así como su organización territorial son armas para la lucha política. Al igual que en las operaciones militares la elección y conformación del campo de batalla desempeña un papel destacado en su resultado, lo mismo sucede con las protestas populares y los movimientos políticos en el entorno urbano. (P. 174)

Precisamente, se parte de dicha perspectiva para adelantar los procesos de investigación/acción y de trabajo junto a los agentes urbanos populares, y está relacionada con la lucha y la configuración de escenarios de acción sociopolíticos. De tal suerte, y de nuevo con referencia a Harvey (2013), problematizamos el orden urbano reproducido por el capital, porque en este subyacen la expoliación y la acumulación de nuevos excedentes, pero al mismo tiempo identificamos en él un horizonte propicio para la organización de colectividades que le apunten a la consecución de nuevos espacios, porque, como plantea Lefebvre (1974), no es posible construir nuevas sociedades si no se genera una ruptura radical con el orden espacial vigente.

La producción del espacio desde abajo

Más allá de comprender las dinámicas de producción del espacio urbano desde una posición de privilegio otorgada por la academia tradicional, también es necesario constatar los procesos de producción espacial que se manifiestan a través de las acciones populares en la cotidianidad y de la movilización social organizada. Por tal motivo, si bien en perspectiva lefebvrea se debe propender por el cuestionamiento y la problematización de las dinámicas de producción propias del capital-Estado, también se debe otorgar prevalencia a los procesos del hábitat popular en tanto posibilidad de producir espacios alternativos:

Desde esta argumentación la ciudad aparece no solo como el *topos* donde se condensan los procedimientos técnicos, económicos y políticos de dominación de la vida social: la crítica sociológica y el “habitar” portan de manera conjunta el interés por la emancipación colectiva. Lo urbano se perfila, así, como la ocasión para acceder al rango de ciudadanía y a la apropiación del espacio como etapa de superación de la alienación social. (Martínez, 2013, p. 55)

Para el caso de Bogotá, sabemos que la ciudad ha crecido de manera desigual, como resultado, entre otros procesos, del exponencial crecimiento urbano, exacerbado por las constantes migraciones desprendidas del conflicto político, social y armado en Colombia, y en la última época por el flujo migratorio derivado de la crisis venezolana, que, si bien no representa una reestructuración

sustancial, sí ha alterado los patrones urbanos de la ciudad. De manera simultánea, la crisis y precariedad habitacional, tan características de las ciudades latinoamericanas, han condicionado la emergencia de patrones de producción urbanos de carácter popular que, por lo general, se encuentran localizados en las periferias. En consecuencia, han existido desde el siglo pasado múltiples patrones de ocupación en los suelos ciudadanos, caracterizados por reproducir métodos de producción de vivienda variados y en constante transformación. De hecho, tal como afirma Torres (2014), la colonización urbana en Bogotá y la búsqueda de terrenos de asentamiento

[...] se convirtió en proyecto y experiencia comunes de los nuevos inmigrantes en los primeros años de su vida ciudadana; así, su experiencia de lucha compartida por conseguir suelo urbano donde ir construyendo progresivamente sus casas y la infraestructura de servicios básicos del barrio fue configurando unos lazos de sociabilidad y un sentido de pertenencia común como pobladores populares. (P. 128)

Como resultado del proceso reflexivo sobre los espacios urbanos contemporáneos, y en aras de suscitar preocupaciones y acciones propositivas entre las comunidades, se han diseñado, desde un enfoque amparado por la educación popular, jornadas formativas y pedagógicas que buscan reconfigurar, en términos didácticos, postulados de la geografía crítica y de la producción social del espacio desde abajo. Para la ciudad de Bogotá se resalta la producción de espacio popular desde la Colectiva Huertopía, o desde procesos organizativos de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. De esta manera, el investigador se traslada a la barriada, dialoga con las comunidades y posibilita su organización, así como el constante cuestionamiento al modelo de producción espacial urbano propio del capital y de su aparato estatal.

Dicha lógica permite construir conjuntamente, investigador/docente y comunidad, lo que autores como Brenner *et al.* (2010) denominan *escenarios de contraneoliberalización*. Es decir, el acercarse a las lógicas de producción del espacio desde abajo posibilita construir fuerzas sociales y alianzas políticas que se enfrenten a los mercados y a *los marcos institucionales heredados* (p. 37). Esta línea de trabajo solo es posible desde los diálogos con los agentes populares y con el diseño de metodologías participativas que permitan la proyección organizada de la movilización social.

A modo de ejemplo, con motivo de la reestructuración del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)² adelantada por la administración del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se realizaron jornadas formativas que permitieran

2 Plan de Ordenamiento Territorial: instrumento de planificación regulado por la Ley 388 de 1977.

unificar criterios sobre los intereses en juego en la reformulación del POT y así adelantar acciones, orientadas por la educación popular, en las que juntas de Acción Comunal de las localidades de Usme y San Cristóbal proyectaran acción colectiva urbana. Lo anterior repotencia la organización comunitaria, estancada en muchas ocasiones por conquistas cortoplacistas como la regularización de predios o la adecuación de equipamientos colectivos, que, si bien significan logros de los agentes populares, en largo plazo difuminan alcances estratégicos de la ciudad popular.

En ese sentido, comprender las dinámicas de producción del espacio propias del capitalismo en su fase neoliberal implica el reconocimiento de las alteraciones espaciales que se vienen configurando en las últimas décadas. Bajo esa perspectiva, y en concordancia con lo planteado por Theodore *et al.* (2009), se considera a las ciudades como espacios de acción sociopolítica, por cuanto allí se definen las estrategias del neoliberalismo como “proyecto geográficamente variable, pero interconectado translocalmente. Es también en el ámbito urbano donde se da el reiterado fracaso de las políticas neoliberales y algunas esporádicas resistencias a ellas [...], se hacen visibles ciertos límites potenciales del proyecto neoliberal” (p. 3).

Lo anterior es posible porque nuestra época sufre un proceso de transformación del espacio construido en el que se reproducen nuevas estrategias de valorización del capital por parte del neoliberalismo que incluyen, por ejemplo, a las periferias como uno de los nuevos campos de ejecución del excedente por parte del sistema financiero. Dicha estrategia valida la inseguridad en la tenencia en los antiguos asentamientos urbanos que desde la última década se encuentran en la lupa de los nuevos agentes urbanos inmobiliarios. De ahí que autores como Rolnik (2017) afirmen que la vivienda y el suelo urbano en la periferia constituyen un nuevo eje de atracción económica, que permite la emergencia de nuevos agentes urbanos, que usufructúan generosas ganancias a costa de la alteración de antiguos patrones de ocupación.

De igual forma, la alta segregación socioespacial presente en las ciudades latinoamericanas y en la ciudad de Bogotá, ha posibilitado que los mercados expandan sus circuitos financieros para la acumulación de riqueza, por ello, la principal alteración espacial a hoy radica en la preponderancia que el mercado ha otorgado a la vivienda como activo financiero. Del mismo modo, Rolnik (2017) plantea que se han consolidado estrategias hegemónicas, ideológicas y prácticas que buscan financiarizar la vida cotidiana. Sin embargo, la búsqueda de homogenización espacial por parte del capital se ve frenada por la protesta, la disputa espacial y la proyección organizativa e investigativa de educadores críticos. En ese sentido, adquieren relevancia los postulados precedentes por cuanto se le otorga a la disputa socioespacial la posibilidad de construir “un ejercicio cotidiano de formulación y lucha por el derecho a la ciudad” (p. 309).

Por tanto, en el entendido de que en la cotidianidad y en el habitar se producen variadas resistencias, se debe asumir desde la academia una postura ética y pedagógica que oriente su accionar hacia el acompañamiento y consolidación de la movilización social, así como a las iniciativas comunitarias desarrolladas en las periferias urbanas de Bogotá. Por ello, el ejercicio de pensar el espacio hoy, con y desde las comunidades, debe trascender las limitaciones conceptuales de la teoría geográfica tradicional; así, la producción del espacio desde abajo le otorga a la praxis social el sentido político, dinámico y transformador que se requiere, de ahí que en perspectiva espacial, tal como refiere Santos (1996), debemos construir alternativas a futuro, porque ahí se “constituye el dominio de la voluntad y es en base a él donde debemos centrar nuestro esfuerzo, para hacer posible y eficaz nuestra acción” (p. 82).

Espacializar las discusiones

En tanto, la ciudad se ha convertido en espacio de reproducción del capitalismo contemporáneo, que bloquea violentamente las alternativas espaciales construidas desde abajo y, según plantea Lefevre (1974), es un espacio dominante que “se esfuerza en moldear los espacios dominados [...] mediante el uso de acciones a menudo violentas que reducen los obstáculos y todas las resistencias que encuentra” (p. 108). Es necesario, desde la pedagogía crítica y la educación popular, construir alternativas educativas que permitan espacializar discusiones sobre los espacios urbanos y, al mismo tiempo, movilizar las subjetividades de los agentes populares o comunidades en el orden urbano. Por tanto, la reflexión-acción se dota de sentido por cuanto desde allí se construyen acciones pedagógicas territorializadas.

Ahora bien, la espacialización de las discusiones teóricas implica el reconocimiento contextual de las problemáticas de la ciudadanía, y además la utilización de lenguajes sencillos que permitan la comprensión holística de los conflictos socioespaciales. En esas circunstancias, un proyecto pedagógico crítico debe saber trasladar los problemas de la cotidianidad a instrumentos cartográficos relacionados con la geografía, por ello, según Montañez (1999) con relación los problemas espaciales, todos son “susceptibles de espacializar, es decir que se pudiera hacer un mapa con ellos, mostrando su variación espacial, y ser objeto de análisis geográficos” (p. 67). En virtud de ello, los ejercicios didácticos, orientados desde pedagogías críticas posibilitan cartografiar las desigualdades y diferenciar espacialmente las ciudades latinoamericanas.

Dicha discusión sobre el carácter contradictorio y desigual de los espacios urbanos, al ser territorializada y espacializada, permite, por un lado, romper

los muros de las universidades y de los centros de investigación, como también ejemplificar o viabilizar transposiciones didácticas con las comunidades que transitan en las cotidianidades. Los resultados de los mapeos y de la espacialización permiten que los afectados y vulnerados de las ciudades construyan o amplíen el compromiso con la transformación espacial; perspectiva que ha sido analizada por Santos (2011), al otorgarle la dimensión de activismo cartográfico en clave de comprender, desde una noción participativa, las formas y los usos de las representaciones espaciales y sus derivados en términos de poder espacial.

Bajo la misma modalidad, investigadoras-activistas como Dulce *et al.* (2019) han trabajado desde 2012 junto a las comunidades que habitan y producen la ciudad informal en São Paulo (Brasil), en la construcción del Observatorio de Desalojos (Observatório de Remoções, OR). Se han mapeado los fenómenos de desalojo, a lo que las autoras denominan *geografía de la visibilidad*. Por tanto, el mapeo en este caso se convierte en herramienta para la “comprensión ampliada de la dinámica vinculada a la re-estructuración territorial de la metrópolis y su relación con los desplazamientos” (p. 6).

Es decir, las dimensiones analíticas presentadas asumen una lectura teórica que indica que los espacios urbanos en cuanto son diseñados conforme a las normas de planificación propias del urbanismo neoliberal, se encargan de reproducir segmentos espaciales diametralmente diferenciados que deben ser visibilizados y espacializados. Aquí cobran relevancia los planteamientos de Harvey (1977), por cuanto se entiende que la estructura espacial vigente reproduce la desigualdad porque no existe una redistribución real del ingreso, entonces la carga de beneficios se inclina a favor de los sectores que organizan el espacio urbano,

[...] las ciudades –esos “talleres de la civilización”– están fundadas sobre la explotación de la mayoría por unos pocos. De la historia hemos heredado un urbanismo basado en la explotación. El urbanismo genuinamente humanizador está todavía por construir. Queda para la teoría revolucionaria explorar el camino que va de un urbanismo basado en la explotación a un urbanismo apropiado para la especie humana. Y queda para la práctica revolucionaria llevar a cabo tal transformación. (P. 330)

Sin embargo, dicho análisis desde la teoría crítica urbana no es comprendido de igual manera por toda la ciudadanía; en consecuencia, es necesario llevar, en términos didácticos, dicho análisis urbano a la cotidianidad de los sectores populares. A manera de ejemplo, para visibilizar los efectos nefastos del modelo de financiarización de la vivienda en Bogotá, el Semillero de Investigación: Problemas Urbanos Contemporáneos desarrolló un proyecto de investigación cuyo objetivo principal consistió en identificar cómo a partir de los proyectos de

renovación urbana propuestos para el mejoramiento de los equipamientos del sur Bogotá, se está afectando el acceso a la vivienda subsidiada para las clases bajas de la capital. Para alcanzar este objetivo, situamos nuestro estudio de caso en la ampliación de dos avenidas fundamentales en la conexión del sur de la ciudad, a saber: la avenida Ciudad de Cali y la nueva avenida Bosa.

Durante más de un año, el equipo de docentes y estudiantes realizaron un exhaustivo trabajo de archivo y entrevistas con las familias afectadas por la ampliación de las dos avenidas. Vale la pena destacar que, en las fases iniciales del proyecto, la agenda temática estaba concentrada en los problemas de la renovación. Sin embargo, a medida que se realizó el acercamiento a los pobladores de la zona de estudio, se pudo encontrar que el problema que allí subyace es un sistemático despojo de los propietarios de viviendas autoconstruidas que ahora son adquiridas a precios mínimos por inmobiliarias privadas que representan los intereses de los propietarios del sistema de transporte masivo Transmilenio e inversionistas de centros comerciales.

A medida que las inmobiliarias han venido comprando los predios de más de cincuenta manzanas entre las localidades de Kennedy y Bosa, en el sur de la ciudad, los antiguos propietarios de estas viviendas se ven abocados a trasladarse a zonas mucho más periféricas como el municipio de Soacha, una zona conurbada con bastas crisis sociales producto de las constantes migraciones internas. Mientras las familias desplazadas del sur de Bogotá deben endeudarse para completar el valor de un apartamento de dimensiones menores al lugar donde antes vivían, las inmobiliarias y empresas privadas como Transmilenio proyectan a lo largo de la avenida Ciudad de Cali y avenida Bosa todo un complejo habitacional destinado a las clases medias, con un circuito de centros comerciales y la ampliación de la Troncal del Transmilenio Sur.

Estos fenómenos no solo insertan a las familias más pobres en un programa de endeudamiento forzoso, sino que también han sido brutalmente criminalizados y violentados por la fuerza pública. La llegada de los complejos habitacionales para familias de mayores ingresos implica también el fortalecimiento del aparato securitario que rodea estas construcciones (Caldeira, 2007). De tal suerte que el despojo no está dado solamente desde la dimensión económica y espacial de la financiarización, también desde lo simbólico con la represión a quienes se niegan a entrar en el ajedrez de la especulación del mercado de vivienda.

Aunque el debate sobre financiarización es realmente reciente en Colombia, las iniciativas de investigación que se han gestado en algunas universidades en torno al tema son pertinentes y necesarias, por cuanto permiten establecer una denuncia sobre las estrategias, métodos y formas con las cuales el neoliberalismo ha creado nuevos repertorios de acumulación de capital, a costa de

la expoliación de las familias más precarizadas del medio urbano. De nuevo, según plantea Santos (2011), cartografiar, mapear o espacializar los fenómenos urbanos, derivados del neoliberalismo y del capital, deben permitir “consolidar más procesos de formación y educación cartográfica (que involucra la enseñanza de la Geografía) que presten atención a la relación entre cartografía y luchas formando nuevas posibilidades de razonamiento centrado en el espacio” (p. 16).

Como consecuencia de lo anterior, se deben construir nuevas apuestas investigativas en las distintas esferas de la vida. La intención es reflexionar y espacializar los distintos fenómenos urbanos que se reproducen tanto en los procesos de autoproducción de hábitat, como en las nuevas lógicas de financiarización de las viviendas, con sus repercusiones inmediatas en los agentes urbanos populares; pero de igual forma, se trata de entender que dichos fenómenos están presentes en los mismos centros universitarios porque tal como se aborda en otro apartado del libro, la academia no escapa a la lógica de expoliación por parte del capital (figura 2). Sin embargo, dichos debates también se deben trasladar a la calle, para continuar afianzando procesos colectivos.

En tal sentido, y en clave de posicionar debates sobre la ciudad a través de apuestas pedagógicas y de estrategias didácticas que propendan por la espacialización de discusiones, se considera que la teoría de la renta urbana constituye una fuente analítica que soporta los ejercicios de espacialización formulados y ejecutados desde la investigación profesoral y la educación popular, por cuanto problematizan las utilidades de los espacios urbanos de acuerdo con su localización geográfica diferenciada; por tanto, según acota Jaramillo (2009):

Los determinantes de la localización de las distintas actividades urbanas en la ciudad y su entrelazamiento espacial no son exclusivamente de carácter técnico, fruto de una lógica funcional –como lo formulan algunas aproximaciones del individualismo metodológico y del comportamiento paramétrico de los agentes económicos– que conduce a algo difícil de sostener: un equilibrio general, único, óptimo y estable, con las repercusiones que ello implica sobre los aspectos de política, ya que su conclusión más general es que el funcionamiento espontáneo del mercado es el mecanismo más eficiente de la distribución de las actividades urbanas en el espacio. (P. 22)

Para el caso de las universidades públicas de la ciudad de Bogotá, se han realizado ejercicios cartográficos que permiten socializar y cuestionar, desde un enfoque participativo, junto a los agentes populares, las proyecciones urbanas que buscan alterar los usos de los suelos educativos en aras de potenciar proyectos inmobiliarios que generen réditos económicos. Por tanto, la apuesta, más allá de generar reflexiones de carácter intramuros universitarios, ha sido trasladar los debates hacia la barriada, a través, por ejemplo, de clases a la calle que potencian la formación política colectiva sobre lo que sucede en espacios urbanos.

En cuanto a las clases a la calle (figura 3), estas son una oportunidad para trasladar las discusiones a la cotidianidad de los agentes urbanos populares, por tanto, se entiende que los muros de las universidades han alejado a estudiantes, profesores y comunidades académicas, de las dinámicas propias de las clases trabajadoras y populares. En ese sentido, convertir las calles, avenidas, centros comerciales y plazas públicas en epicentro de la reflexión académica sobre los espacios urbanos contemporáneos constituye una posibilidad de reestablecer puentes entre la academia y el pueblo. En tal razón, la investigación comprometida debe propiciar deliberaciones mancomunadas para asumir los espacios de acción sociopolítica en una vía transformar el orden espacial impuesto por el capital.

Conclusiones

Tal como se ha expuesto, los procesos educativos sobre los problemas urbanos contemporáneos, más allá de estructurarse como una apuesta investigativa *tradicional*, alejada de las vicisitudes de las comunidades, debe entender que las posibilidades para transformar las condiciones espaciales del capitalismo, que reproducen la desigualdad social, pasan por articular la formación teórica con la movilización social en las diversas escalas del orden urbano. Por consiguiente, producir espacio desde abajo debe convertirse en alternativa proyectiva, en aras de mancomunar esfuerzos que permitan disputar la ciudad por encima del dogma neoliberal.

De igual forma, la propuesta, construida desde la pedagogía, así como la educación popular, y su articulación con la teoría urbana crítica, abre un debate necesario en relación con las nuevas formas de propiciar la formación geográfica, alejándose de las habituales concepciones que relegan la discusión y la acción socioespacial a determinadas facultades o institutos de la academia tradicional; por el contrario, de lo que se trata es de construir pensamiento geográfico desde abajo para incentivar en las comunidades la acción colectiva urbana.

Referencias

- Brenner, N. (2013). Tesis sobre la urbanización planetaria. *Nueva Sociedad*, 243, 38-66.
- Brenner, N., Peck, J. y Theodore, N. (2010). ¿Y después de la neoliberalización? Estrategias metodológicas para la investigación de las transformaciones regulatorias contemporáneas. *Urban*, 1, 21-40.
- Caldeira, T. (2007). *Ciudad de muros*. Gedisa.
- Di Virgilio, M. (2015). Urbanizaciones de origen informal en Buenos Aires. Lógicas de producción de suelo urbano y acceso a la vivienda. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 30(3), 651-690.

- Dulce, L., Marino, A. y Rolnik, R. (2019). Observatorio de Desalojos: investigación-acción en la “ciudad informal” de la Región Metropolitana de São Paulo. *Revista Planeo Ciudad Informal*, 40, 4-11.
- Garnier, J. P. (1976). Planificación urbana y neocapitalismo. *Geocrítica*, 1(6), 1-26.
- Harvey, D. (1977). *Urbanismo y desigualdad social*. Siglo XXI.
- Harvey, D. (2013). *Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana*. Ediciones Akal.
- Jaramillo, S. (2009). *Hacia una teoría de la renta del suelo urbano*. Universidad de los Andes.
- Lefebvre, H. (1974). *La production de l'espace*. Anthropos.
- Lefebvre, H. (2017 [1978]). El espacio y el Estado. En *De l'État, Les contradictions de l'État modern* (tomo IV, pp. 259-324). Trad. P. Jiménez Pacheco. Union générale d'éditions.
- Martínez, E. (2013). Introducción: Ciudad, espacio y cotidianidad en el pensamiento de Henri Lefebvre. En H. Lefebvre, *La producción del espacio* (pp. 31-53). Capitán Swing.
- Montañez, L. (1999). Espacio, espacialidad y transdisciplinariedad en Geografía. *Cuadernos de Geografía*, VIII(1), 59-73.
- Rolnik, R. (2017). *La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas*. Lom Ediciones.
- Santos, M. (1996). *Metamorfosis del espacio habitado*. Oikos Tau.
- Santos, R. (2011). Ativismo cartográficos: notas sobre formas e usos de representação espacial e jogos de poder. *Revista Geográfica de América Central*, 2, 1-17.
- Smith, N. (2020). *Desarrollo desigual. Naturaleza, capital y la producción del espacio*. Traficantes de Sueños.
- Theodore, N., Peck, J. y Brenner, N. (2009). Urbanismo neoliberal: la ciudad y el imperio de los mercados. *Temas Sociales*, 66, 1-11.
- Torres, A. (2013). La educación popular como práctica política y pedagógica emancipadora. En D. Streck y M. Esteban, *Educação popular. Lugar de construção social coletiva* (pp. 15-35). Vozes.
- Torres, A. (2014). Territorios populares urbanos como espacios comunitarios. En A. M. Burbano y P. Páramo (comp.), *La ciudad habitable: espacio público y sociedad* (pp. 107-132). Universidad Piloto de Colombia.
- Zibechi, R. (2007). *Autonomías y emancipaciones América Latina en movimiento*. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales.



Figura 1. Movilización presupuesto IES 2019

Fuente: @Madisson Carmona.



Figura 2. Movilización IES, especulación inmobiliaria y universidades, 2019

Fuente: @Madisson Carmona.



Figura 3. Clases a la calle, 2019

Fuente: @Lina Valcárcel.

Segunda parte

Espacios de reflexión

Capítulo 3. Discursos y debates sobre el sector informal urbano en América Latina

Madisson Yojan Carmona Rojas

La informalidad urbana en América Latina ha sido un objeto de investigación de primer orden para las ciencias sociales en el continente. Desde comienzos de la década de 1970, cuando Hart (1973) acuña el término *sector informal*, organismos multilaterales y centros de investigación de diversas latitudes han centrado sus esfuerzos en comprender, desde un amplio panorama de perspectivas analíticas, las particularidades del trabajo informal especialmente en las ciudades de los llamados, en ese entonces, países subdesarrollados.

En América Latina, los análisis derivados del estudio del sector informal urbano (SIU) fueron tomados como fundamento, igualmente desde la década de 1970, para comprender las dinámicas de los procesos de urbanización. Esta búsqueda se centró en identificar los determinantes estructurales de las formas de acceso al suelo y a la vivienda por parte de los habitantes de menores ingresos. Como resultado de ello, importantes estudiosos de la cuestión urbana en el continente acuñaron las expresiones *urbanización informal* o *ciudad informal* para caracterizar aquellos procesos de producción de ciudad desde abajo, en oposición a las estrategias institucionales de construcción de vivienda y provisión de infraestructura urbana.

La producción de conocimiento sobre estos dos grandes campos de investigación (el empleo y la urbanización informales) es abundante y remite, como se verá, a perspectivas analíticas que entran en constante tensión. Asimismo, los trabajos de síntesis bibliográfica sobre estos temas son apreciables tanto por su volumen como por su calidad. De entre estos trabajos, el presente capítulo toma como referentes primordiales los libros de Juan Pablo Pérez Sáinz, *Informalidad urbana en América Latina. Enfoques, problemáticas e interrogantes* (1991), y Javier Contreras, *Enfoque crítico sobre las teorías del sector informal urbano en América*

Latina (2015), para presentar una revisión de las principales discusiones teóricas y políticas sobre el sector informal urbano.

No serán, sin embargo, estas las únicas fuentes para avanzar en esta tarea, solo que a nuestro modo de ver, estas dos obras recogen desde una mirada crítica, en dos momentos particulares del desarrollo económico y social del continente (comienzos de la década de 1990 y del siglo xxi), los resultados más sobresalientes de las discusiones a las que aluden. Lo anterior no implica, claro está, que se haya eludido la revisión de las fuentes originales de los debates, solo que por el volumen de información al respecto, las orientaciones de lectura ofrecidas por Pérez Sáinz y Contreras fueron de fundamental ayuda para centrar los debates.

Este ejercicio de lectura sobre el sector informal urbano se ubica en dos momentos: por un lado, recoge las discusiones emprendidas por el Semillero de Investigación: Problemas Urbanos Contemporáneos, del Departamento de Ciencias Sociales, desde 2015, y por otro, incorpora las reflexiones del autor sobre los procesos de producción de formaciones socioespaciales en periferias urbanas de Bogotá, que integran el desarrollo de su trabajo doctoral en geografía. En particular, el presente capítulo fue pensando como insumo y, a su vez, se presenta como producto del Seminario Intensivo: Informalidad Urbana en América Latina, adelantado con estudiantes del Semillero entre agosto y septiembre de 2018. Como resultado de este Seminario se produjo, además, el capítulo “Aproximaciones al problema de urbanización informal en América Latina”, incluido en este libro, escrito por Martín Andrés Díaz Sanabria, miembro del Semillero.

El presente capítulo se divide en cuatro apartados: en el primero, se ofrece un panorama en el que emerge el interés por estudiar el sector informal urbano, y allí se ubica el papel preponderante de la Organización Internacional del Trabajo (oit); en el segundo, se discuten los desarrollos que sobre el *siu* fueron impulsados en América Latina, tanto por el Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (Prealc) de la oit, como por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); en el tercer apartado se da cuenta de la configuración, a finales de la década de 1970 y durante los años 1980, de discursos que se oponían a la perspectiva dualista del *siu*, y que son catalogados por Pérez Sáinz (1991) como neomarxistas, además, se exploran los debates que sostuvieron los autores afines a esta corriente con aquellos que formaban parte del Prealc; en el cuarto apartado se precisan los elementos discursivos e ideológicos de la apuesta de lectura sobre la informalidad urbana, contenidos en la obra de Hernando de Soto, y cuyo enfoque advierte la entrada en escena del dogma neoliberal.

Ahora bien, el presente capítulo, más allá de discutir exclusivamente los enfoques y perspectivas sobre el sector informal urbano en América Latina, orienta su atención a precisar las continuidades que, desde la década de 1970

hasta la actualidad, se advierten en los abordajes *institucionales* sobre la informalidad. De allí que en las conclusiones se cierre con un llamado a emprender rutas de investigación que, con fundamento en las críticas neomarxistas al SIU, avancen en la comprensión de la informalidad urbana como una realidad socioespacial que escapa de los moldes funcionalistas-dualistas propios del discurso desarrollista que se impuso, desde hace varias décadas, en el continente.

Génesis del sector informal urbano (SIU)

En el pionero texto de Hart (1973), el sector informal corresponde a un escenario de oportunidad de ingresos económicos para las masas de migrantes campesinos desposeídos de la tierra que a su arribo a las ciudades¹ no encuentran ofertas de empleo estables en el sector formal y, en tal medida, se transforman en subproletariado que lejos de los canales institucionales (formales) se procura, por medio del autoempleo en la provisión de una amplia gama de productos y servicios (Hart, 1973, pp. 69-73), medios diversos de subsistencia.

En el informe de Hart (1973), el transporte informal aparece junto a otros servicios de diversos grados de especialización (reparación de calzado, sastrería, cuidado doméstico)² y esenciales en la vida cotidiana de las ciudades, como factores estructurantes del alto dinamismo económico del sector, en los cuales la baja inversión de capital, las altas rentabilidades y los reducidos niveles de instrucción o formación requeridos (p. 68), facilitan la vinculación del subproletariado y, en síntesis, la obtención de ingresos que garantizan la subsistencia en las urbes en expansión.

Con un énfasis puesto en el tipo de actividades que desarrollan los habitantes urbanos pertenecientes al sector urbano (Hart, 1973, p. 69), en el apartado de conclusiones de su informe, hace referencia a dos elementos que, a nuestro juicio, van a marcar gran parte de la fecunda agenda de discusión sobre el sector informal. En primer lugar, el autor discute tanto con lo que él denomina *posturas socialistas*, que encuentran en la existencia del sector informal una clara manifestación de los efectos de la *dominación capitalista extranjera* (p. 88), como con las llamadas *posturas liberales* que, en el otro extremo, encuentran en el sector informal *una posibilidad dramática* (p. 88) de transformar las condiciones

1 Hart (1973) centra su análisis en los migrantes que arriban a diversos distritos de Acra, capital de Ghana.

2 El artículo desarrolla una discutible tipología de las actividades del sector informal, distinguiendo dos factores: la legitimidad y la ilegitimidad; a su vez, divide estos factores en los tres sectores fundamentales de la economía en las décadas de 1960 y 1970.

de subdesarrollo a partir de la iniciativa endógena de las comunidades excluidas del mercado formal de trabajo. En segundo lugar, Hart aboga por una postura que medie entre las perspectivas socialista (*las restricciones impuestas desde el extranjero*) y liberal (*esfuerzo autónomo* o endógeno) (p. 89), y por ello propone la necesidad de avanzar en la producción de estudios empíricos sistemáticos que caractericen las condiciones de empleo y subempleo e incorporen “el lenguaje y el enfoque del desarrollo económico” (p. 89), en el cual el sector informal cumple un papel primordial.

Entretanto, el voluminoso informe de la OIT sobre el empleo en Kenia (ILO, 1972) señala –desde una perspectiva no exenta de ambigüedad– que si bien los problemas del empleo en este país obedecen a factores estructurales relacionados fundamentalmente con la alta concentración de la riqueza y el ingreso (p. 530), los análisis y diagnósticos se han centrado en observar esta realidad desde una perspectiva dualista que olvida el alto dinamismo de las *economías indígenas*³ (p. 530) presentes en las zonas urbanas de las principales ciudades de Kenia. Por ello, el informe procura rebatir la tesis de *las fuerzas externas* (p. 530) –o exteriores– de la economía, acudiendo al reconocimiento de la existencia de un subsector moderno al interior de la economía keniana, en cual se observan *actividades similares a las del sector formal* (p. 504), pero con bajos niveles de acceso a sistemas de crédito y, en consecuencia, limitaciones en las tecnologías empleadas para su desarrollo (p. 504): se trata del sector informal urbano (SIU) (ILO, 1972).

Según el informe sobre Kenia (ILO, 1972), una visión menos *peyorativa* que disminuya el *riesgo y la incertidumbre* en la informalidad (p. 7) podría contribuir a reducir los índices de desempleo, paliar las condiciones de pobreza y, en esta medida, dinamizar la economía en los sectores urbanos más desfavorecidos. En ese sentido, la respuesta más adecuada a los desajustes laborales consiste en reconocer las potencialidades y la *vitalidad* (p. 505) del sector informal –en cuanto generador de empleo para los migrantes y la creciente masa de desempleados– y no solo sus limitaciones funcionales.

Por otra parte, la formulación de políticas públicas ocupa un lugar privilegiado en el informe sobre Kenia. En este llaman la atención las propuestas orientadas a la generación de un *modelo de flujos intersectoriales* (ILO, 1972, p. 506) en el cual, más que rupturas entre el sector formal e informal, se reconozcan las posibilidades de complementariedad derivadas de la amplia gama de bienes y servicios que se producen en el sector informal, y que benefician tanto al segmento formal de la economía, como a la población de mayores ingresos.

3 Tanto en el texto de Hart (1973) como el de la ILO (1972) se refieren como indígenas a la población de ingresos bajos, procedentes de las zonas rurales que se asientan en los sectores periféricos de las principales ciudades de Ghana y Kenia.

En adición a la propuesta del *modelo de flujos intersectoriales*, el informe rescata como fundamento del alto dinamismo del sector informal, las *habilidades, prácticas y talentos empresariales* (ILO, 1972, p. 505) que, desarrollados a bajo costo, se encuentran –y se deben promover– en las poblaciones de menores ingresos. De lo anterior se colige que los limitados niveles de instrucción no deben ser asumidos como una consecuencia de las restringidas inversiones del Estado en el aparato educativo, sino, por el contrario, como una *respuesta adaptativa* (ILO, 1972, p. 205) propia de los pobladores de las zonas urbanas empobrecidas.

Si bien la mirada de la OIT sobre el empleo en Kenia (ILO, 1972) en algunos aspectos pareciera entrar en contradicción con las posturas del análisis Hart (1973) sobre la emergencia y definición del sector informal, es indiscutible que ambas se sustentan en los postulados de las *teorías económicas de la modernización* (Lewis, 1954, 1955; Levy, 1966; Black, 1966). Para el caso de América Latina, uno de los más connotados representantes de la teoría de la modernización es Gino Germani, sociólogo italiano radicado en Argentina, quien va a analizar la estructura social de América Latina a partir de la constante –y necesaria– transformación de las relaciones sociales tradicionales (Germani, 1963, 1969).

Desarrolladas en el contexto de la Guerra Fría y el combate a la expansión del comunismo, estas teorías van a representar, en el caso particular de América Latina, un instrumento discursivo y político fundamental en la tarea emprendida por Estados Unidos y diversas agencias de cooperación, fundaciones y entidades multilaterales cercanas a los intereses estratégicos de la potencia del norte (Escobar, 2007), orientada a estructurar perspectivas de desarrollo económico centradas en la industrialización y la modernización de los aparatos estatales.

De acuerdo con Cortés (2000) y Lautier (2004), la conceptualización y desarrollo del sector informal, se propone particularmente desde la perspectiva analítica emergida de la *teoría del desarrollo económico*, de Lewis (1954, 1955), en la cual el principal problema de las economías de los países subdesarrollados radica en la disponibilidad de una *oferta ilimitada de mano de obra* (Lewis, 1954, p. 139) improductiva, que al hallarse al margen del sector capitalista de la economía no está en capacidad de aportar capital a los ingresos nacionales. Ante esta situación, desde la perspectiva del funcionamiento de una *economía abierta* (Lewis, 1954, p. 176), el autor postula la necesidad de un aumento en la productividad y competitividad de los sectores de subsistencia por la vía de la ocupación de este amplio contingente de mano de obra en potenciales actividades que pueden no estar vinculadas con la industria o las ramas más avanzadas de la economía, pero que en definitiva contribuyen al aumento de las tasas de ahorro de este importante porcentaje de la población (Lewis, 1954, p. 157). Precisamente, el desempeño creciente del ahorro es visto por Lewis como uno de los factores esenciales del dinamismo de las cuentas nacionales en los países subdesarrollados.

Como se acotó, la visión de Arthur Lewis sobre el desarrollo económico en los países del tercer mundo va a encontrar en los estudios sobre el sector informal urbano un espacio particularmente fecundo para su aplicación, máxime cuando las perspectivas analíticas como las de Oscar Lewis (1961) o Vekemans y Silva (1976), centradas en la definición de marginalidad urbana, se encontraban siendo blanco de agudas críticas por haber puesto su acento más en las condiciones culturales y personales propias de los habitantes de los sectores urbanos relegados (Portes, 1984; Perlman, 1976) que en las desiguales estructuras socioeconómicas presentes en los países dependientes.

La visión estructuralista del Prealc

En este panorama de intensos debates, la OIT, por medio de la creación del Programa Regional para el Empleo en América Latina y el Caribe (Prealc), se va a convertir en un actor fundamental a la hora de caracterizar el sector informal urbano. De esta forma, Prealc centrará su acción en dos frentes: por un lado, la “exploración del fenómeno de la informalidad y detectar así sus principales dimensiones” (Pérez Sáinz, 1991, p. 18) y, por otro, “desarrollar un intento de formalización teórica” (p. 21). Así, ante lo que se enuncia como la carencia de un “marco conceptual para definir el sector” (Tokman, 1987a, p. 514), Victor Tokman y un amplio grupo de investigadores del Prealc van a encontrar en el pensamiento estructuralista latinoamericano de la Cepal una salida a las limitaciones teóricas que pesaban sobre el edificio del sector informal.

Al centrar la atención en la propuesta de *heterogeneidad estructural* de Aníbal Pinto (1970), el Prealc va a desarrollar una conceptualización del sector informal que, si bien reconoce diferencias marcadas entre los sectores formal e informal de la economía, según Pérez Sáinz (1991), difiere de los postulados dualistas, por cuanto se sugiere la existencia de un complejo campo de *relaciones entre sectores* (Pérez Sáinz, 1991, p. 21). Estas relaciones, según lo expuesto por Tokman, están atravesadas por “la alta desigualdad en la distribución de activos y, por ende, de ingresos, y [...] el acelerado crecimiento de la fuerza de trabajo” (Tokman, 1987a, p. 5) que, procedente de las zonas rurales, no logra ser absorbida por las industrias del sector moderno.

No obstante lo expuesto por Pérez Sáinz (1991), otros autores como Cortés (2003) o Cartaya (1987) sugieren que la visión del Prealc, a pesar de reconocer relaciones entre los sectores formal e informal, no logra despojarse de la perspectiva dualista que pretendía sobrepasar. Para argumentarlo, Cortés (2003) retoma, por un lado, los vínculos que existen entre los planteamientos de la OIT y la teoría del desarrollo de Lewis y, por otro, sugiere que existe una clara continuidad entre la mirada de marginalidad y la informalidad, por cuanto persiste una postura de la realidad económica desde la existencia de polos de desarrollo:

“marginales al proceso de modernización, actividades marginales a la acumulación capitalista, actividades informales en función de la tecnología y la localización de los mercados, o informales por ser extralegales” (Cortés, 2003 p. 598).

Por su parte, Cartaya (1987) argumenta que el enfoque del sector informal urbano “particularmente basado en una concepción dualista de la estructura económica y de los mercados laborales” (p. 80), surge “para calificar al conjunto de ocupaciones urbanas que permiten la supervivencia de numerosos contingentes de trabajadores que no logran insertarse en las empresas calificadas como modernas” (p. 80); de allí que aun cuando se postule la existencia de vínculos entre los sectores, la mirada siga centrada más en los caracteres distintivos que en las relaciones funcionales entre ellos.

Siguiendo a Cortés (2003), es posible afirmar, entonces, que hay una clara continuidad entre esta definición del sector informal y la que desarrolló la OIT en su informe sobre Kenia (ILO, 1972). Como se acotó, estas tres características del SIU se encuentran estrechamente relacionadas con los desarrollos conceptuales logrados por la Cepal al respecto de los problemas estructurales del desarrollo económico en América Latina; de allí que en la década de 1970, estos organismos –OIT, Prealc y Cepal– colaboraran de forma constante en el diagnóstico y explicación de los fenómenos de empleo y subempleo en el continente.

Por otra parte, frente al complejo panorama laboral marcado por las condiciones estructurales de existencia del sector informal urbano, Victor Tokman (1987b) propone una serie de medidas que, orientadas por *el imperativo de actuar*, equilibren la balanza entre el sector formal y el informal, y en esa misma medida “produzcan efectos generales suficientes para mejorar los niveles de vida de los ocupados en el sector informal” (p. 100). En particular, Tokman refiere tres vías por las cuales este objetivo se puede lograr: “La primera se refiere al apoyo productivo a las unidades informales. La segunda se relaciona con el apoyo a las personas que trabajan en el sector y, la tercera, a las normas y reglamentos que regulan estas actividades” (p. 100).

En el proceso de construcción del fundamento teórico para el sector informal urbano que se da en el seno del Prealc, también entran en consideración variables *extraeconómicas* (Tokman, 1987b, p. 95) que se inscriben en el campo de lo *cultural, político e ideológico* (p. 3), y que van a tener un impacto decidido en cómo se van a implementar los proyectos de mejora de las condiciones de vida en el sector informal. En este sentido, como asegura Tokman:

El retorno a la democracia en la gran mayoría de los países de la región [...] implica la necesidad de captación de votos por los partidos políticos. [...] resulta obvio que los informales, tanto como electores cuanto por su creciente capacidad de presión, constituyen un factor político que difícilmente puede ignorarse. (P. 95)

Entonces, podría decirse que, con la existencia discursiva y fáctica del sector informal urbano, no solo se está consolidando una forma de observar y explicar uno de los principales problemas de América Latina (el empleo), sino que también se está configurando un panorama político marcado por la permanencia e institucionalización de las tradicionales prácticas electorales y políticas de las frágiles democracias del continente.

Después de haber revisado la perspectiva analítica que asume el Prealc sobre el sector informal urbano, es pertinente volver sobre uno de sus fundamentos (la superación del dualismo) para acotar lo siguiente: no obstante lo expuesto por Pérez Sáinz (1991), otros autores como Cortés (2003) o Cartaya (1987) sugieren que la visión de Prealc, a pesar de reconocer relaciones entre los sectores formal e informal, no logra despojarse de la perspectiva dualista que pretendía sobrepasar. Para argumentarlo, Cortés (2003) retoma los vínculos entre los planteamientos de la OIT y la teoría del desarrollo de Lewis para sugerir que persiste en ellos una clara continuidad entre la mirada de marginalidad y la informalidad, por cuanto reproducen la perspectiva de lectura de la realidad económica desde la existencia de polos de desarrollo: “marginales al proceso de modernización, actividades marginales a la acumulación capitalista, actividades informales en función de la tecnología y la localización de los mercados, o informales por ser extralegales” (p. 598).

Por otra parte, Cartaya (1987) argumenta que el enfoque del sector informal urbano “particularmente basado en una concepción dualista de la estructura económica y de los mercados laborales” (p. 79), surge “para calificar al conjunto de ocupaciones urbanas que permiten la supervivencia de numerosos contingentes de trabajadores que no logran insertarse en las empresas calificadas como *modernas*” (p. 79); de allí que aun cuando se postule la presencia de vínculos entre los sectores, la mirada sigue centrada más en los caracteres distintivos que en las relaciones funcionales entre ellos.

Por lo anterior, llama la atención que contrario a lo promulgado por la OIT en informe sobre Kenia (ILO, 1972), en el sentido de vincular la informalidad como un subsector del sector moderno de la economía nacional, el Prealc, aduciendo las carencias conceptuales y teóricas de este, haya asumido la ambigua postura de, por un lado, caracterizar en orillas opuestas “el modo de producción prevaliente en el sector informal y el que predomina en las actividades modernas” (Tokman, 1987a, p. 515) y, por otro, encontrar las “interrelaciones entre sectores” (p. 516) presentes en el aparato productivo del continente.

Por otra parte, Pérez Sáinz (1991) en su balance sobre la informalidad urbana en América Latina, refiere que “gracias al impulso dado por el Prealc a la reflexión sobre el tema de la informalidad urbana [...], se desarrollaron estudios [...] cuyo denominador común fue mostrar, de manera fehaciente, la

articulación entre capital y actividades informales” (p. 24). Pérez Sáinz denomina esta emergente postura sobre la informalidad urbana como de carácter *neomarxista* (Pérez Sáinz, 1991, pp. 24-29).

Las visiones críticas: el enfoque neomarxista

En un ejercicio de revisión de trabajos de investigación realizados sobre actividades informales en espacios urbanos de América Latina, Pérez Sáinz (1991) encuentra que un importante número de estos toma distancia de los postulados del *on-Prealc*, y en su lugar optan por encuadrar estas actividades en el espectro de “una salarización encubierta y una sumisión del trabajo al capital” (p. 25). El trabajo de economía política de la urbanización en el tercer mundo de Bryan R. Roberts (1979) va a configurar, según Pérez Sáinz (1991), el “primer intento de formalización teórica de este tipo de estudios” (p. 25). Así, para Roberts (1979), el fenómeno de la informalidad se encuentra constituido por una nutrida variedad de actividades que “no se realizan en fábricas o por servicios asociados a la producción en gran escala” (p. 114) y en cambio tienen lugar en “talleres artesanales, negocios de reparación, pequeño comercio [...] y toda una gama de productores por cuenta propia” (p. 114).

A primera vista, la definición de Roberts (1979) no se distancia de la propuesta por el *Prealc*; empero, la novedad conceptual de la perspectiva neomarxista se encuentra precisamente en plantear que “estas actividades están articuladas con el sector moderno, que provee insumos y capital” (Pérez Sáinz, 1991, p. 26). En síntesis, se configura una discusión que va más allá del carácter aparentemente semántico de la distinción que existe entre las *relaciones* propuestas por *Prealc* y las *articulaciones* sugeridas por Roberts. Por ello, para comprender los alcances de la definición de Roberts, es preciso acotar que el punto nodal de su análisis se ubica justamente en la comprensión de cómo las actividades de pequeña escala que se ubican en los *intersticios de la regulación estatal* (Pérez Sáinz, 1991, p. 26) están imbricadas en los procesos de reproducción del capital en los países del tercer mundo.

En el panorama de la emergencia de estudios críticos de las posturas asumidas por *Prealc* y otros organismos sobre el sector informal urbano, junto al trabajo de Bryan Roberts (1979) se van a ubicar los estudios realizados por Larissa Lomnitz (1978), Ray Bromley (1978) y Chris Birkbeck (1978), estos dos últimos publicados en un número monográfico de la revista *World Development* sobre el *SIU*. Lomnitz (1978, citado por Pérez Sáinz, 1991) explora, “a partir [...] del análisis de redes sociales en un asentamiento popular de la Ciudad de México” (p. 24), el complejo entramado de vínculos o articulaciones, para emplear el lenguaje de Roberts (1979), que se tejen entre los sectores informal y formal. Según Pérez Sáinz (1991), dos ejemplos ilustran con precisión esta

perspectiva: en el primero, para el caso de las obras de construcción, Lomnitz identifica cómo “contratistas de obras transformaban a trabajadores independientes en asalariados indirectos de empresas constructoras” (citado por Pérez Sáinz, 1991, p. 24); en el segundo, la autora apunta cómo para el caso de las maquiladoras de prendas de vestir, “intermediarios controlaban a decenas de mujeres dispersas por la ciudad, recluidas en sus específicos hogares y sin contratos entre ellas, cuyo trabajo era apropiado finalmente por las firmas exportadoras” (Pérez Sáinz, 1991, p. 24).

En su texto sobre los recolectores de basura de la ciudad de Cali (Colombia), Birkbeck (1978) describe el panorama general de las actividades de recolección de basura en esta importante urbe industrial del suroccidente del país, y como resultado de su investigación en campo anota que existen fuertes “lazos que unen al recolector de basura con la gran industria” (p. 1173), en un escenario de subordinación de los *proletarios autoempleados* (p. 1174) con respecto a las fábricas de papel o cartón de la ciudad. Asimismo, el autor es enfático en señalar que por medio del “control sobre los precios de las materias recuperadas” (p. 1174) estas fábricas generan relaciones laborales aparentemente ambiguas, en las cuales “los recolectores de basura trabajan para las fábricas pero no son empleados de ellas” (p. 1174). Empero, estas relaciones tienen una total racionalidad económica, toda vez que gracias a la reproducción económica de estas estrategias de operación, logran disminuir sus costos de operación y, en consecuencia, aumentar sus tasas de ganancia.

Por otra parte, en el texto de Ray Bromly (1978) se desarrolla un detallado análisis de las condiciones laborales de los vendedores ambulantes o callejeros en la ciudad de Cali. Con este estudio, el autor busca aportar a la comprensión de las dinámicas sociales y económicas vinculadas con estas actividades, y en la misma medida, llamar la atención sobre la importancia de su estudio, en un panorama investigativo en el cual, según Bromley, se ha puesto poco cuidado a las ventas callejeras, y por lo mismo estas han sido calificadas como *ocupaciones totalmente irrelevantes* (p. 1161).

En este sentido, al momento de leer las relaciones entre los vendedores ambulantes y sus proveedores, Bromley (1978) encuentra que un importante número de aquellos que habían sido descritos como empleados independientes por otros estudios o por las autoridades locales, en realidad laboraban bajo la forma de *comisión por venta* y también como *trabajadores dependientes* (pp. 1166-1167). El autor va más allá al asegurar que referir los mecanismos de subsistencia de los vendedores ambulantes como propios del escenario de la informalidad encubre “situaciones potencialmente explotadoras, en que las que el comerciante en la calle está en desventaja en relación con las empresas de mayor escala” (p. 1167). En el cierre del texto, se desarrolla una cerrada crítica a la perspectiva que sobre la informalidad ha asumido la OIT, y resalta que esta es

tan peligrosa y poco práctica (p. 1168), como aquella de desatención que asumían los gobiernos nacionales y locales antes de la emergencia del discurso del SIU.

Por lo anterior, cobra relevancia observar desde la perspectiva de Roberts (1979), Lomnitz (1978), Birkbeck (1978) y Bromley (1978), cómo gracias a la existencia de excedentes de fuerza de trabajo, las grandes industrias junto con el comercio formal se encuentran en posición de llevar a cabo un proceso de explotación intensa de esta. Esto se logra, entonces, por dos mecanismos que se encuentran articulados: 1) al encontrar una masa importante de personas desempeñando actividades de pequeña escala, estas unidades de trabajo podrían ser empleadas por medio de la “subcontratación de trabajo colectivo [...] o por medio de la contratación de trabajo temporal” (Contreras, 2015, p. 45) en diversas funciones del proceso productivo; y 2) en un panorama de expansión de la oferta de mano de obra se halla el escenario de oportunidad para las acciones anteriores, y es precisamente allí donde los empresarios pueden “provocar una mayor competencia entre los trabajadores” (p. 45). Estos mecanismos logran, de acuerdo con la visión neomarxista, que finalmente haya una presión a la baja en los salarios, y de esta forma habría una evidente tendencia al aumento significativo de las ganancias de los empresarios que se ubican en el sector formal de la economía.

En el desarrollo de las perspectivas neomarxistas sobre el sector informal urbano, además de los autores ya referidos, van a cobrar relevancia los estudios realizados durante la década de 1980 por Alejandro Portes y John Walton (1981), y Alejandro Portes y Lauren Benton (1984). De acuerdo con Pérez Sáinz (1991), el texto *Labor, class and the international system*, de Portes y Walton (1981), representa una línea de continuidad con lo propuesto por Roberts (1979) al respecto de la articulación que existe entre las actividades desarrolladas en los sectores formal e informal de la economía, solo que ahora Portes y Walton (1981) van a avanzar en la discusión sobre “la funcionalidad de las actividades informales respecto al capital” (Pérez Sáinz, 1991, p. 27). Portes y Walton (1981, citados por Pérez Sáinz, 1991) van a plantear que la funcionalidad se manifiesta en dos ámbitos: en primer lugar, las actividades informales permiten “a las empresas formales emplear o despedir trabajadores según su conveniencia sin asumir los costos de compensación por desempleo” (p. 27); en segundo lugar, “el sistema de redes [...] informales tiene ventajas individuales para las empresas formales en términos de la expansión de una fuerza de trabajo [...] estable” (pp. 99 y 103).

Acudiendo a un análisis claramente marxista, Portes y Walton (1981, citados por Pérez Sáinz, 1991) van a asegurar que “el trabajo no pagado de trabajadores familiares e informales alimenta las arcas de las grandes corporaciones industriales y financieras” (pp. 99 y 103), toda vez que, de acuerdo con Contreras (2015), al “provocar una mayor competencia entre los trabajadores” (p. 45) es posible disminuir el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, con lo cual las tasas de plusvalía obtenidas por los empresarios formales experimentarían un aumento sustancial.

Como resultado de sus aportes a la teorización de la informalidad, a finales de la década de 1980 Alejandro Portes se posicionará como una de las voces críticas más autorizadas sobre el tema. Es precisamente en este tiempo en el que va a coordinar, en colaboración con Manuel Castells y Lauren Benton, el libro *The informal economy. Studies in advanced and less developed countries* (1989), y allí sostendrá un importante debate teórico en el cual tiene por interlocutores a Victor Tokman y a Emilio Klein (1988), ambos connotados funcionarios del Prealc.

En el caso particular del debate con Tokman y Klein, es importante resaltar que el artículo “Desarrollo industrial y absorción laboral: una reinterpretación”, de Portes y Benton (1987), retoma los presupuestos sobre los cuales se ha explicado desde la década de 1960 el problema del empleo en América Latina, y allí se discuten tanto las posturas asociadas a la teoría del desarrollo de Arthur Lewis (1954, 1955), como las que se vinculan con las críticas elaboradas por la teoría de la dependencia. Ahora bien, el centro del debate está en las limitaciones que identifican Portes y Benton (1987) en los postulados teóricos que subyacen a los estudios empíricos adelantados por Prealc, de los cuales ya se hizo una sucinta revisión. En particular, Portes y Benton señalan que en las hipótesis que desarrollan tanto la Cepal como el Prealc sobre los limitados niveles de absorción de la fuerza laboral por parte de las empresas formalmente constituidas, se pierde de vista que junto a los “trabajadores [...] contratados en términos formales e institucionalizados” (p. 120) coexiste un mecanismo de utilización de la mano de obra en el que los “contratos y despidos se producen informalmente [...] [y por tanto] las transacciones entre los trabajadores y los empleadores no suelen registrarse y [...] no figuran en estadísticas oficiales” (p. 120).

Portes y Benton (1987) llaman la atención sobre la importancia que tiene para el funcionamiento del mercado laboral en América Latina la forma en la cual en “una situación de abundancia de mano de obra, los salarios crecientes en el empleo formal crean estímulos para [...] hacer uso del sector informal” (p. 121). Apoyados en los estudios de Bromley (1978) y Birkbeck (1978) en Cali, Lomnitz (1978) en la Ciudad de México, Duarte (1983) en Santo Domingo, Schmukler (1979) en Buenos Aires, y Möller (1979) en Lima, los autores señalan que si bien estos trabajos no constituyen evidencia empírica concluyente, sí permiten rastrear una situación de aprovechamiento del empleo informal por parte de las grandes compañías ubicadas en el sector formal de la economía. Portes y Benton (1988) sugieren, además, que “las prácticas de trabajo informal [...] deterioran la seguridad económica de quienes están sujetos a ellas” (p. 133), y por otra parte señalan que las “caracterizaciones iniciales del sector informal como marginal y excluido” (p. 134) deben darle paso a una visión en la cual se reconozcan las articulaciones funcionales que existen entre los mecanismos formal e informal de vinculación de la fuerza de trabajo en América Latina.

Las críticas realizadas por Portes y Benton (1988) a la teorización ofrecida por el Prealc, van a ser contestadas por Victor Tokman y Emilio Klein (1988) en la misma revista en la que los primeros habían publicado su texto: *Estudios Sociológicos*, de El Colegio de México (Colmex). En el artículo “Sector informal: una forma de utilizar el trabajo como consecuencia de la manera de producir y no viceversa. A propósito del artículo de Portes y Benton” (Tokman y Klein, 1988), los dos investigadores del Prealc se proponen refutar lo que consideran problemas de interpretación en la postura de Portes y Benton (1987). En primer lugar, Tokman y Klein (1988) señalan que la definición del sector informal como “un tipo de relaciones sociales que se dan en el mercado entre trabajadores y empleadores, y que se remite a las características institucionales de dichas relaciones” (p. 206) es limitada por cuanto no toma en cuenta que el sector informal “es una manera de producir que se define por el escaso capital con que cuentan las empresas, su tecnología rudimentaria en términos relativos y su desconexión de los circuitos financieros formales” (p. 27).

A la hora de caracterizar el sector informal como una manera de producir, Tokman y Klein (1988) asientan una perspectiva analítica que hunde sus raíces en los postulados del estructuralismo cepalino, y en la misma medida toman distancia de la lectura más relacional que aportan Portes y Benton (1987). Así, para Tokman y Klein (1988), la existencia del sector informal puede seguir siendo explicada bajo la premisa de los caracteres que diferencian a este del sector formal, y no por las articulaciones entre ellos, como lo sugiere la postura neomarxista.

En el marco de este intenso debate intelectual –y político–, la respuesta de Tokman y Klein (1988) a la pregunta formulada por Portes y Benton (1987): “¿A qué se debe que los migrantes sigan llegando a las ciudades, si la industria moderna no genera suficiente empleo?” (p. 120), va a revelar de forma precisa los rasgos analíticos del enfoque adoptado por los dos investigadores del Prealc. Tokman y Klein (1988) aseguran que existen tres situaciones que promueven, por un lado, la llegada constante de migrantes a las ciudades y, por otro, su vinculación al sector informal: 1) la facilidad de ingreso al sector informal; 2) la posibilidad de que otros miembros de la familia, aparte del jefe de hogar, se empleen, y 3) las ventajas, en términos de calidad de vida, que ofrece la ciudad frente al campo (p. 210). En este sentido, los autores asumen que la migración y posterior vinculación al sector informal corresponde a un proceso de elección racional en el cual quienes arriban a la ciudad están en capacidad de optar, dadas las *facilidades de vinculación*, por desempeñar u ocuparse en actividades informales que si bien no cuentan con el pleno respaldo legal, les sirven como puerta de entrada al escenario urbano, pródigo de oportunidades de progreso, y por lo mismo distante del atrasado (tradicional) escenario rural.

Finalmente, como parte del debate entre las perspectivas estructuralista y neomarxista, Alejandro Portes (1989) va a responder al artículo ya referido de Tokman y Klein (1988) con el texto titulado “La informalidad como parte integral de la economía moderna y no como indicador de atraso: respuesta a Klein y Tokman”. En este trabajo, Portes repasa los fundamentos de la exposición de Tokman y Klein, y comienza por decir, en una clara crítica a estos, que “gran parte de las actividades económicas informales en *América Latina*, lejos de hallarse aisladas en un sector ‘tradicional’ o atrasado, constituyen parte integral de la economía moderna y contribuyen a su funcionamiento” (Portes, 1989, p. 369). Enseguida, el autor pone en duda, además de la definición del sector informal propuesta por Tokman y Klein, la forma en la cual esta se presenta revestida con un criterio de verdad o de realidad incontestable; así, dice Portes que “el valor de una u otra definición no puede establecerse *a priori*, sino con base en su utilidad para la comprensión de un determinado universo de fenómenos” (Portes, 1989, p. 370).

La perspectiva neoliberal: *El otro sendero*, de Hernando de Soto

Es claro, entonces, que el debate emprendido por Portes y Benton a finales de la década de 1980 representa para el panorama de análisis del sector informal urbano una clara ruptura con los clásicos postulados emergidos de los estudios de la OIT en África. Ahora bien, corresponde al mismo periodo de tiempo la emergencia de una nueva visión sobre la informalidad en América Latina, esta vez promovida por el economista peruano Hernando de Soto, quien a finales de la década del setenta había conformado el Instituto Libertad y Democracia, con el objetivo de promover los valores de la economía del libre mercado en los países subdesarrollados.

Siguiendo a Cartaya (1987) y Contreras (2015), la visión de Hernando de Soto sobre la informalidad en las principales ciudades de América Latina y en particular del Perú, abrevia de los fundamentos discursivos del neoliberalismo. La fuente a la que acuden estos autores es el libro *El otro sendero. La revolución informal*, publicado originalmente en 1986 en Perú, en el cual De Soto (1987) muestra, a través del análisis de “tres sectores específicos –la vivienda, el transporte y el comercio–” (p. 13), cómo “los informales se están adueñando de la mayor parte del mercado, apropiándose de terrenos para vivir y producir, instalándose en las calles como ambulantes [...] o invadiendo las vías principales de la ciudad [Lima] para prestar el servicio de transporte” (p. 13).

Pérez Sáinz (1991) muestra que “De Soto busca exponer no solo las dimensiones de los mismos [los tres sectores referidos arriba], sino revelar cómo los informales, antes su exclusión de la economía y la ciudad, responden de manera

múltiple e imaginativa generando sus propios espacios” (p. 37). De esta manera, con el acento en la creatividad y el espíritu empresarial (en términos contemporáneos se podría hablar de emprendimiento) de los informales, De Soto (1987) muestra “al conversar [...] con los informales mismos” (p. 171), que “sus quejas estaban referidas fundamentalmente a la ley y que sus esfuerzos estaban dirigidos a obtener reconocimiento del sistema legal” (p. 171).

Lo anterior constituye para De Soto (1987) un terreno fértil a la hora de incorporar en su horizonte de análisis una cerrada crítica a los “costos excesivamente elevados para operar legalmente” (p. 225) que deben sufragar los informales. A partir de lo que se muestra como una realidad empíricamente incontestable, traza un sendero por el cual los informales podrían transitar para no quedar “al margen del sistema” (p. 225). Se trata, en síntesis, de hallar en los “instrumentos facilitadores del derecho” (p. 225) la forma de hacer “más eficientes las actividades económicas y sociales” (p. 225) de los informales; para ello, el autor sostiene que le corresponde al Estado generar un espacio económico libre de las trabas burocráticas que le impiden a los informales beneficiarse de recursos como “los derechos de propiedad, contratos y responsabilidad extracontractual” (p. 233).

Bajo la perspectiva del neoinstitucionalismo, la apuesta política de De Soto (1987) para transformar las condiciones y normas bajo las cuales los formales e informales se integran a la economía está enmarcada en el imperativo de “simplificar y descentralizar la función pública y [...] desregular la vida productiva nacional” (p. 301). Si se alcanzan las transformaciones institucionales que permitan reconocer “el trabajo y la propiedad a quienes la formalidad hoy excluye” (p. 314), será posible aprovechar estas potencialidades para la creación de “una base empresarial amplia” (p. 296) que sustente una “economía auténticamente democrática; es decir, una economía de mercado” (p. 296).

De lo expuesto por De Soto (1987) en el libro *El otro sendero*, es sugerente observar una línea de continuidad que se extiende hacia algunos de los postulados que sustentan la perspectiva del sector informal urbano emergida del informe de la OIT sobre Kenia. En particular, y aunque De Soto no lo referencia textualmente en su libro, es claro el vínculo cuando menciona que hay un alto potencial creativo en las respuestas que las personas estructuran para hacer frente a las condiciones de pobreza urbana (De Soto, 1987, p. 296-314; ILO, 1972, p. 505); es decir, se debe reconocer en la informalidad no una limitación de la economía urbana para producir empleo, sino una posibilidad de generar ingresos y relaciones comerciales estables (modernas).

Por otra parte, es importante poner de relieve cómo el papel del Estado, aunque desde ópticas radicalmente opuestas, es central tanto en la postura neomarxista (Roberts, 1979; Bromley, 1978; Birkbeck, 1978; Portes y Benton, 1987) como

en la neoliberal (De Soto, 1987). En el caso de la visión neomarxista, el Estado, en cuanto sirve a los intereses de clase de la burguesía, permite la existencia de la *explotación encubierta* bajo formas de trabajo flexible que se ubican fuera del alcance de la legislación laboral. En la postura neoliberal, las funciones del Estado han estado centradas en la redistribución de la riqueza y no en permitir su creación, razón por la cual el alto potencial empresarial de la informalidad no ha sido aprovechado como es debido. Por lo anterior, es claro que, en el panorama de las intensas transformaciones políticas y económicas de finales de la década de 1980, la visión de Hernando de Soto haya gozado de amplia difusión y aceptación en diversos escenarios tanto académicos como de gobierno.

Conclusiones

Como se observó en el capítulo, el problema de la informalidad urbana en América Latina representa un profuso campo de debates que mantienen plena vigencia en la actualidad. Una revisión actual al panorama del trabajo informal en el continente muestra cifras alarmantes de crecimiento año tras año, a lo cual ha contribuido el compromiso de los gobiernos con la implementación de agendas políticas neoliberales que se traducen en reducción de las ya menguadas garantías laborales. Así, independiente de la llegada, en la primera década del presente siglo, de gobiernos progresistas a varios países de la región, las tendencias, por ejemplo, de flexibilización laboral, recortes en las plantas de trabajadores, la tercerización y la persecución sindical, han marcado el rumbo del mundo del trabajo.

Por otra parte, el debilitamiento de los movimientos de trabajadores, aunado a la relocalización de actividades industriales en otros continentes, ha allanado el terreno para que estas políticas de corte neoliberal se enraícen en América Latina. Junto con ello, es necesario advertir que los cambios, desde las décadas de 1980-1990, en el rumbo de la investigación sobre el trabajo informal están articulados a las orientaciones de política macroeconómica definidos desde las élites nacionales como internacionales. De esta forma, los nuevos arreglos institucionales de la nueva *gobernanza* han estado acompañados de la configuración de centros especializados de investigación (*think tank*) que recomiendan entender la informalidad no como un producto de los desarrollos geográficos desiguales propios del capitalismo, sino como espacios de oportunidad para millones de trabajadores.

Derivado de ello, en la actualidad proliferan discursos que sostienen, al amparo de las estrategias propagandistas del emprendimiento, que la informalidad corresponde al no desarrollo de capacidades de agencia individual.

Así, los millones de trabajadores ambulantes, las trabajadoras domésticas en régimen de semiesclavitud, y aquellos que han sido despedidos por las políticas de recortes de personal, en realidad son el germen de una sociedad de autoempleados que no necesitan estar al abrigo de las garantías ofrecidas por los Estados. Sin embargo, a pesar de las maniobras argumentativas de estos discursos contemporáneos, la realidad muestra, cada vez con mayor crudeza, que las condiciones de superexplotación laboral no son un escenario de oportunidad, sino que representan la existencia de un régimen económico, político y social claramente excluyente y desigual.

Cabe preguntarse, entonces, con relación a los estudios neomarxistas de las décadas del setenta y ochenta, si las políticas neoliberales y su discurso del emprendimiento han servido de alivio para quienes se ocupan en el sector informal, o aun interrogarnos si existe un sector informal urbano ubicado en las antípodas del mercado formal de trabajo. Pues bien, se podría responder, extendiendo los alcances de la situación de los trabajadores del reciclaje en Cali estudiada por Birkbeck (1978), con una pregunta que animó las discusiones del Seminario del cual este capítulo es insumo y producto: ¿qué ocurriría con los niveles de venta de una multinacional como Quala de Colombia, productora de Bon-Ice, Vive 100 o Popetas, si no tuviera en los trabajadores ambulantes, que ocupan habitualmente los semáforos de las ciudades latinoamericanas, su principal canal de distribución y, en cambio, solo pudiera acudir los canales *formales* de distribución?

Arriesgando una respuesta a la anterior pregunta, se podría decir que esta multinacional no podría mantener sus fabulosas ganancias si no fuera por las condiciones de superexplotación a las que se encuentran sometidos los trabajadores ambulantes que distribuyen, día a día, sus productos. Sin embargo, no basta con concluir con lo que, aparentemente, es una realidad inobjetable. Antes bien, es indispensable, en primer lugar, comprender la informalidad urbana como un fenómeno que entra en tensión dialéctica con el funcionamiento de mercado formal del trabajo, para luego develar los mecanismos de acumulación por desposesión que sustentan esta lógica.

Referencias

- Birkbeck, C. (1978). Self-employed proletarians in an informal factory: the case of Cali's garbage dump. *World Development*, 6(9-10), 1173-1185.
- Black, C. E. (1966). *The dynamics of modernization: a study in comparative history*. Harper Torchbooks.

- Bromley, R. (1978). Organization, regulation and exploitation in the so-called 'urban informal sector': the street traders of Cali, Colombia. *World Development*, 6(9-10), 1161-1171.
- Cartaya, V. (1987). El confuso mundo del sector informal. *Nueva Sociedad*, 90, 76-88.
- Contreras, J. J. (2015). *Enfoque crítico sobre las teorías del sector informal urbano en América latina*. Itaca.
- Cortés, F. (1988). La informalidad: comedia de equivocaciones. *Nueva Sociedad*, 97, 41-49.
- Cortes, F. (2003). La metamorfosis de los marginales. En E. De la Garza Toledo (ed.), *Tratado latinoamericano de sociología del trabajo* (pp. 592-618). Flacso, Colmex, UAM, FCE.
- De Soto, H. (1987). *El otro sendero. La revolución informal*. Oveja Negra.
- Duarte, I. (1983). Fuerza laboral urbana en Santo Domingo. *Estudios Sociales*, 16(53), 31-53.
- Escobar, A. (2007). *La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. El Perro y la Rana.
- Germani, G. (1963). La movilidad social en Argentina. En S. Lipset y R. Bendix, *Movilidad social en la sociedad industrial* (pp. 317-365). Editorial Universitaria de Buenos Aires.
- Germani, G. (1969). *Sociología de la modernización*. Paidós.
- Hart, K. (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. *The Journal of Modern African Studies*, 11(1), 61-89.
- International Labour Office (ILO). (1972). *Employment, incomes and equality. A strategy for increasing productive employment in Kenya*. Ginebra.
- Lautier, B. (2004). *L'économie informelle dans le tiers monde*. La Découverte.
- Levy, M. J. (1966). *Modernization and the structure of societies*. Princeton University Press.
- Lewis, A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *Manchester School*, 22(2), 139-191.
- Lewis, A. (1955). *Theory of economic growth*. Unwim University Books.
- Lewis, O. (1961). *Antropología de la pobreza. Cinco familias*. Fondo de Cultura Económica.
- Lomnitz, L. (1978). Mecanismos de articulación entre el sector informal y el sector formal. *Revista Mexicana de Sociología*, 40(1), 131-153.
- Möller, A. (1979). Los vendedores ambulantes en Lima. En V. Tokman y E. Klein (eds.), *El subempleo en América Latina* (pp. 415-471). Clacso, El Cid Editores.

- Pérez Sáinz, J. P. (1991). *Informalidad urbana en América Latina. Enfoques, problemáticas e interrogantes*. Flacso-Guatemala, Nueva Sociedad.
- Perlman, J. (1976). *The myth of marginality. Urban poverty and politics in Rio de Janeiro*. University of California Press.
- Pinto, A. (1970). Naturaleza e implicaciones de la “heterogeneidad estructural” de la América Latina. *El Trimestre Económico*, 37(145(1)), 83-100.
- Portes, A. (1984). El sector informal: definiciones, controversias, relaciones con el desarrollo nacional. En J. Walton *et al.*, *Ciudades y sistemas urbanos. Economía informal y desorden espacial* (pp. 95-113). Clacso.
- Portes, A. (1989). La informalidad como parte integral de la economía moderna y no como indicador de atraso: respuesta a Klein y Tokman. *Estudios Sociológicos*, 4(20), 369-374.
- Portes, A. y Benton, L. (1984). Industrial development and labor absorption: a reinterpretation. *Population and Development Review*, 10(4), 589-611.
- Portes, A. y Benton, L. (1987). Desarrollo industrial y absorción laboral: una reinterpretación. *Estudios Sociológicos*, 5(13), 111-137.
- Portes, A. y Walton, J. (1981). *Labor, class, and the international system*. Academic Press.
- Portes, A., Castells, M. y Benton, L. (1989). *The informal economy. Studies in advanced and less developed countries*. Johns Hopkins University Press.
- Roberts, B. (1979). *Cities of peasants: the political economy of urbanization in the Third World*. Sage.
- Schmukler, B. (1979). Diversidad de formas de las relaciones capitalistas en la industria argentina. En V. Tokman y E. Klein (eds.), *El subempleo en América Latina* (pp. 309-351). Clacso, El Cid Editores.
- Tokman, V. (1987a). El sector informal: quince años después. *El Trimestre Económico*, 54(215(3)), 513-536.
- Tokman, V. (1987b). El imperativo de actuar. El sector informal hoy. *Nueva Sociedad*, 90, 93-105.
- Tokman, V. y Klein, E. (1988). Sector informal: una forma de utilizar el trabajo como consecuencia de la manera de producir y no viceversa. *Estudios Sociológicos*, 6(16), 505-212.
- Vekemans, R. y Silva, I. (1976). *Marginalidad, promoción popular y neomarxismo*. Cedral.

Capítulo 4. Aproximaciones al problema de urbanización informal en América Latina

Martín Andrés Díaz Sanabria

Hablar de la urbanización informal es hacer referencia a una serie de procesos espaciales e históricos presentes en la realidad de las ciudades de los países del sur global; abordar estos procesos ha sido tarea ingente de académicos e investigadores de lo urbano alrededor del globo. ¿Cómo se ha dado la urbanización informal en las periferias de América latina?, ¿desde qué perspectiva se pueden estudiar?, son interrogantes frecuentes que suscitan debates importantes que contribuyen al análisis concreto del fenómeno de la informalidad en la producción de las ciudades. Este escrito pretende hacer mella debido a la importancia que genera el estudio de la urbanización informal como categoría para problematizar las prácticas que configuran nuestras urbes.

Para realizar una aproximación conceptual sobre la urbanización informal, este capítulo se estructura de la siguiente manera: primero, aborda una serie de características que generan los procesos de urbanización informal que se fueron gestando, en mayor medida, desde la segunda mitad del siglo xx en América Latina, particularmente en Colombia y Bogotá. Segundo, expone de dónde surge el término de *urbanización informal*, las distintas formas en que se ha estudiado este fenómeno y las teorías que lo trabajan. Finalmente, se realiza una reflexión a modo de conclusión, sobre estudio de la producción del espacio urbano para generar apuestas prácticas que estén en vías de superar las desigualdades sociales, en medio de un oscuro panorama de la investigación en ciencias sociales donde prima el estudio de banalidades y particularidades que poco o nada identifican las causas estructurales de los problemas.

Características generales y particulares de los procesos de urbanización informal en América Latina y Colombia

La urbanización informal –o urbanización espontánea, marginal, irregular, no planificada, clandestina¹– es un fenómeno dinámico en el tiempo y en el espacio, que emerge como principal mecanismo de acceso al suelo por parte de la población en condición de pobreza en países periféricos, como en el caso de los de América Latina, cuyas características económicas y políticas generan este tipo de fenómeno espacial.

Una lectura rigurosa de los procesos de la urbanización informal en América Latina nos tiene que remitir a una serie de aspectos estructurales que los ocasionan, pero que, si bien obedecen a unas causas similares, el proceso en sí responde a las particularidades del contexto de cada país. En cuanto a lo estructural, las características propias del capitalismo periférico para la segunda mitad del siglo, como la industrialización por sustitución de importaciones y la descomposición de las formas agrarias (Almondoz, 2008), con el consecuente desplazamiento de campesinos hacia las incipientes ciudades de aquella época serán claves para entender la producción del espacio urbano y las dinámicas que de aquí se subyacen.

A diferencia de los países centrales de capitalismo avanzado, en los que en la década de 1970 aún se sostenían los últimos pilares del Estado de bienestar con la producción estatal de vivienda, Latinoamérica se batía entre la remoción de barrios que se habían gestado en las periferias de las ciudades por procesos informales y entre la autoproducción del hábitat o autoconstrucción de vivienda con algunos subsidios del Estado, como lo menciona Samuel Jaramillo en “Reflexiones sobre la ‘informalidad’ fundiaria como peculiaridad de los mercados del suelo en las ciudades de América Latina” (2008):

[...] otro de los perfiles más conspicuos de las grandes ciudades latinoamericanas: su vertiginoso crecimiento poblacional que expande súbitamente la demanda por espacio construido e infraestructura urbana, generando tensiones mucho más pronunciadas de lo que se observó en el proceso de urbanización en los países capitalistas de desarrollo clásico. (P. 17)

A la luz de las reconfiguraciones del capitalismo a nivel mundial, las políticas neoliberales (Pradilla, 1990) se convierten en la base de los planes de gobierno de

1 Al hacer referencia a estos conceptos encontramos trabajos investigativos realizados por: Carlos Puentes Burgos (2003) (urbanización clandestina), Topalov (1979) (urbanización espontánea), Charlotte Vorms (2003) (urbanización marginal), Roberto García Ortega (2001) (urbanización irregular).

los países latinoamericanos para los años ochenta y noventa, y primeras décadas de siglo XXI. Tales políticas producen unas relaciones diferentes en la contradicción capital/trabajo, manifiestas en la priorización del sector servicios con una fuente de trabajo basada en un régimen de salarios bajos (Jaramillo, 2008), ampliación de las tasas de desempleo, sobreexplotación laboral y, por ende, aumento en la producción informal. Allí se da una explosión de la urbanización informal en la mayoría de las ciudades, pues estas son atravesadas por la dinámica económica del capitalismo, en la que se introducen políticas tendientes a la regularización de este proceso, lo que implica la entrada de los barrios informales a las lógicas del mercado, estructurando nuevas prácticas urbanas en las que intervienen agentes inmobiliarios, elevando los costos en el mercado, que ante la avanzada neoliberal en la producción para las clases populares se hacen impagables y recrean las condiciones para que el fenómeno de la informalidad se siga reproduciendo.

Al abordar el caso colombiano, en el desarrollo de urbanización, si bien hay similitudes con otros países latinoamericanos, existen particularidades incuestionables tanto en la dinámica económica, política, social y cultural, como en la puesta en marcha de políticas que de alguna u otra forma pretendieron hacer frente a la problemática de la expansión urbana y la proliferación de asentamientos informales. Bogotá, al tener la primacía urbana y para efectos de este artículo, será analizada históricamente en relación con los procesos de producción del espacio urbano.

Es necesario precisar que la urbanización, tanto en el país como en el caso concreto de Bogotá, no se desarrolla de manera unívoca, sino que se vale de la coexistencia de lo formal y lo informal, como lo menciona el estudio realizado por el grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad:

[...] el proceso de urbanización en Colombia no se ha desarrollado sobre un modelo de urbanización único que haya sido aceptado colectivamente, sino que, por el contrario, en la práctica existe un modelo de ciudad basado en la superposición de las diferentes manifestaciones de lo formal y lo informal. (Torres Tovar, 2009, p. 20)

Reflexiones actuales sobre la informalidad y el acceso al suelo urbano en las ciudades latinoamericanas

Ante la avanzada neoliberal, cuyas expresiones se dan irrefutablemente en el espacio urbano contemporáneo, y frente a las políticas desarrolladas por las administraciones nacionales y locales en concordancia con la matriz capitalista,

es vital analizar cómo se ha producido la ciudad y cómo se presenta la urbanización informal en las periferias, a su vez de la necesaria revisión de las teorías que estudian este proceso para no caer en tergiversaciones en futuras investigaciones.

En general, el proceso de la urbanización informal ha atravesado históricamente la producción del espacio urbano latinoamericano; en ese sentido cualquier apuesta de acción sociopolítica desde nuestros territorios debe estar acompañada del estudio riguroso de ese fenómeno, de la caracterización de los agentes que lo constituyen, de los rasgos que lo componen, de los efectos que genera en la dinámica urbana. En fin, la investigación y la acción sociopolítica deben ir de la mano, acorde a las necesidades de las comunidades históricamente excluidas que hoy luchan día a día por el derecho a la ciudad, tal como lo menciona David Harvey en *Ciudades rebeldes* (2013):

Hay que derrocar y remplazar la totalidad del sistema capitalista de acumulación perpetua, junto con sus estructuras asociadas de clase explotadora y poder estatal. La reivindicación del derecho a la ciudad es una estación intermedia en la ruta hacia ese objetivo. Nunca puede ser un objetivo en sí misma, aunque cada vez más parezca una de las vías más propicias a seguir. (P. 16)

Enfoques teóricos alrededor de la urbanización informal

Si bien nos hemos referido, de una manera somera, a una serie de particularidades y características generales que producen la urbanización informal en Latinoamérica y Colombia, es necesario exponer el modo como se ha estudiado este fenómeno, cuáles son las teorías que lo explican, su introducción y sus rasgos fundamentales. La formación del concepto de *informalidad*, el dualismo y la teoría de la marginalidad, los aportes del marxismo-estructuralista y las reinterpretaciones actuales del marxismo, serán expuestos con el fin de establecer una mirada general sobre la urbanización informal desde la cual se puedan considerar distinciones entre una y otra teoría para poder desarrollar una base conceptual propia para futuras investigaciones. La emergencia del concepto según Juan Saldaña (2016) data de los años 1970 y se refiere a las dinámicas del trabajo en los países periféricos, más exactamente en Ghana, en pleno contexto de descolonización en África:

Una de las primeras aproximaciones al término informalidad y a las implicaciones de esta, se dió en la década de los 70 cuando Keith Hart acuñó el término para referirse a las dinámicas de empleo urbano independiente en Ghana, en donde existía una fuerza de trabajo urbana no absorbida por el mercado de trabajo organizado. (P. 7)

Víctor Tokman (2001) desarrollaría el concepto de *informalidad* en América Latina a partir del informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en África anteriormente mencionado, identificando una serie de particularidades como la descentralización productiva y también, como resultado de la presión del excedente de mano de obra por empleo, cuando los buenos empleos, generalmente en los sectores modernos, son insuficientes. Concepto que sería traslapado a los estudios urbanos.

Emergencia y consolidación del discurso del desarrollo y subdesarrollo como marco de contención

Para entender las elaboraciones teóricas, los conceptos y categorías sobre la urbanización informal en América Latina, es necesario hacer referencia a los conceptos de desarrollo y subdesarrollo, que se empezaban a posicionar en la década de 1950 por parte de organismos e instituciones políticas, económicas y académicas norteamericanas y europeas, clara estrategia de contención ante el supuesto avance del comunismo internacional.

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, América Latina empieza a ejercer un papel clave en las aspiraciones de Estados Unidos de ser el país hegemónico en el mundo. Para tal fin, el país del norte, con la connivencia de las élites de locales y en consonancia con el proyecto expansivo del capitalismo a nivel global, sugiere la creación de organismos multilaterales tendientes a garantizar y velar por la certera aplicación de políticas públicas alrededor de las necesidades básicas de la población, bajo el sofisma de contener supuestas amenazas a los sistemas democráticos del continente por parte de los proyectos socialistas. En ese sentido, se crea la Organización de Estados Americanos en 1948² y para diciembre del mismo año la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) con la finalidad de colaborar con los gobiernos de la región en la investigación y análisis de los temas económicos.

La Cepal se convierte en referencia necesaria para quienes estudian la historia económica de Latinoamérica, ya que es una escuela de pensamiento tendiente a investigar las tendencias económicas a corto, mediano y largo plazo, desarrollando un método analítico propio denominado *histórico-estructural* que pretende leer dinámicamente la realidad de la región en clave al concepto de desarrollo. Quienes

2 La Organización de Estados Americanos (OEA) fue creada en Bogotá en abril de 1948 en el marco de la Conferencia Panamericana que, precisamente, sesionaba el 9 de abril, día del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán.

investigan alrededor de la historia de la Comisión se encuentran con cinco momentos específicos: para los años 1950, los trabajos realizados por este organismo versan sobre la industrialización por sustitución de importaciones; en los años 1960 predominan los estudios acerca de las reformas para desobstruir la industrialización; para los años 1970, las investigaciones se basan en la reorientación de los *estilos* de desarrollo hacia la homogeneización social y hacia la diversificación proexportadora; en la década del ochenta, la superación del problema del endeudamiento externo mediante el *ajuste con crecimiento* es el temática central de sus observaciones; y en la década del noventa, la transformación productiva con equidad de acuerdo con el momento de reconfiguración de capital a nivel global (Cepal, s. f.).

En el caso específico del espacio urbano y de la vivienda, que es el tema que nos convoca, en la década del cincuenta se crea la Sociedad Interamericana de Planificación (SIAP) y el Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento Urbano (Cinva), con sede en Bogotá; en un momento de predominio de las ideas modernizadoras y progresistas, y con el interés particular de “dar solución a los problemas urbanos y promover el desarrollo en todos los niveles y sectores de la sociedad” (Peña, 2008, p. 187), prestando asesoría técnica en materia de vivienda y planeamiento.

La aparición de estos organismos no es coincidencia, sino que responde al discurso del desarrollo predominante para aquel entonces, que las élites locales adoptaron como tesis principal para el impulso de sus respectivos gobiernos, como lo demandaba Estados Unidos y sus aliados europeos, cuyo propósito era:

[...] crear las condiciones necesarias para reproducir en todo el mundo los rasgos característicos de las sociedades avanzadas de la época: altos niveles de industrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento de la producción material y los niveles de vida, y adopción generalizada de la educación y los valores culturales modernos. (Escobar, 2007, p. 20)

A partir de la adopción del discurso del desarrollo tendiente a la modernización económica de los países latinoamericanos, aparecen políticas y teorías que reproducen a escala local las doctrinas desarrollistas, para superar los problemas sociales y económicos de la población. Así lo refiere Arturo Escobar (2007):

Hasta finales de los años setenta, el eje de las discusiones acerca de Asia, África y Latinoamérica era la naturaleza del desarrollo. Como veremos, desde las teorías del desarrollo económico de los años cincuenta hasta el “enfoque de necesidades humanas básicas” de los años setenta, que ponía énfasis no solo en el crecimiento económico per se cómo en décadas anteriores, sino también en la distribución de sus beneficios, la mayor preocupación de teóricos y políticos era la de los tipos de desarrollo a buscar para resolver los problemas sociales y económicos en esas regiones. (P. 21)

Las apuestas por la modernización económica de la región fueron objeto de estudio de académicos e investigadores que, como Rostow (citado por Slater, 1999), apuntan a desentrañar el problema económico de los países periféricos. Provista de cierto esquematismo y visto el desarrollo como un proceso lineal, los postulados por Rostow y analizados críticamente por Fernando Slater proponen una serie de etapas para la superación de las condiciones de atraso en las que se encuentra la mayoría de la población.

Así, desde los organismos internacionales y las perspectivas de análisis que proponen, se desprenden los postulados de tinte culturalista sobre la cuestión urbana, que son desarrollados desde los estudios antropológicos. Es el caso de las investigaciones de Oscar Lewis (1959) sobre la pobreza, quien describe las prácticas culturales de los pobladores más pobres que vienen haciendo parte de los procesos de urbanización y los análisis sobre la vivienda expuestos por John Turner (1969, 1972, 1976), cuya importancia radica en la relación que aborda alrededor de la trayectoria de vida de los habitantes con su trayectoria habitacional, para explicar el fenómeno de la urbanización informal en América Latina.

Diferentes perspectivas, un mismo concepto: la marginalidad

De los análisis culturalistas se desprende la teoría de la marginalidad cuyos orígenes los podemos situar en las teorías sociológicas urbanas norteamericanas de tipo positivista, una de las corrientes más fuertes es la propuesta del continuo rural/urbano donde impera la lógica binaria, dualista: moderno/atrasado, centro/periferia, metrópoli/satélite, que a partir de este dualismo explica el reacomodamiento espacial que se da en las ciudades latinoamericanas en la segunda mitad del siglo xx, siempre respondiendo a la impronta cultural para caracterizar este proceso; Samuel Jaramillo (2008) hará unas precisiones concernientes a cómo se desarrolló la teoría de la marginalidad a través de dos corrientes: de derecha y de izquierda.

La primera propende por la modernización a costa de la eliminación de los elementos que impiden alcanzar este objetivo. De hecho, esta lógica tuvo resonancia en políticas que se dictaminaron en varios países de América Latina en las décadas de 1950 y 1960, donde se apuntaba a reubicar gran número de población en estructuras *modernas*, lo que implicaba una serie de fracturas sociales y culturales. Así caracteriza Samuel Jaramillo (2012) las prácticas políticas resultado de esta corriente de la teoría de la marginalidad:

La remoción de aquellos barrios populares que trasgreden de manera más flagrante el dispositivo funcional de la ciudad y/o de su esquema de segregación

socioespacial buscarían un objetivo técnico y de eficiencia para el desarrollo de la ciudad como un todo. Con este argumento se justificaron, en general con éxito en el conjunto de la opinión pública, la supresión de muchas barriadas en los centros de las ciudades o en los sectores de asentamiento de las capas de mayores ingresos. (P. 6)

Por su parte, la teoría de la marginalidad de izquierda³ se explica en relación con los obstáculos que encuentran los grupos excluidos para vincularse al proceso de progreso; tales dificultades se generan por la incapacidad que tienen las clases dominantes y el Estado de generar políticas certeras, como una reforma agraria que de alguna manera frenara el éxodo de campesinos a las ciudades. Ante la mezquindad institucional, la producción de asentamientos informales es bien visto por teóricos adscritos a esta corriente, por ser una respuesta concreta y eficiente en contrapartida a las apuestas por eliminarlos físicamente, como lo propone la teoría marginal de derecha que abordaremos más adelante. En ese sentido, esta corriente aboga por la autoconstrucción que debe ser estimulada por políticas estatales, como lo menciona Torres Tovar, en *Ciudad informal colombiana: barrios construidos por la gente* (2009):

[...] los asentamientos populares son una respuesta ingeniosa y eficiente por lo barata que resulta, por la flexibilidad en los flujos de fondos y el aprovechamiento de la abundante mano de obra, además de brindar unidades físicas más acordes con la estructura cultural de los pobladores. En consecuencia, el citado modelo aboga por la autoconstrucción, estimulada por una política oficial de vivienda y financiada por agencias internacionales, como forma de solución a las deficiencias de vivienda en los países tercermundistas. (P. 28)

Máxime estas aseveraciones alrededor del concepto de marginalidad, centradas particularmente en la explicación del subdesarrollo de los países de la región latinoamericana y los fenómenos que devienen de este, haciendo énfasis en el papel del sujeto, cabe recalcar el papel de Loïc Wacquant (2007) en dilucidar la marginalidad en el contexto de las sociedades avanzadas de Occidente, que, de alguna u otra forma, sirven para entender desde sus respectivas especificidades el problema urbano a nivel global que, al contrario de las teorías de la marginalidad anteriormente desarrolladas, los adelantos teóricos del problema Wacquant los centra a nivel general de la sociedad o de la colectividad y el papel que estas cumplen en un sistema económico capitalista que marginaliza y segrega.

3 Los mayoría de teóricos pertenecientes a esta vertiente desarrollan sus análisis en la Cepal: Raúl Prebisch, Teothonio dos Santos, Oswaldo Sunkel, Fernando Enrique Cardoso, entre otros.

Para explicar la segregación socioespacial en Norteamérica, que refiere a las condiciones desiguales en las que se estructuran las ciudades, Wacqant se sirve de conceptos como *gueto* o *hipergueto*, que no pueden ser traslapados sin un debido rigor teórico y metodológico, a las realidades de las ciudades europeas y mucho menos a las ciudades de los países periféricos. Si bien la constante global apunta a esquemas de marginalidad urbana, estas se presentan de diversa manera en la producción del espacio urbano, como Wacqant (2007) lo manifiesta a razón del ejemplo de los *Banlieus* franceses y el gueto negro de Chicago.

En ese sentido, entender las particularidades de cada contexto donde la marginalidad urbana se presenta, requiere de un análisis general de las formaciones sociales que cada fase del capitalismo actual configura y cómo estas producen un espacio urbano a su imagen y semejanza. Por tanto, y para el caso que propone Wacqant, no es lo mismo la marginalidad presente en el capitalismo de Estado de bienestar o interventor, donde se conformaron *guetos* comunitarios, con una tendencia étnica definida y donde existe un reconocimiento y afirmación comunal por parte de sus pobladores; a la subsiguiente marginalidad de la fase actual neoliberal, presente en el *hipergueto* que fragmenta a la comunidad e impide la posibilidad de reconocimiento de esta, bajo distintas dinámicas como: desocupación juvenil, estigmatización social, altos índices de violencia, financiarización de la vivienda social, etc., que en últimas generan ese tránsito a la marginalidad avanzada (Wacqant, 2007).

El aporte de Wacqant al concepto de *marginalidad* es fundamental para la tarea de desentramar los problemas urbanos contemporáneos de manera multiescalar; es decir, a partir de las relaciones en cierta parte contradictorias entre lo local y lo global, entre lo general y lo particular; siempre y cuando no se abuse del uso desmedido de conceptos y aparatajes teóricos externos que son funcionales para la lectura de una realidad, pero no para todas las demás, lo que nos plantea la necesidad de desarrollar investigaciones con mayor rigurosidad.

Perspectiva liberal sobre la urbanización informal

Si hacemos referencia a la perspectiva liberal en la urbanización informal tenemos que remitirnos necesariamente a los análisis desarrollados por el economista peruano Hernando de Soto (1986, 2001), que ubica el concepto en la totalidad de los análisis de realidad latinoamericana, entre ellos en clave a la penuria habitacional, que para efectos del lugar de procedencia del autor refiere a las problemáticas presentadas en las periferias de la ciudad de Lima. Los avances teóricos sobre la informalidad serán consignados en dos libros de

su autoría: *El otro sendero, la revolución informal* (1986) y *El misterio del capital* (2001) donde el concepto aparecerá ligado a la respuesta creativa de vastos sectores de la población que ante la incapacidad del Estado se ve abocada a recurrir a otros mecanismos como los *extralegales* para subsistir. Por tanto, es necesario regularizar las prácticas informales para ponerlas en concordancia con la lógica del mercado, en el marco del proyecto neoliberal, en el que los postulados teóricos de Hernando de Soto fueron bien recibidos y acogidos como base para la formulación de políticas a nivel mundial.

Desde la perspectiva liberal, la urbanización informal se explica por la incapacidad de los individuos de entrar en la lógica del mercado, que debido a ello tienen que recurrir a prácticas autogestionadas e ilegales para suplir la necesidad de vivienda. Allí, se hace relación efectiva con el marco normativo/jurídico de la acción reguladora del Estado que interviene como rasero fundamental para categorizar los procesos adelantados por sectores excluidos como ilegales, de allí que la acción política esté destinada a integrar a los sectores informales a la lógica mercantil a través de la regularización y la legalización de asentamientos urbanos informales, como se viene adelantando con mayor profundidad desde la década del noventa de la mano de ajustes estructurales neoliberales impulsados por los gobiernos de turno. La tesis del economista Juan Saldaña (2016) lo refleja en un apartado:

La informalidad urbana, en este sentido se ve como un obstáculo para el mercado en tanto impide que amplios contingentes de la población entren en el juego del mercado al enmarcarse en una extra-legalidad que escapa de los impuestos y genera productos –como la vivienda– por fuera de la producción capitalista, además de estar estrechamente ligada al mercado laboral informal. Desde la política pública de corte liberal se ha buscado traer dichos contingentes de población en condiciones informales al mercado formal insertándolos en el sistema de producción capitalista. (P. 32)

Crítica y análisis del fenómeno de la urbanización informal desde el marxismo

Las críticas a estas perspectivas teóricas se estructuraron desde el espectro marxista al considerarlas difusas y excluyentes, al determinar el proceso bajo un solo criterio, por ello en la década de los setenta emerge en contraposición más que todo a la teoría de la marginalidad: *la teoría de la urbanización dependiente*, cuyo eje está en la relación centro/periferia que se da entre países a un nivel local también se presenta: relación ciudad/ruralidad o en las mismas ciudades centro/periferia, y en la crítica irrestricta al elogiado proceso de autoconstrucción al que consideran reformista, retardatario y sostenedor del *statu quo*,

ya que este produce la sobreexplotación del trabajador y captación de una parte de su salario en un proceso en el que la vivienda debiese ser garantizada por el Estado enteramente.

Para Aníbal Quijano (citado por Cortés, 2017), miembro de la Cepal, la crítica a las tendencias dualistas pasa necesariamente por entender la marginalidad independientemente de los individuos que la experimentan, como resultado de las relaciones de producción de la periferia dependiente. En ese sentido, la teoría de la urbanización dependiente se asume como un proceso marcado por relaciones de dependencia, que se pueden evidenciar de dos formas: cambios en el espacio urbano en los periodos de modificación del sistema de dependencia y transformaciones en el contenido de la sociedad urbana que habita esa red ecológica-demográfica. De esta manera, Cortés (2017) revisa los postulados de Aníbal Quijano sobre el proceso de urbanización en América Latina:

La historia del fenómeno urbano en América Latina es inseparable, por tanto, del fenómeno de la dependencia. La trayectoria de América Latina sería la historia de sucesivas dependencias, siendo que cada una de ellas dejó su marca en el desarrollo urbano. En la fase de capitalismo dependiente de la primera mitad del siglo xx, se experimentó un crecimiento urbano dado por el incremento de la población en las ciudades y por el aumento del número de ellas. El proceso de modernización implicó un trazo eminentemente urbano que repercutió no solo en el cambio de fisonomía de la sociedad, como en la cultura urbana tradicional. La limitada industrialización estimuló no apenas el crecimiento urbano, como también el cambio de motivaciones y aspiraciones de la población. Estas transformaciones fueron superiores a la capacidad de la industrialización para satisfacer las aspiraciones y motivaciones desencadenadas. (Cortés, 2017, p. 227)

La teoría de la urbanización dependiente a mediados de la década del setenta fue fuertemente criticada por ser esquemática y no considerar las particularidades de los países latinoamericanos, dando paso a una nueva configuración teórica que pretendía desarrollar una caracterización estructural de la urbanización, en la que se aborde la configuración de las clases sociales en la región y la producción desigual del espacio a la que se denomina teoría urbana marxista, proponiendo una visión de la realidad social expresada en las ciudades a partir de tres ejes fundamentales: el económico-social, el político-institucional y el cultural-ideológico. Formas de análisis que se pueden aplicar a cualquier fenómeno social y que tiene su origen en la escuela francesa de la sociología urbana marxista.

Los estudios sobre el espacio urbano desde el marxismo se han renovado, la academia latinoamericana ha hecho esfuerzos colosales para generar apuestas investigativas que concuerden con la realidad de la región. En ese sentido, cabe destacar la producción académica de Emilio Pradilla (2014) y Samuel Jaramillo

(2008), entre otros cuyos aportes se manifiestan por ejemplo en la ampliación de la hipótesis sobre informalidad que versa sobre la coexistencia de lo formal y lo informal en las ciudades latinoamericanas, bajo dos formas precisas: la producción mercantil simple y la producción capitalista de mercancías. Esto implica llevar las elaboraciones teóricas de Marx al análisis concreto de la realidad de las periferias de nuestras ciudades donde se asientan informalmente grandes cantidades de población. Emilio Pradilla (2014) lo menciona en un texto sobre la ciudad capitalista:

En las ciudades latinoamericanas funcionan hoy dos mercados de suelo urbano con reglas del juego distintas: el formal, plenamente capitalista y sometido a las regulaciones estatales de la propiedad y el urbanismo; y el informal que domina en las áreas carentes de titulación de la propiedad que fueron urbanizadas ilegal o irregularmente; el segundo, articulado y subsumido al primero, entra también en el juego de definición de las rentas del suelo urbano. (Pp. 41-42)

Debates actuales en los estudios urbanos con relación a la urbanización informal en Latinoamérica

La investigación del problema de la urbanización informal en Latinoamérica ha estado influenciada por corrientes de pensamiento extranjeras, lo que marca de cierto modo la primera dificultad, en el sentido de que desde esta parte del mundo no se ha podido desarrollar un corpus teórico propio que dinamice la investigación, en pro de una lectura acertada de la conformación y consolidación de las urbes de la región, y todas sus problemáticas.

A partir de métodos de interpretación externos, se puede decir que la investigación en América Latina sobre el problema urbano se ha desarrollado a través de tres grandes enfoques, no sin antes aclarar que los aportes relacionados con estos enfoques no han sido homogéneos, sino que responden a las particularidades de cada uno de los países que conforman la región.

El primero de los enfoques surge a fines de los años 1950, con el descubrimiento del problema urbano y hace referencia a la *hiperurbanización*; el segundo nace en los años 1960 y se basa en la preocupación general por el desarrollo y por la lucha contra el subdesarrollo, explicados desde la *teoría de la marginalidad*. Ambos ponen al individuo en el centro del problema urbano con referencia al desarrollo de las ciudades. Ahora bien, en los años 1970, surge el tercer enfoque que, como crítica a los anteriores, propone analizar lo urbano a la luz de la dependencia de nuestras naciones con el norte global, como lo muestra

efectivamente la teoría de la urbanización dependiente –a la que ya hemos hecho referencia en apartados anteriores (Torres, 2009)–.

Posteriormente, la investigación sobre los problemas urbanos latinoamericanos y más específicamente sobre la urbanización informal entran en crisis que se explica por el abandono de las pretensiones teóricas anteriores, relegando el estudio de los fenómenos macrosociales y enfatizándose en el estudio de lo local (Cuenya, 2001), lo que permitió la emergencia de estudios que abandonaron los análisis de las estructuras generales de la sociedad privilegiando la investigación inmediateista, localizada, fragmentada y de nueva cuenta, centrada en el individuo (Torres, 2009).

Desde mediados de los años 1980, la investigación sobre la urbanización latinoamericana tiene dos vertientes: 1) quienes creen que no es posible construir interpretaciones generales sobre este proceso debido a las particularidades de cada uno de los países de la región, y 2) quienes de la mano de políticas internacionales de agencias multilaterales construyen una explicación homogenizante de las lógicas de urbanización, lo que implica una interpretación compacta alimentando políticas públicas sobre lo urbano en los territorios que no tienen en cuenta las especificidades de los contextos.

Conclusiones

Los postulados teóricos responden a los intereses específicos de quienes los generan. No en vano vienen apareciendo conceptos como *resiliencia*, *gobernanza*, *sostenibilidad*, muy en boga en el campo de estudio sobre lo urbano. De la misma manera se producen investigaciones cuyo marco teórico está elaborado a partir de los conceptos anteriormente mencionados, desligando de la investigación social los problemas estructurales de las comunidades que habitan asentamientos informales, entre otras problemáticas que persisten en el desigual espacio urbano.

En ese sentido, es menester analizar las generalidades de la producción capitalista del espacio con relación a las particularidades latinoamericanas, para elaborar apuestas teóricas que analicen e interpreten el espacio urbano a la luz de las configuraciones, transformaciones y contradicciones de la formación socioespacial capitalista, que en últimas es aquel fenómeno que atraviesa el desarrollo de la urbanización informal tema central de este artículo.

En la actualidad, atender la dinámica de la producción informal de las ciudades implica enriquecer el debate académico, en aras de analizar las transformaciones que se están generando en estos espacios: el proceso de financiarización de las periferias, los debates sobre densificación-expansión del espacio urbano,

la consolidación o el mejoramiento integral de barrios, exige una mirada crítica que dé luces sobre la comprensión de los problemas urbanos contemporáneos, considerando esta mirada más allá del espacio universitario, una posibilidad de acción sociopolítica.

Referencias

- Almondoz, A. (2008). Despegues sin madurez. Urbanización, industrialización. *EURE*, 34(102), 61-76. DOI: <http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612008000200004>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (s. f.). *Historia de la Cepal*. Recuperado de <https://www.cepal.org/es/historia-de-la-cepal>
- Cortés, A. (2017). Aníbal Quijano: marginalidad y urbanización dependiente en América Latina. *Polis*, 16(46), 221-238.
- Cuenya, B. (2001). Las cuestiones centrales de la investigación urbana en cada época. *Mundo Urbano*, 11, 1-13.
- De Soto, H. (1986). *El otro sendero, la revolución informal*. Editorial el Barranco.
- De Soto, H. (2001). *El misterio del capital*. Diana.
- Escobar, A. (2007). *La Invención del tercer mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Fundación Editorial el Perro y la Rana.
- García Ortega, R. (2001). Asentamientos irregulares en Monterrey, 1970-2000. Divorcio entre planeación y gestión urbana. *Frontera Norte*, 13(2E), 119-155.
- Harvey, D. (2013). *Ciudades rebeldes: del derecho a la ciudad a la revolución urbana*. Madrid: Akal.
- Jaramillo, S. (2008). Reflexiones sobre la “informalidad” fundiaria como peculiaridad de los mercados del suelo en las ciudades de América Latina. *Territorios*, 18-19, 11-53.
- Jaramillo, S. (2012). *Urbanización informal: diagnósticos y políticas. Una revisión al debate latinoamericano para pensar líneas de acción actuales*. Documentos CEDE. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Lewis, O. (1959). *Five families: Mexican case studies in the culture of poverty*. Books Inc.
- Peña Rodríguez, M. L. (2008). El Programa CINVA y la acción comunal. *Bitácora Urbano Territorial*, 12(1), 185-192. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/18621>
- Pradilla Cobos, E. (1990). Las políticas neoliberales y la cuestión territorial. *Cuadernos de Economía*, 10(14), 115-140.

- Pradilla Cobos, E. (2014). La ciudad capitalista en el patrón neoliberal de acumulación en América Latina. *Cadernos Metrópole*, 16(31), 37-60. DOI: <https://doi.org/10.1590/2236-9996.2014-3102>
- Puentes Burgos, C. (2003). *Urbanización clandestina: la discusión teórica*. Documento de trabajo, AGDT/DT 005-03. Cendex.
- Saldaña, J. (2016). *La rebelión urbana: ciudad informal y mejoramiento integral de barrios, dos realidades de la producción del espacio urbano residencial para la población de bajos ingresos en Bogotá (2000-2016)*. [Tesis de Maestría en Urbanismo]. Universidad Nacional de Colombia Facultad de Artes. Recuperado de <http://www.bdigital.unal.edu.co/52032/1/1018415212.2016.pdf>
- Slater, F. (1999). Las etapas del crecimiento económico de Rostow. Consideraciones sobre el evolucionismo como modelo interpretativo. *Soñando el Sur*, 2, 114-121. Recuperado de <https://hdl.handle.net/10925/302>
- Tokman, V. (2001). De la informalidad a la modernidad. *Economía*, 24(48), 153-178. Recuperado de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/view/917>
- Topalov, C. (1979). *La urbanización capitalista, algunos elementos para su análisis*. Edicol.
- Torres Tovar, C. A. (2009). *Ciudad informal colombiana: barrios construidos por la gente*. Universidad Nacional de Colombia.
- Turner, J. (1969). Architecture that works. *Ekistics*, 27(158), 40-44.
- Turner, J. (1972). *Freedom to build: Dweller control of the housing process*. Macmillan.
- Turner, J. (1976). *Housing by people: Towards autonomy in building environments*. Marion Boyars Publishers Ltd.
- Vorms, C. (2003). La urbanización marginal del extrarradio de Madrid: una respuesta espontánea al problema de la vivienda. El caso de La Prosperidad (1860-1930). *Scripta Nova*, 7(146). [http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146\(013\).htm](http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(013).htm)
- Wacquant, L. (2007). *Los condenados de la ciudad: gueto, periferias y Estado*. Siglo XXI Editores.

Capítulo 5. Segregación espacial: una mirada a los pares socioeconómicos

Jessica Alejandra Gómez Gómez

En el seno del análisis de la producción del espacio urbano, la terminología es abundante, se encuentran referencias en ocasiones tan concurridas como incomprensibles, dado que el uso recurrente sin delimitación las ha dotado de cierto sentido de autodeterminación; otras, por el contrario, cuentan con marcos conceptuales tan elaborados y, en apariencia, definitivos que las definiciones que de allí emergen se ciñen a estos al punto que se vuelven recurrentes e incluso antecedentes de un carácter casi obligado.

Por su parte, la segregación espacial se ha permitido navegar entre los dos polos, pues emergió en la literatura urbana como un término vago en alusión a la negativa de ciertos grupos sociales a tener proximidad geográfica con otros, para luego sustentar su análisis en la presunción de homogeneidad social, económica y espacial al interior de los grupos sociales que se contraponen, siendo ese el motivo de la disputa y la distancia la única manifestación en el espacio.

En tal sentido, el presente ejercicio aboga por una definición más amplia de la categoría, pues reconoce el dinamismo del espacio y la multiplicidad social que allí converge; asimismo, se permite explorar la incidencia sistémica (macro) en las dinámicas socioespaciales de los sectores degradados o empobrecidos (micro), pues lo entiende como un proceso relacional, cuyos puntos de interlocución son establecidos por las variables dialécticas estructurales.

De ahí que identifica a las diferencias socioeconómicas como promotoras de la institucionalización de la pobreza; por ende, el carácter segregador se halla adscrito a los principios ideológicos neoliberales ultraindividualistas e influye en la construcción identitaria, colectiva e individual, desde la capacidad de posesión –la propiedad privada–.

Así, deriva en la configuración de imaginarios estereotipados cuyo proceso de socialización se encuentra mediado por los estigmas. En este contexto, la lucha por el espacio reduce su escala, plantea los límites desde las perspectivas simbólicas de la jerarquización y se proyecta como escenario de reproducción de las desigualdades.

Segregación espacial, campo analítico

En el marco de los estudios urbanos se hacen cada vez más frecuentes las referencias a la *segregación espacial*, categoría derivada de las corrientes de análisis sociológico que proliferaban en el escenario latinoamericano durante la década del noventa, y como consecuencia del renovado impulso capitalista, se ha ligado a las condiciones de inequidad socioeconómica. Sin embargo, pese a la recurrencia del término, su uso indiscriminado posibilitó que la distinción entre esta y otras categorías de análisis urbano, como: exclusión social, desigualdad socioespacial, fragmentación, distribución, concentración e incluso marginalidad, resultara difusa.

En principio la segregación espacial se sitúa desde una perspectiva descriptiva, la cual alude a la separación de grupos sociales sustentada en las diferencias de clase, que, en el escenario urbano, generan constante separación residencial. Tales referencias señalan cierta suerte de uniformidad entre los miembros de cada grupo, definiciones muy cercanas a la de Castells (1974), quien afirma que es el “proceso mediante el cual el contenido social del espacio se hace homogéneo dentro de una unidad y se diferencia fuertemente respecto a unidades exteriores, generalmente según la distancia social derivada del sistema de estratificación” (p. 146).

Desde dicho escenario, los esfuerzos analíticos de la segregación espacial se disponen a evidenciar factores históricos y económicos que han promovido la reproducción de la pobreza urbana, exclusión social, altos índices de desempleo, la crisis del hábitat e inequidad en el acceso a bienes y servicios urbanos (Aprile-Gnisset y Mosquera, 1984; Clichesvsky, 2000; Dureau, 2002), observaciones en las que emerge la relación de la desigualdad con la incapacidad del sistema para sostener el ritmo migratorio y la densificación urbana (González, 2005; Kaztman y Retamoso, 2005; Barbary *et al.*, 2007). Asimismo, se plantea el vínculo entre políticas públicas y segregación, algunos autores las acusan de ser uno de los mecanismos para la perpetuación de las desigualdades urbanas, perspectiva desde la cual se alude a la relación entre las dinámicas de gobernabilidad y la orientación hacia la creciente privatización neoliberal de los bienes y servicios urbanos (Aymerich, 2004; Tecco y Valdés, 2006; Lulle *et al.*, 2007) mientras otros ven en ellas la oportunidad para equilibrar la balanza social (Sabatini, 2006; Zimmeman, 2014).

Así, a la par con las transformaciones urbanas latinoamericanas, la categoría empieza a delimitarse. A lo cual la interpretación antropológica aporta elementos para exaltar el carácter simbólico en los análisis sobre segregación, es decir, se interesa en la percepción social e individual del espacio como un fenómeno vivido, donde los efectos de esta repercuten en la aprehensión del entorno espacial y las relaciones sociales que en ellos se desarrollan, por tanto, incorpora estudios sobre representaciones espaciales, el uso del espacio, rutinas, estigmas territoriales, entre otros.

Tal postura cuestiona directamente la pretensión homogenizante que predominaba en los postulados anteriores e invita a explorar la diversidad poblacional y urbana, ya que trasciende la noción naturalizada de correspondencia al permitir evidenciar la heterogeneidad que compone los grupos sociales; de igual forma, aporta a la visión sobre los factores que han incidido en la permanencia de dichas distancias. Al respecto, Carman *et al.* (2013) agregan: “En los casos de segregación heterogénea, el análisis ha de poner el acento no en la distancia socioespacial entre los grupos, sino en las oportunidades desiguales de acceso a los bienes materiales y simbólicos ofrecidos por la ciudad” (p. 17), ello en el marco de análisis de ciudades cada más pobladas donde se hace imposible mantener las extensas distancias entre los grupos sociales.

Estos aportes permiten explorar la noción de segregación más allá de una suma de acontecimientos explicados por medio de sus causas, la descripción histórica *per se*, para develar la dialéctica entre las condiciones estructurales, su incidencia en las dinámicas espaciales, las representaciones simbólicas –sometidas al prolongado deterioro del entorno– y las acciones que de ella se desprenden.

Acorde a ello, el estudio de la segregación entre pares surge como propuesta analítica que procura comprender sus lógicas en el interior de grupos sociales en condiciones económicas e históricas semejantes; por tanto, replantea las dimensiones de lectura acerca de *lo espacial* y *lo social*, sin desvincularlas del proceso estructural, es decir, en ninguna medida pretende aislar el fenómeno, más bien lo expone como consecuencia de la reiterativa disparidad económica, social y espacial –la segregación socioespacial macro–.

En ese entendido, la propuesta plantea que la segregación se erige no solo desde la distancia espacial o el desequilibrio económico; más allá, está incorporada en el sistema social de valores, creencias y prácticas predispuestas a mantenerse en el tiempo, pues son constantemente reivindicadas, de ahí que soporten un alto contenido identitario, cuya articulación responde a la reproducción de las condiciones ideológico-estructurales del neoliberalismo, caracterizado por la noción altamente individualizante de la subjetividad y el ejercicio violento de esta. Por tanto, la labor inicial debe suponer la comprensión del organismo neoliberal.

Neoliberalismo como condición estructurante

Las estructuras de poder no están determinadas por el simple hecho de su hegemonía; ese predominio se encuentra sustentando en la consolidación y permanencia contradictoria de una maquinaria: la efectividad en la distribución de funciones, sumada a la capacidad de implantar un sistema ideológico de valores, se integra a la promoción de un modelo –con sus respectivos principios– que no necesariamente expresa a cabalidad los intereses y *modus operandi* del aparato de dominación, pero que en uno u otro caso funge como fachada.

El modelo neoliberal se articula como estructura basada en un mandato económico desigual, soterrado en la movilización de instituciones políticas y sociales para su reproducción. Desde su insistente búsqueda de la limitación estatal, se postula como el conjunto de prácticas político-económicas en procura de la promoción del bienestar humano, dado que solo el libre desarrollo de las capacidades individuales y empresariales, en el marco del libre comercio, podrán asegurar la distribución óptima de los recursos, ello sobre el entendido de la primacía del derecho a la propiedad privada (Harvey, 2007; Toussain, 2004).

¿Quién sostiene los muros del libre mercado?

El ascenso neoliberal dista por mucho de esa aura natural y espontánea con la que en ocasiones se le reviste (producto del flujo natural de la sociedad y el comercio), lejos de eso, es un proyecto que nació tempranamente en el siglo xx, pero se mantuvo relegado hasta que, bien avanzado el siglo, toma fuerza entre las décadas del setenta y ochenta, alcanzando la cúspide en la era Reagan-Thatcher. Sin embargo, no se trata solamente de la sincronía entre dos gobernantes, lo que realmente posibilitó su expansión y éxito fue la consolidación de un sistema de acción multilateral conformado por la intelectualidad (en cabeza de Hayek y Friedman), los medios de comunicación, entidades financieras, sector empresarial, entes estatales de peso (ministerios y bancos centrales) y los organismos internacionales de mayor influencia en los mercados financieros globales (Fondo Monetario Internacional –FMI–, Banco Mundial –BM–, Organización Mundial del Comercio –OMC–).

En esta dinámica se hace necesaria la reglamentación de la competencia, allí, el Consenso de Washington se yergue como el eje que agrupa un paquete de *recomendaciones* encaminadas a promover la desregulación de los mercados. Dicha hoja de ruta cuenta con dos remitentes específicos: el primero es el remitente directo, los países latinoamericanos, puesto que las propuestas son dirigidas directa y explícitamente a la región bajo la consigna de única vía para el desarrollo; el segundo, no tan explícito, se dirige a los organismos internacionales de financiación, llamándolos a servir de garantes durante el proceso de apertura económica y supervisión de las políticas adoptadas, intermediación aplicada a través de la asignación o no de auxilios económicos.

Ello representa para los países desarrollados, encabezados por Estados Unidos, el dominio del mercado internacional y la injerencia en las dinámicas locales, en el sentido de que las medidas les impulsaban sin restricción a aprovechar las oportunidades del mercado global, al tiempo de asegurar la contención ante la posible emergencia de nuevos mercados procedentes del Cono Sur.

Entonces, el panorama expone las contradicciones del libre mercado, expresadas en la transformación de medidas de (des)regulación, en las que el Estado en apariencia es la institución más atenuada, pero en el ejercicio neoliberal adquiere el papel primordial de la creación y manutención del marco institucional para el efectivo funcionamiento del modelo económico. Aquello integra dos grandes paradojas.

La primera trata del modelo político al que fueron adscritos los principios neoliberales como parte equivalente: las *democracias latinoamericanas*. En la región el neoliberalismo ingresa como mecanismo económico de los gobiernos militares, mayoritariamente dictaduras, pero con el paso del tiempo se convierte en el modelo económico *natural* de las democracias, pues las consignas de progreso propias de los pregones del libre mercado encajaban a la perfección con la promoción de los derechos individuales. A esta segunda fase, Briger (2002) la denomina *el consenso*, y afirma que a diferencia de la etapa anterior, en la que primó la imposición mediante el uso de la fuerza, esta última se caracterizó por el *trabajo ideológico*, dado que el énfasis recae en la puesta en marcha de campañas masivas de prestigio, ejercicio en el que despliega el órgano multilateral.¹

Dicha alianza, neoliberalismo/democracia, alcanza un extenso apoyo popular sujeto a las aspiraciones de movilidad social, lo cual le significó el éxito en la región, puesto que los sectores sociales tradicionalmente relegados vieron en ello la posibilidad de acceder a bienes y servicios otrora inalcanzables, aspecto que obedece al interés del capital por acaparar el mercado e integrar a los sectores sociales medios y bajos a las lógicas de consumo acelerado; el gran triunfo: la masificación del crédito y el endeudamiento del grueso de la población, que a la postre conduciría a la diversificación de la pobreza (pobreza, nueva pobreza y extrema pobreza).

1 Por un lado, intelectuales y figuras reconocidas desarrollan recorridos con el propósito de fomentar las ventajas de la privatización, entre los que destacan los desarrollados por el economista estadounidense Milton Friedman, acompañados del amplio espectro difusor de los medios de comunicación que sería determinante para el éxito de la campaña. También contó con la creación de fundaciones, centros de investigación e instituciones enfocadas en el estudio de las bondades del neoliberalismo, bajo el auspicio de multinacionales y la influencia de los Chicago Boys, discípulos de Friedman; mientras, por el otro lado, se diversifican y amplían las ofertas del crédito del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

La segunda paradoja refiere al carácter estatal de las políticas económicas de las potencias, entiéndase: países industrializados con economías desarrolladas, entre los cuales destacan EE. UU., Alemania, Reino Unido y Japón –por demás, acérrimos promotores del neoliberalismo como *modelo único*–, países cuyo proceso de apertura económica se sustentó en la implementación de políticas proteccionistas a nivel interno, permitiéndose impulsar los mercados propios apoyados en la supremacía militar, política y económica para competir en el *libre mercado*.

En definitiva, ambas paradojas apuntan, por un lado, al carácter inequitativo y agresivo del mercado global; por otro, exponen el papel determinante de los Estados en el mantenimiento del modelo neoliberal, esto es, aquello que parecía una pugna a la larga se manifiesta imprescindible, el neoliberalismo no buscaba la limitación del ejercicio del Estado, lo necesita en pleno para que este lo soporte tanto en medidas para la implementación como en los momentos de desplome para socorrerlo.

Al respecto, Valencia (2006) precisa que el carácter modificador del neoliberalismo yace en la necesidad de versar el mundo de acuerdo a su sistema de valores, lo describe como un cuerpo doctrinal coherente, autoconsciente y militante que independientemente del sistema político predominante (desde la democracia hasta los nacionalismos, ya sean blandos o de corte autoritario, pasando por los socialismos renovados y los populismos e incluso las guerras agresivas) se asegura de apropiarse de las prácticas políticas “no por ineficiencia práctica o por debilidad, sino todo lo contrario, por su propia fortaleza e intransigencia” (p. 478).

Hacia la comprensión del sistema ideológico neoliberal

En cuanto al sistema de valores, Ahumada (2002) halla el sustento ideológico del modelo neoliberal en cuatro principios fundamentales: el papel positivo de la desigualdad, la eliminación de la función económica y social del Estado, la operación del mercado en todas las esferas de la actividad humana y la validación del subjetivismo como criterio de verdad. No obstante, el sustrato de tales principios se fundamenta en la libertad de poseer (la propiedad privada), volcada hacia la ultraindividualización, en la que los mecanismos para su ejercicio se basan en la violencia sistémica.

En consonancia, para desglosar la condición primaria del sentido ideológico neoliberal, se hace oportuno echar mano del análisis realizado por Erich Fromm (1957), en el que plantea la construcción de la individuación como un proceso dialéctico, que involucra a las esferas estructurales de la sociedad en la conformación de productos culturales, esto, dependiente de la interacción

entre las condiciones conductuales comunes e involuntarias –*carácter social*²– y la adaptación de cada sujeto –la *adaptación dinámica*–, esta última se postula como *dinámica* debido a que moldea el hábito del sujeto, al tiempo que incide en la transformación de sí mismo y de la sociedad; en razón de esa relación en doble vía tiene lugar la formación identitaria, el *individuo*.

En este escenario, el *carácter social* presenta una clara tendencia a la represión y una apaciguada disposición creadora, por ende, se vale de potenciar la estandarización de los individuos a través de la prolongación del *yo*, que consigue desfigurando la percepción de la propia voluntad para prefigurar comportamientos sociales adscritos a los requeridos por ese *yo* altamente individualizado, de modo tal que arremete contra el vínculo social fundado en la reciprocidad y el cooperativismo.

Ahora bien, transponer los planteamientos de Fromm al modelo ideológico del sistema neoliberal no requiere mayor desglose, pues, al igual que en el modelo fascista, impera la ultrapromoción del individuo ensimismado, ajeno al otro y a su entorno en cuanto a la construcción de identidad y prácticas socioespaciales, fragmentación que posibilita al modelo económico el dominio hegemónico de la escena sociopolítica y espacial, pues al condicionar la interacción entre los diferentes *yos*, aboga por la despolitización de los sujetos, dado que trivializa los escenarios colectivos. Sin embargo, el elemento que fundamenta ambos modelos cambia de perspectiva: la promoción de la libertad.

Para Fromm existe la libertad positiva o *libertad para* y la libertad negativa o *libertad de*; esta última, potenciada por el autoritarismo, se encuentra ligada a la liberación del instinto en sentido de un libre albedrío, libertad de elegir el obrar, un actuar incapaz de autoevaluarse o censurarse, puesto que carece del sentido positivo que orienta la libertad *para* autogobernarse bajo el sostén de la solidaridad activa, que le permita unirse con el mundo y los otros individuos mientras cultiva en torno a dicha solidaridad su individualidad e independencia, por ello, en sentido negativo la libertad aísla al individuo al convertirlo en un ser temeroso y sumiso proclive a someterse en su intento de rehuir de la libertad.

Por su parte, para el neoliberalismo la libertad abandera la virtud de poseer, la posesión en sentido individual, entonces, la propiedad se traduce en propiedad

2 Caparrós (1974) remite una definición más clara y señala que para Fromm carácter alude a un sistema de impulsos en su mayoría inconscientes que determinan la conducta. En consecuencia, el carácter social “es el núcleo caracterológico común a los miembros de un grupo sociocultural; es el resultado de las experiencias básicas y modos de vida comunes del grupo. O también, es la ‘energía psíquica’ por la ‘adaptación dinámica’ de la ‘naturaleza humana’ a las necesidades objetivas de una sociedad determinada” (p. 14).

individualizada, es decir privada; la libertad de poseer es la capacidad de gobierno sobre los bienes propios, no gobierno sobre sí mismo o las condiciones del entorno, mucho menos sobre sus vínculos, pues la ultraindividualización mina el carácter colectivo de la propiedad; al individuo le es propio únicamente lo que le pertenece o es susceptible a adquirir, de tal manera la libertad individualizada de poseer falsifica la garantía de consumo, pues aísla a los individuos en el ejercicio de gobernar sus posesiones.

Por tanto, ni siquiera refiere a la libertad de obrar instintivo señalada por Fromm, dicha elección en el neoliberalismo se fundamenta en su capacidad de posesión, lo que significa que la decisión sobre el actuar propio depende de la capacidad adquisitiva, pero, cuando lo único que se posee es la propia vida, el individuo insulado debe gerenciar su vida en la lucha por el consumo con otros individuos igualmente descolectivizados, sujetos que empero han instaurado la defensa de la individuación como único mecanismo de supervivencia sobre el entendido del carácter personal del consumo, no colectivo, no agremiado.

Al privilegiarse la posesión sobre la cohesión social, se sitúa la capacidad de consumo como intermediaria en las relaciones sociales, en esa lógica, al ser el espacio escenario y objeto de consumo pretende individualizarse; por ende, la apropiación del espacio es concebida como personal, reforzada en el sentido institucional de la desigualdad. En otras palabras, el intercambio social se sustenta en el ejercicio de la violencia como único medio para la apropiación, ya que en un sistema en el que la desigualdad es norma, la posesión tiene lugar por medio del despojo.

Aquí una claridad, la violencia en dicho sistema orgánico también se concibe como tal, o sea, es un ejercicio estructural que puede ser consciente o un elemento implícito e incluso imperceptible; de igual forma ocurre con el despojo, pues el primer escenario de desarraigo es el propio proceso construcción identitaria, desvirtuada de la libertad *para* y enmarcada en la individuación para la posesión

Segregación socioespacial entre pares socioeconómicos

A estas alturas se sobreentiende el carácter dialéctico del planteamiento en torno a las disputas espaciales; sin embargo, resulta apremiante el énfasis en la relación macro/micro, pues el estudio no pretende remitirse al aspecto sistémico como antecedente macro que determina procesos micro, ni como un modelo terminado; si bien el neoliberalismo desde su posición estructurante es un agente represivo, también es proclive a modificarse y a ser modi-

ficado, es decir, establece influencia permanente e intercambiable con los escenarios socioespaciales, los que a su vez, en menor impacto, influyen en las lógicas del sistema.

De ahí que, al ser el espacio una entidad social participe en dicha dialéctica, su producción sea de igual forma social, lo que quiere decir, dinámica, móvil y compleja. El espacio no es un simple contenedor de las actividades, pues al integrar tal noción al análisis espacial permitirá comprender que tanto los procesos sociales influyen en las formas espaciales, como las orientaciones espaciales inciden en los procesos sociales (Lefebvre, 2013). Por tanto, para referirse a la necesidad de elaborar un marco conceptual de análisis espacial fundamentado tanto en los aspectos físicos como en la dimensión simbólica, Harvey (1977) afirma:

Hemos de relacionar las conductas sociales con la manera en que la ciudad asume cierta geografía, cierta forma espacial. Hemos de darnos cuenta de que, una vez que ha sido creada una forma espacial determinada, tiende a institucionalizarse y, en ciertos aspectos, a determinar el futuro desarrollo de los procesos sociales. (P. 20)

Desde esa lógica, y tomando en cuenta el carácter heterogéneo en la composición de los grupos sociales mencionados en el primer apartado, el estudio de la segregación socioespacial entre pares socioeconómicos halla sesgos en los postulados que inducen a pensar en las manifestaciones espaciales como meras representaciones físicas (amplias distancias, muros, cercas, barreras orográficas), puesto que niega de tajo que el espacio es susceptible a ser objeto de límites simbólicos.

La segregación urbana, como campo de estudio, se ha dedicado a analizar la conformación de límites geográficos y sociales, cuya manifestación es palpable en la distribución desigual de recursos y oportunidades espaciales, el acceso a la ciudad es restricto; sin embargo, ha obviado el espacio simbólico de la segregación, cuya expresión se hace manifiesta en la puesta en circulación de estereotipos y estigmas, usados para reforzar o cuestionar las fronteras socioespaciales, por consiguiente, el sentido interlocutor entre las diferentes escalas de la segregación contribuyen a la reproducción de la pobreza en las ciudades contemporáneas.

Justamente en esos procesos, la pobreza como fenómeno socioespacial en continua legitimación y el estigma como mecanismo de socialización, se va a delinear el sentido dialéctico de la lucha por el espacio urbano entre pares socioeconómicos, sin olvidar que es propio de la desigualdad económica, ya que la ideología individualizante no solo promueve la desidia de clase, también despoja a los sujetos de su sentido comunal y genera distancias y disputas entre quienes comparten las mismas desgracias.

Pobreza y superposición poblacional: la génesis

El antecedente de todo estudio de segregación suele encontrarse en las dinámicas de asentamiento diferenciado, la segregación entre pares no es la excepción; el factor que aquí impera es la ultradensificación de las zonas marginales, donde los procesos de poblamiento en apariencia carentes de conciencia sobre la traza y bordes urbanos, en realidad responden a los mecanismos de orientación residencial, es decir, ocupan el espacio disponible para ellos.

Entonces, procesos como las grandes oleadas migratorias, el desplazamiento forzado, el *boom* inmobiliario de vivienda popular y la gentrificación han dirigido masas poblacionales hacia las mismas zonas. En suma, el arribo pausado de población diversa, en origen y en prácticas culturales, que convergen en escenarios de escasez económica y en equipamiento urbano, desata un fenómeno que podría denominarse *superposición poblacional*, dado que el mecanismo de asignación no busca armonía ni la satisfacción de las necesidades básicas, es el resultado de la asignación estructural de la ciudad para los pobres: lejana, precaria y densificada, que roza con el hacinamiento.

Aquí, la interacción empieza a ser gerenciada por el roce social, se establecen círculos con pretensión identitaria que, mediados por la necesidad de consumo, emprenden una lucha por el espacio desde la contraposición de un colectivo a otro. A este proceder, Bourdieu (2013) lo denomina *efecto club del capital social*, ya que el proceder entre la aceptación y el rechazo es tajante y mezquino, se es o no se es, sin posibilidad de puntos medios, comportamiento dirigido por la imperiosa necesidad de poseer en el contexto del consumo para la supervivencia.

Si bien el concepto es usado por el autor para referir el comportamiento de las clases altas, la dinámica es igualmente palpable en las zonas degradadas, allí se entremezcla con lo que él mismo definió como *efecto de arrastre hacia abajo*, pues afirma que:

[...] el barrio estigmatizado degrada simbólicamente a quienes lo habitan, los cuales a cambio hacen lo mismo con él. [...] la concentración en un mismo lugar de población homogénea en la desposesión también tiene el efecto de redoblar esta última, particularmente en materia de cultura y práctica cultural. (Bourdieu, 2013, p. 124)

Por ende, la posibilidad de identificar ambos comportamientos en los desposeídos yace justamente en la lucha por la posesión, aunque esta signifique el despojo de los otros: el interés en la no degradación propia los lleva a *empujar*

hacia abajo, aunque, por un lado, dicha disposición al pacto sea momentánea y vacía, pues no se soporta en un proceso reivindicativo; mientras que por el otro, consecuencia del debilitado pacto social, se *arrastra hacia abajo*, en el entendido de que la población al ser despoja de la noción de masa, atenta contra el verdadero bienestar propio, que es el bienestar comunal.

La incidencia que ello tiene sobre el espacio es también descrita por Bourdieu (2013), versa sobre la disposición espacial ejercida por la predisposición social a jerarquizar los aspectos humanos, lo que denominó *efectos de lugar*:

En una sociedad jerárquica, no hay espacio que no esté jerarquizado y no exprese las jerarquías y distancias sociales, de un modo (más o menos) deformado y sobre todo enmascarado por el *efecto de la naturalización* que entraña la inscripción duradera de las realidades sociales en el mundo natural. (P. 120)

Nuevamente, la reducción de escala oculta el sentido jerarquizado del espacio. En las barriadas las lógicas del mercado del suelo están presentes, tanto en los asentamientos como en los espacios de ocio; entonces, este tipo de exclusión se manifiesta en la asignación de estereotipos que aluden directamente a las prácticas socioculturales; la segregación trasciende la escala de las prácticas disociativas, las de interponer algo o distancia, para convivir con el encuentro inevitable de los lugares y personas objeto del estigma, en un continuo intento por rehuirles, dinámica que termina acentuando más la animadversión por los otros y potenciando la disposición al carácter ensimismado.

Todo ello encuentra forma en la perspectiva de pobreza como desigualdad institucionalizada, es decir, la pobreza es un problema cultural, lejos de lo que Lewis definió como cultura de la pobreza, lo aquí evaluado es una sociedad con alta predisposición a la pobreza, sobre el entendido de que una sociedad que acepta y reproduce la pobreza teniendo los medios para combatirla, es una sociedad pobre en su totalidad (Acevedo y Vivas, 2004); en ese sentido, la pobreza no es un acontecer o una simple consecuencia, es un fenómeno sociopolítico y cultural, que en la dinámica capitalista toma forma en la cultura del consumo privado.

En consecuencia, se le reconocen dos dimensiones a la pobreza: global y local. En la macro, la producción de desigualdades está sujeta principalmente a los mecanismos económicos, políticos y sociales de dominación; mientras que la micro refiere a la reproducción de los capitales culturales y sociales excluyentes principalmente fundamentados en la consolidación de prejuicios; ambas se integran en la cristalización de imaginarios sociales. No por ello se consideran perpetuos, son dinámicos, están sujetos a cambios, ya sea en pro de la solidificación del mecanismo de exclusión, o como formas de resistencia.

Uso del estigma como herramienta de diferenciación social entre pares socioeconómicos

A lo largo del texto, parte del esfuerzo se ha orientado en demostrar el papel preponderante del carácter simbólico, particularmente en las dinámicas de segregación espacial; ahora, en lo referido al campo del estigma, dicho atributo requiere de cierto énfasis. Entonces, la pertinencia recae en la comprensión de la configuración de prejuicios en el campo de las perspectivas e imaginarios, para así valorar las prácticas de apropiación espacial diferenciada.

Antes de proponer una definición, es necesario referenciar la construcción del *otro* que recae en la consolidación del estigma, para lo cual nos apoyamos en Torodov (1987), quien plantea al *otro* en su relación con el *yo* como sustancias inacabadas y mutuamente definitorias, a las que, pese a la necesidad de la otra para ser, sí establecen dinámicas de diferenciación. En ese sentido, el autor postula que el único elemento divergente entre ambos es el *propio punto de vista*, de acuerdo con el cual el *yo* ocupa un lugar (aquí) separado de los *otros* (allá). Con ello, sugiere que la verdadera distancia entre el yo y el *otro* no existe en sí, sino que es creada para sí, percepción que tiene lugar únicamente en las estructuras mentales creadas para disociar el *otro* en cuanto no es *yo*, por ende, diferente.

Por consiguiente, el elemento rector para la apreciación del *otro*, desde el entendido de la mentalidad solidificada por la reproducción de valores, es imaginarlo inferior: en cuanto diferente al *yo* es desdeñado e incluso deshumanizado. Este aspecto resulta clave para comprender el imaginario perceptual que permite a un individuo, grupo o sector social justificar su forma de actuar respecto al otro, la estrategia de deshumanización admite vejámenes que no serían posibles de efectuar en el plano ético y moral en cuanto el *otro* fuera considerado un igual, en ese plano aceptar la disminución del otro sería aceptar la disminución de sí mismo.

Por esta razón, las percepciones del *otro* se inscriben en la disputa cultural, la cultura de la pobreza; la cultura de la no-cohesión establece normas, creencias, rituales, fáciles de falsear, pues tiene como propósito la conformación de categorías de relacionamiento socioespacial, maneras de relacionarse con el otro en cuanto no es como yo, dadas por medio de la instauración de *estereotipos*: elaboración de prototipos ideales que por lo general parten del contenido identitario propio, retroalimentados por los *prejuicios*: juicios de valor *a priori* formulados de manera acrítica; y sintetizados en los *estigmas*: noción de defecto o falla que recae sobre el otro en sentido que se diferencia del yo.

En esta perspectiva, la degradación del espacio por parte del *otro* significa la degradación del *yo*, dado que sus prácticas inciden en las formas como el *yo*

se apropia de e interactúa con el espacio.³ Esto, en la segregación socioespacial entre pares socioeconómicos, se traduce en la lucha por la supervivencia unitaria, en la que la integración social es solo una cortina de humo en busca de reforzar el estereotipo, por medio de la creación del *enemigo común*, se naturaliza el antagonismo entre quienes comparten condiciones sociales, bajo la promesa aspiracional de que el bienestar de unos requiere la desposesión de otros, en ese sentido socava profundamente el tejido social.

Este último, el desarraigo de lo colectivo, representa el flanco que el neoliberalismo se propone conquistar, pues al conseguir la pérdida absoluta del sentido comunitario logra su mayor triunfo: el fin de la acción política y la organización popular, pues al universalizar la individualización como criterio de socialización y el consumo como criterio de apropiación individual, mitiga los frentes de lucha, resistencia y contestación.

El límite simbólico: acercamiento a las fronteras invisibles

Tomando lo anterior como base contextual, queda clara, en primera instancia, la existencia de un contenido perceptual social compartido, el cual justamente es el responsable de edificar los imaginarios colectivos, en tanto propende por la legitimación del despojo como ejercicio de la subjetividad; sin embargo, este no se presenta como tal al individuo, pues su nivel de interiorización es tal que ha naturalizado estas como el curso de la vida urbana.

Entonces, partiendo del hecho de la discriminación como principio colectivo cristalizado, se conforman en la construcción de estereotipos conjuntos identitarios más cerrados, en los que unos toman distancia de aquellos en quienes recae la carga estigmatizadora, otros luchan por rechazar esa carga, y algunos llegan incluso a aceptarla y naturalizarla. De esa manera, se desata una serie de hostilidades, que mina cada vez más el sentido comunitario, en su lugar los señalamientos refuerzan los imaginarios que dan cabida a la criminalización.

Al presentarse altos niveles de densificación en los sectores urbanos degradados, que de por sí ya son criminalizados por las élites, se dificulta la instalación de barreras físicas para el distanciamiento, lo que no significa que las barreras espaciales no existan; en este caso se instauran medidas restrictivas de

3 Cabe anotar que la separación del *otro* y el *yo* es solo un ejercicio funcional para la comprensión de la mirada subjetivada, puesto que interacción tiene lugar en los diferentes yo, mirada que por lo demás no ha contemplado aún la conformación de poderes locales.

circulación manifiestas en la conformación de fronteras invisibles, espacios de la no circulación o circulación reservada, tanto por los niveles de inseguridad, reales o presumibles, como por la carga estigmatizadora.

Ello, en cierta medida, obedece al mecanismo de organización de los asentamientos; pese a la creencia de que las barriadas son irregulares y desorganizadas, en su interior se establecen zonas más apetecibles, así cuentan con condiciones en infraestructura y equipamiento similares, su determinante es el prestigio. No obstante, en terrenos donde las condiciones varían drásticamente, los terrenos disponibles serán las zonas con mayores falencias: déficit en prestación de servicios públicos, difícil acceso, agudos problemas en infraestructura, zonas de alto riesgo, construcciones en materiales inadecuados y un largo etcétera; entonces, en el apretado escenario se confina al suburbio a aquellos venidos a menos.

Ahora bien, el escenario se complejiza al incluir la variante del control territorial: los mecanismos de regulación territorial deberían servirse de las disposiciones oficiales, para las cuales es determinante la presencia de la autoridad territorial, de forma que influyan en la apropiación y uso del suelo, que a su vez mediará en la interacción social. Sin embargo, los desposeídos, tradicionalmente sometidos al abandono estatal, han tenido que gerenciarlo desde la dinámica local, que en su manifestación positiva nutrirá el ejercicio comunitario para el fortalecimiento de lazos sociales y la reivindicación del derecho al espacio, pero, en otros contextos menos afortunados, desatará una disputa caracterizada por la violencia y la lucha territorial.

La falta de orientación estatal, aparte de vulnerar el principio de equidad, expone las zonas pauperizadas a convertirse en focos ideales para el arribo de capitales clandestinos, los cuales mediarán las relaciones espaciales, determinadas por las actividades ilegales, y a su vez generarán tensión social. Así pues, la zona y sus habitantes serán sometidos a los parámetros de la guerra.

Conclusiones

Hasta aquí, se han demarcado tres escenarios posibles que acentúan la instalación de fronteras invisibles en zonas tradicionalmente relegadas: 1) la instauración de suburbios –zonas con mayor grado de carencias en los barrios tradicionalmente deprimidos o suburbios–, 2) el abandono estatal, y 3) la entrada de agentes económicos ilegales externos. Por tanto, el diálogo entre dichas condiciones y su grado de injerencia va a intervenir en la lucha territorial y el intercambio social en cada zona, en el entendido de que ninguna de las tres representa condiciones *sine qua non*; de hecho, en la heterogeneidad de composiciones espaciales, la variación, combinación y ausencia de una o más ejerce significado en la conformación socioespacial.

En todo caso, la primacía del sujeto individualizado sobre las posibilidades de articulación colectiva pondrá énfasis en la precariedad del espacio y sus habitantes, en suma, los hará susceptibles a la informalidad, la ilegalidad, el crimen y la violencia. A pesar de la carga negativa que el planteamiento parece tener, ni el espacio es un contenedor, ni la sociedad un simple receptor; el sentido dialéctico de la conformación estructural pone en evidencia la capacidad de injerencia de la sociedad en las instituciones de poder que, si bien se valen de una amplia capacidad represiva, la garantía de su hegemonía se sustenta en la influencia en la construcción de identidad de los individuos.

Lo anterior alude a que las aproximaciones teóricas buscan servir de puente entre las dinámicas urbanas y su comprensión, sobre el entendido que para transformar las desigualdades primero es necesario conocer sus formas más soterradas; en cuanto a la segregación entre pares, la disputa primera se yergue en la escena de lo comunitario, en el fortalecimiento del cooperativismo y la libertad como valor de desenvolvimiento humano basado en la independencia y la praxis, cuya orientación permita abolir la propiedad y el consumo como valor de vida humana.

Referencias

- Acevedo, A. y Vivas, A. (2004). *Pobreza: una propuesta de análisis sistémico*. Series soluciones de desarrollo n.º 13. Fundación Konrad, Pontificia Universidad Javeriana.
- Ahumada, C. (2002). *El modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana*. El Áncora Editores.
- April-Gnisset, J. y Mosquera Torres, G. (1984). *Clases segregación y barrios*. Universidad del Valle.
- Aymerich, J. (2004). Segregación urbana y políticas públicas con especial referencia a América Latina. *Revista Sociológica*, 18, 117-130.
- Barbary, O., Dureau, F. y Lulle, T. (2007). Dinámicas metropolitanas de poblamiento y segregación. En F. Dureau *et al.* (coords.), *Ciudades y sociedades en mutación: lecturas cruzadas sobre Colombia* (pp. 163-235). Universidad Externado de Colombia. https://www.researchgate.net/publication/258159138_Dinamicas_metropolitanas_de_poblamiento_y_segrecacion
- Bourdieu, P. (2013). Efectos de lugar. En P. Bourdieu (dir.). *La miseria del mundo* (pp. 119-124). Fondo de Cultura Económica.
- Briger, P. (2002). De la década perdida a la década del mito neoliberal. En J. Gambina (comp.), *La globalización económico-financiera. Su impacto en América Latina* (pp. 341-355). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101004010308/21.pdf>

- Caparrós, A. (1974). *El carácter social Según Erich Fromm*. Resumen de la tesis presentada para aspirar a grado de doctor. <https://www.raco.cat/index.php/Convivium/article/download/76452/98585>
- Cariola, C. y Lacabana, M. (2005). *Pobreza, Nueva pobreza y exclusión social: los múltiples rostros de Caracas*. Banco Central de Venezuela.
- Carman, M., Vieira, N. y Segura, R. (2013). Introducción. Antropología, diferencia y segregación urbana. En M. Carman, N. Vieira y R. Segura (coord.), *Segregación y diferencia en la ciudad*. Flacso Ecuador, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.
- Castells, M. (1974). *La cuestión urbana*. Siglo XXI.
- Clichevsky, N. (2000). *Informalidad y segregación urbana en América Latina. Una aproximación*. Cepal-Serie N.º 28: Medio ambiente y desarrollo. Cepal-Eclac. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5712/S00100859_es.pdf?sequence=1
- Dureau, F. (2002) Las nuevas escalas de la segregación en Bogotá. En F. Dureau et al. (coord.), *Metrópolis en movimiento: una comparación internacional* (pp. 162-170). Alfaomega.
- Lulle, T. (Coord.), Dureau, F., Gouëset, V. y Mesclier, E. (Colab.) (2007). Bogotá: crecimiento, gestión urbana y democracia local. En F. Dureau et al. (coords.). *Ciudades y sociedades en mutación: lecturas cruzadas sobre Colombia* (pp. 353-395). IFEA, Universidad Externado de Colombia. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/258158694_Bogota_crecimiento_gestion_urbana_y_democracia_local
- Fromm, E. (1957). *El miedo a la libertad*. (3.ª ed.). Paidós.
- González, G. (2005). Segregación socioespacial, integración al mercado de trabajo y deterioro de los grupos de ingreso medio en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, México, 2000. *Papeles de Población*, 11(46), 79-108. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/112/11204604.pdf>
- Harvey, D. (1977). *Urbanismo y desigualdad social*. Siglo XXI.
- Harvey, D. (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. Ediciones Akal, S. A.
- Katzman, R. y Retamoso, A. (2005). Segregación espacial, empleo y pobreza en Montevideo. *Revista Cepal*, 85, 131-148. Recuperado de https://flacso.edu.ec/cite/media/2016/02/Katzman-R-et-al_2005_Segregacion-espacial-empleo-y-pobreza-en-Montevideo.pdf
- Lefebvre, H. (2013). *La producción del espacio*. Capitán Swing.

- Sabatini, F. (2006). *La segregación social del espacio en las ciudades de América Latina*. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo, Departamento de Desarrollo Sostenible.
- Tecco, C. y Valdés, S. (2006). Segregación residencial socioeconómicas e intervenciones para contrarrestar sus efectos negativos: reflexiones a partir de un estudio en la ciudad de Córdoba. *Cuadernos de Geografía*, 15, 53-66. Recuperado de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/1286/1831>
- Todorov, T. (1987). *La conquista de américa: el problema del otro*. Siglo XXI.
- Toussain, E. (2004). *La bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).
- Valencia, L. (2006). Neoliberalismo y gobernabilidad democrática en América Latina. *Papel Político*, 11(1), 475-487. <http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v11n1/v11n1a14.pdf>
- Zimmermann, L. (2014). Segregación espacial y políticas públicas. Miradas cruzadas entre Francisco Sabatini y Jorge Iván González. *Revista Territorios*, 30, 219-224.

Tercera parte

Espacios de investigación

Capítulo 6. La producción del espacio desde la actividad informal. Soacha, un escenario en disputa

Edwin Giovanni Ruiz Rojas

Michael Martínez Munar

Soacha se ha constituido en un municipio que cobija las necesidades de vivienda de muchas personas que han migrado de diferentes partes del país hacia Bogotá en busca de mejores oportunidades, pues, además, representa menores costos de vida que la capital. Un ejemplo clave se refleja en su nivel de estratificación, en el cual, la mayor parte del territorio presenta el estrato 1 por encima del 2 y del 3 (Alcaldía de Soacha, 2000). Esta condición, apoyada por el desarrollo inmobiliario y sus bajos costos, ha presentado el crecimiento de la mancha urbana, y le ha permitido a un gran número de personas el acceso a la vivienda con servicios básicos (luz, agua, gas). De este modo, Soacha comienza a crecer de manera desmedida, tanto en infraestructura como en población, generando saturación, escasez de equipamiento y bienestar.

La anterior condición no permite la debida cobertura de muchas de las necesidades que requiere la población, como el trabajo, acarreando el afán dentro del municipio por acceder a alguna actividad que permita solventar las necesidades económicas del día a día. En consecuencia, muchas personas se desplazan a la capital en busca de trabajo y otras se mantienen en el municipio, dividiéndose en dos grupos: los que logran insertarse en alguna labor económica formal, como una empresa, y los que deciden participar como actores de lo informal a partir de la autogestión, actividad que les permite obtener recursos económicos y un nivel de bienestar sostenible tanto para ellos como para sus familias.

La informalidad se desarrolla como una actividad que aprovecha el ambiente de oportunidad a partir de diferentes ámbitos, como el comercio informal, la vigilancia de carros, el transporte, entre otros, dependiendo de la demanda de los tipos de servicios. Dichas actividades, con el transcurrir de los años, han llevado a que se presenten dinámicas particulares, atrayendo la atención de varios actores que, en conjunto, configuran una forma de concebir el espacio. De ahí que el presente capítulo tiene como objetivo reconocer cómo la actividad informal configura el espacio y le dota de sentido desde la intervención de los trabajadores informales, la institucionalidad y el resto de la población que los frecuenta. La investigación cobra sentido por cuanto se conocen las formas en las que el municipio, a partir de actividades económicas de autogestión, tienen la fuerza para intervenir activamente en el espacio y crear sus propias dinámicas, capaces de repercutir en las lógicas del capital.

Informalidad urbana

La informalidad en Soacha no es una particularidad reciente de los últimos años, esta hace parte de un fenómeno que se ha venido desarrollando a lo largo y ancho de su territorio, producto de una serie de acontecimientos que han marcado al país, como lo ha sido el crecimiento de las ciudades desde las olas de migración del campo a la ciudad, algunas de estas con el interés de formar parte del cuerpo laboral de la industria y otras por el conflicto armado que ha vivido el país (Alfonso, 2012). De este modo, Soacha ha presentado un crecimiento poblacional y urbano al encontrarse dentro de la zona conurbada de la capital, propiciando la llegada de personas de todo el país que encuentran en este municipio mayores oportunidades de vivienda por sus bajos costos en comparación con Bogotá.

En consecuencia, hoy Soacha presenta el mayor crecimiento poblacional de Cundinamarca que pasó de tener 37 000 habitantes en 1973 a 400 000 en 2005, y según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2018 se censaron 544 997; aunque hoy, el municipio, en un trabajo de autoconteo, estimó 1 000 000 de habitantes (ProBogotá, 2018). Este crecimiento desmedido, a su vez, significó una carencia en el bienestar de su población, al no contar con la suficiente cobertura en términos de la salud, educación, recreación, trabajo, entre otros; lo cual encaminó al sector de la población, que no logró insertarse en el mercado laboral formal, a adelantar una autogestión económica dentro de la informalidad laboral. Por ejemplo, el comercio informal que atiende a la comercialización de productos comestibles o tecnológicos, y la vigilancia informal referida a la labor de los cuidadores de automóviles.

De esa manera, para entender de qué se trata este concepto de la *informalidad* dentro del ámbito laboral, es necesario precisar dos aspectos: el espacio de trabajo y las condiciones de trabajo. El espacio en la informalidad se configura a partir de

condiciones que requieren de un conglomerado o flujos de personas que mantengan la actividad en movimiento, pero esto no solo se presenta en el ámbito informal, sino también en el sector formal. La diferencia consiste en las posibilidades de llevar a cabo la labor en un lugar reglamentado y con los permisos requeridos por el municipio. Así, la informalidad es llevada a cabo en espacios públicos, debido a las dificultades económicas que implica conseguir un espacio formal, por ejemplo, un establecimiento comercial. De allí que se presenten inconvenientes con la institucionalidad, en este caso, la misma Alcaldía de Soacha, debido a que su desarrollo en términos administrativos representa la ocupación del espacio público. Ahora bien, las condiciones de trabajo refieren a las situaciones económicas con las que los trabajadores informales cuentan, o a la cobertura institucional de la Alcaldía que posibilita a quienes trabajan en el sector a tener garantías laborales en su oficio, por ejemplo, la salud, la pensión, el aseo, entre otros.

Retomando el aspecto de los ejercicios, el comercio y la vigilancia informal que se presenta en el municipio de Soacha, es pertinente mencionar el lugar donde dichas actividades se ejercen. Como ya se había referenciado, la informalidad se vale de los flujos y la aglomeración de personas para que se vuelva una actividad económicamente rentable, pero ello no se da al azar, sino por la demanda de ciertos servicios que tienen las poblaciones, en su mayoría ofrecidos por entidades formales, por ejemplo, centros comerciales, terminales de transporte, hospitales, parques, entre otros. De esta condición se ve beneficiada no solo la actividad informal, sino la formal, pues entre ambas se logra satisfacer necesidades de la población.

Por las condiciones anteriores, el municipio de Soacha presenta las dinámicas de informalidad en varios sectores de sus comunas, valiéndose de ejes comerciales formales, unos más recientes que otros. Un ejemplo de ello es el comercio informal, que ha tomado fuerza desde 2014 con la llegada de las estaciones de Transmilenio; hoy, a sus alrededores se comercializa todo tipo de comidas rápidas, empaquetados, frutas, verduras y mucho más. También hay otros ejes con más años en el mercado, como el de la carrera séptima en dirección al parque central de Soacha; este es un eje comercial con mayor reconocimiento por la población al estar enfocado en las comidas y accesorios. Allí, toman lugar quienes se dedican a la *vigilancia* de los automóviles de los ciudadanos, mientras acceden a los servicios que se encuentran en el sector.

La producción del espacio informal

Después de la visión propuesta acerca de las discusiones académicas en torno a la informalidad urbana, es fundamental entender desde una perspectiva espacial la dinámica en que se estructura el orden urbano, de acuerdo con los parámetros que establecen los distintos agentes que producen la ciudad, a raíz del

problema de la informalidad asociada al comercio y a los cuidadores de carros. Para ello, se acude a los postulados de Henri Lefebvre sobre la producción del espacio (1974), con el propósito de dar cuenta de cómo se genera la informalidad urbana en el municipio de Soacha en relación con la forma en que la perspectiva institucional concibe el espacio y cómo surgen prácticas informales que lo reestructuran constantemente desde lo que se puede llegar a saber.

En ese sentido, se toma como base la dialéctica espacial propuesta por Lefebvre (1974), *espacio percibido*, *espacio vivido*, *espacio concebido*, además de la idea que el autor propone sobre el *espacio social*, con el fin de reconocer las acciones y prohibiciones asociadas al modo en que se busca presentar y representar dicho espacio. A esta perspectiva se incorporan las pugnas que se han dado en los escenarios de estudio debido a la multiplicidad de intereses que se enfrentan constantemente entre la administración municipal y agentes del sector informal, teniendo en cuenta que la construcción del espacio no surge como algo neutro o transparente, sino más bien atravesado por conflictos y contradicciones tanto en el plano global como local.

Para Lefebvre (1974), el espacio social es resultado de un conjunto de relaciones entre objetos y productos que establece un orden determinado, un claro ejemplo de ello es la forma en que la producción capitalista ha mediado las relaciones sociales a partir de la mercancía, desplegando estructuras de pensamiento y producción asociadas al valor de cambio de los productos. Sin embargo, este se presenta de modos diferentes. Por un lado homogéneo, abierto a las acciones razonables y autorizadas, donde se desprenden múltiples intentos por planificar el espacio urbano desde un orden lógico que comprende lo cuantitativo; por otra parte, se carga de prohibiciones y cualidades ocultas que afectan a múltiples individuos y grupos de personas, debido a que son dejados al margen de la arquitectura espacial que establece la planificación urbana. Lo anterior, bajo un contexto donde el capitalismo es el agente que produce el marco de actuación de la sociedad y las relaciones de producción y reproducción en beneficio del capital.

Esta reflexión trae consigo un cuestionamiento alrededor del problema de la informalidad en el municipio: ¿de qué manera se establece la mencionada relación en el escenario informal? Como se indicó anteriormente, la ciudad es un espacio concebido desde una perspectiva funcional, que establece para cada espacio una serie de prácticas concretas que son prohibidas o no, esta relación es palpable en el escenario de estudio, debido a que el espacio público del municipio se encuentra sujeto a prohibiciones que afectan el establecimiento de agentes informales en este, generando así múltiples tensiones y rupturas debido a la asociación que hace cada agente sobre el espacio.

En ese sentido, en los escenarios de estudio se identifican diferentes dispositivos utilizados por la administración municipal para reglamentar la presencia de los comerciantes y cuidadores de automóviles respectivamente, estableciendo un

mobiliario público que tiene como principal interés controlar el espacio público. Sin embargo, no es efectivo debido a que los ciudadanos que establecen allí su lugar de trabajo buscan continuas alternativas para seguir haciendo su uso, evidenciando las múltiples contradicciones que presenta el espacio. Durante la investigación se evidenció en el sector de San Mateo la implementación de vallas, cámaras de seguridad, presencia de la fuerza pública, y en el sector de Soacha Parque, el establecimiento de zonas de estacionamiento regulado (ZER) y zonas de prohibido parquear, estos afirman un tipo de arquitectura espacial que busca ejercer un poder institucional en el espacio. Sin embargo, a raíz de esto los ciudadanos han realizado actividades que se contraponen a los planteamientos ejercidos desde lo institucional, reafirmando las tensiones y distancias que se generan entre lo concebido y lo vivido en la problemática de la informalidad del municipio.

Lo anterior es una clara muestra de que el espacio es tanto concebido por lo institucional como transformado por las vivencias de los agentes de la informalidad, una articulación que, en palabras de Lefebvre (1974), tiene conflictos y contradicciones en el espacio/tiempo, algo que se refleja en la práctica espacial, donde se materializa la contradicción entre lo concebido y lo vivido, es decir, lo percibido. Este proceso afirma que la dinámica del espacio social es un producto extremadamente diverso y donde es importante tener en cuenta la relación que se establece entre los sujetos, la sociedad, el espacio y el tiempo.

Esto evidencia la imposibilidad de pensar la informalidad como un sistema aislado de las relaciones que la han construido históricamente; es menester, entonces, evidenciar las condiciones previas que han construido las formas en que hoy se concibe, vive y percibe la informalidad en ambos sectores. Así, es importante identificar estas condiciones en los lugares de estudio, ya que el comercio informal surge en mencionado espacio a través de las interacciones con flujos y centros de tránsito de los ciudadanos. En palabras de Lefebvre (1974), “en la práctica espacial de una sociedad secreta su espacio; lo postula y lo supone en una interacción dialéctica; lo produce lenta y serenamente dominándolo y apropiándose de él” (p. 97). Esto es fundamental para comprender cómo actúa la sociedad y por lo tanto ver cómo opera ella con los individuos.

Estudiar la informalidad desde el comercio y la vigilancia en Soacha

De esa manera, se comprende que el espacio en sí mismo no representa la configuración de algún tipo de actividad, no significa interés, contradicción, conflicto o tensión. A partir de la intervención de agentes el espacio cobra sentido, pues con sus prácticas se llegan a conocer las particularidades, las relaciones y los conflictos que se pueden presentar en el espacio. De este modo, la informali-

dad aparece como un escenario donde se dan continuos acuerdos y disputas que generan las condiciones para que esta se lleve a cabo, aprovechando las necesidades cotidianas de la población que no han sido solucionadas por el comercio formal, apoyándose de la gran accesibilidad y flexibilidad con la que estos servicios pueden ser ofertados. Así, dicha actividad se ha posicionado dentro de la comunidad ofertando sus servicios en lugares que se han configurado como centros de comercio o lugares de tránsito reconocidos por los ciudadanos. Un ejemplo de ello es el caso de la calle 13, los alrededores de la plaza de mercado, el parque principal, la carrera séptima y las estaciones de Transmilenio.

En estas circunstancias, los comerciantes informales empiezan a percibir de un modo particular el espacio, llegando a ejercer ciertas dinámicas en él, que entran en un campo de disputa al enfrentarse con las lógicas del espacio concebidas por la institucionalidad y el capital, destinado para el beneficio del mercado formal. Sin embargo, esto presenta una contradicción, debido a la falta de garantías que la institucionalidad genera ante la población. De modo que, al no presentarse una cobertura total de los servicios y consumos que exige la ciudadanía, se genera un escenario de oportunidad para quienes no cuentan con la garantía de un trabajo formal con todas las prestaciones de ley.

Por tal razón, bajo el entendido de que el espacio es el resultado de un conjunto de relaciones entre objetos y productos, la informalidad se integra como una actividad laboral económica que oferta un servicio o producto, configurando una directriz con la cual la población puede entender y hacer uso del espacio. Así, se identifica la producción del espacio a partir de prácticas que, para este caso, son establecidas por la actividad informal. Por la forma en la que opera, entra en conflicto con los intereses del sector formal, de allí que se generen aspectos de rechazo, incluso en algunos se presenta hasta la prohibición de la misma actividad. Aun así, en esta dinámica en la que la institucionalidad prioriza los intereses del sector formal, son las vivencias mismas de la población las que dan validez y respaldo a las prácticas del sector informal, generando transformaciones significativas en el espacio.

Con el propósito de comprender mejor las dinámicas que se evidencian, se mencionan dos casos particulares: por un lado, la comercialización de productos comestibles y de tecnología al costado suroccidental de la estación de Transmilenio de San Mateo, y la vigilancia de carros del parque principal de Soacha (figuras 1 y 2), dos actividades que se han caracterizado por su origen informal y que acogen a un gran porcentaje de población que no cuenta con trabajo formal. Las dos actividades se presentan en un escenario de oportunidades que coinciden con la cercanía de centros de comercio formal o institucionales públicas, de allí que se presenten las mencionadas disputas por el espacio.

Para el caso de la vigilancia de carros, a partir de 2015 la Alcaldía empezó a reglamentar las tarifas de vigilancia por hora del sector del parque principal de Soacha; esta acción posteriormente fue ejecutada por el Concejo Municipal con del Decreto 111 de 2016. Acción que aprovechó el mismo municipio para intervenir e integrar otros actores para que se encargaran de hacer cumplir dicha normativa, desconociendo la manera en la que ya venían operando los vigilantes de carros informales. Dicha situación se presentó alrededor de la estación de Transmilenio de San Mateo. Durante el 2018, la Alcaldía de Soacha ejecutó una serie de estrategias para desplazar a los comerciantes informales que se encontraban en el lugar; al ver que no hubo un mayor impacto, se adelantaron acciones más contundentes de la mano de la Policía, lo que resultó en el desalojo de muchos de estos vendedores, la reubicación de otros, y la resistencia de unos pocos que hoy aún se encuentran allí.

Así, para conocer más sobre las condiciones y dinámicas que se presentan en el espacio, fue menester, luego de la revisión bibliográfica, realizar el trabajo de campo en tres momentos: primero, observación, con la intención de develar algunas características descriptivas de cómo se lleva a cabo cada labor informal; segundo, acercamiento con la población informal, entablando relaciones de diálogo en las que ellos conozcan sobre lo que se está estudiando y su papel en la investigación, para finalmente, a partir de entrevistas, conocer las particularidades de su labor, los cambios a los cuales se han tenido que acoplar y las dificultades de ello, entendiendo la forma en que la actividad informal hace parte de las condiciones del espacio con las cuales diferentes actores interactúan. Además, se hace uso de la fotografía como herramienta de análisis espacial para evidenciar las problemáticas presentes en los lugares de estudio.

Disputa por el espacio urbano: lo institucional y lo informal

Las acciones que emanan de las vivencias cotidianas de la población en el espacio no son siempre bien aceptadas por la institucionalidad y dan como resultado la oposición de estos agentes hacia los ciudadanos que hacen uso del espacio público, siendo estigmatizados y discriminados debido a su condición de comerciantes informales. De esta manera, los agentes de la institucionalidad buscan homogeneizar continuamente la vida cotidiana de los ciudadanos, creando una serie de normativas que indican cómo los cuerpos deben estar en el espacio, desplegando diferentes dispositivos para que este sea funcional al mundo de la mercancía y el Estado. Sin embargo, esta búsqueda constante de homogeneizar las prácticas sociales que establece el urbanismo es un proceso inacabado y en constante disputa, debido a las reivindicaciones que han realizado los ciudadanos para hacer efectivo su derecho de estar en el espacio público (Lefebvre, 1970).

Sin duda, esta contradicción que se presenta en el espacio se evidencia en la calle, donde a pesar de los intentos por homogeneizar el espacio a favor del orden de las prácticas espaciales, los comerciantes informales recrean una serie de prácticas que terminan por crear un nuevo espacio. En el caso del municipio de Soacha, esta reapropiación de la calle a través del comercio informal se concentra en los lugares que se han establecido como ejes centrales, en mayor medida las estructuras asociadas a Transmilenio y el centro histórico-comercial del municipio; así, se configuran escenarios de disputa asociados a la informalidad urbana.

Con el propósito de evidenciar el mencionado conflicto, es importante ubicar con precisión la temporalidad en la que abordamos el problema de investigación, teniendo en cuenta tanto las acciones de los comerciantes informales, como las que nacen de la administración municipal. Si bien es cierto que la actividad del comercio informal se viene desarrollando desde finales del siglo xx con la integración del municipio en las dinámicas urbanas, los conflictos que se han presentado con las diferentes administraciones es un fenómeno más reciente. Por esta razón se estableció abordar la problemática a partir de 2015, debido a que desde dicha fecha la administración municipal movilizó dispositivos normativos cada vez más severos para expulsar a los comerciantes del espacio público; claro está, como lo menciona Luis Poloche, un líder de los comerciantes informales del sector de San Mateo en una entrevista, “ha sido un proceso dinámico que ha tenido momentos de mayor o menor conflicto” (Poloche, 2019).

La vigilancia informal de carros en el Parque Municipal de Soacha

La vigilancia de carros en el parque principal de Soacha surge como una actividad económica alterna, realizada por algunos tramitadores de impronta de vehículos en la Secretaría de Tránsito desde la década de 1990; principalmente ha sido una actividad desarrollada por agentes independientes que trabajan desde la informalidad, otorgándole un importante sustento económico a familias enteras que no tienen forma de integrarse al mercado laboral formal. Además, dicho trabajo se consolida en relación con la importancia administrativa que tiene el centro histórico del municipio, debido a que ha sido un escenario que se ha configurado como un centro administrativo y de comercio donde los ciudadanos realizan múltiples actividades. A partir de 2015, las zonas de estacionamiento en el sector entre las carreras 7.^a y 8.^a, y las calles 12 hasta 17, empezaron a ser reguladas con el establecimiento de las ZER, una iniciativa que nace del Concejo Municipal a través del Decreto 111 del 2016 con el fin de reglamentar el parqueo en las calles del centro del municipio. Lo anterior representó una problemática para los cuidadores de carros informales que llevaban años trabajando en el lugar, debido a que comen-

zaron a ser expulsados por la Policía del espacio en el que ofertaban el servicio, vulnerando el derecho al trabajo que habían ejercido durante casi tres décadas.

Las ZER son operadas por un agente privado a través de una concesión que otorga el municipio, los ingresos obtenidos por el establecimiento de estas zonas se dividen en 65 % para el operador y 35 % para el municipio, rubro que pasa al erario de la Secretaría de Hacienda para ser invertido posteriormente en programas de desarrollo social. Con respecto a su funcionamiento, las ZER prestan el servicio de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., y el costo por hora es de COP 2000, cobrados por las personas encargadas de administrar los espacios de parqueo con un dispositivo electrónico. El establecimiento de estas zonas de parqueo regulado ha sido blanco de críticas por parte de la comunidad, debido a que no se establecen solamente en los alrededores del parque principal, también hacen uso de las calles aledañas a él, presentando gran congestión vehicular en las angostas calles del municipio (PeriodismoPublico.com, 2019).

A pesar de los múltiples intentos por ocupar todas las zonas de parqueo por parte del operador privado, los cuidadores de automóviles informales resisten la ocupación con diversas estrategias que les han permitido mantenerse en una zona restringida del sector. Sin embargo, en su cotidianidad son vulnerables y trabajan con la presión que ejercen con frecuencia las autoridades. Frente a la mencionada amenaza, la táctica de los trabajadores se basó en ocupar paulatinamente una zona oficial que está dispuesta para ser usada por la Policía Nacional, lo que les permitió mantener su independencia con respecto al operador privado. Claro está, cotidianamente se ven en la necesidad de establecer negociaciones con la Policía y agentes de la administración municipal para mantener a su disposición esas bahías de aparcamiento.

Lo anterior da cuenta de las reapropiaciones espaciales que establecen los trabajadores informales, a pesar de la búsqueda constante por homogeneizar y privatizar el espacio público con fines de privilegiar los intereses de un agente privado. En palabras de Óscar Gaitán (vigilante de carros), “como nosotros ya llevamos mucho tiempo, fue el único pedazo que pudimos recuperar, porque si no cogemos ese pedacito nos habían sacado totalmente del espacio público, porque ya se habían quedado solo los del ZER” (Gaitán, 2019). Lo anterior evidencia que el espacio social no es algo neutral, se encuentra cargado de múltiples contradicciones que reorganizan constantemente el tejido urbano, un proceso inacabado que presenta una constante pugna inherente a las relaciones de propiedad que se han construido en el espacio público (figura 3).

El comercio informal en el sector de San Mateo

Las razones por las cuales hay comercio informal cerca de las estaciones de Transmilenio no son diferentes a las que se presentan en la vigilancia de carros; estas actividades son producto de la falta de oportunidades laborales que no permite a una parte de la población integrarse al sistema laboral formal, por lo cual deben valerse de la autogestión para solucionar sus necesidades económicas. Por tanto, es una actividad que se da en el municipio hace ya algunos años; según el testimonio de 15 comerciantes que han trabajado en el sector por más de 10 años, mencionan que la actividad allí se ha desarrollado a partir de la concentración que se generaba por el interés que tenía la población de dirigirse hacia el principal centro comercial del municipio, Unisur. Este se encuentra frente a la autopista Sur, en el costado nororiental, entre la calle 30 y la calle 27. Este centro comercial fue tan importante que llegó a ser punto de referencia para la mayoría de los habitantes de Soacha. Con el tiempo, las condiciones continuaron generando concentración de habitantes en el sector, como la posterior construcción del puente de la calle 30 y la estación de Transmilenio San Mateo.

Las dinámicas del comercio son llevadas a cabo a partir de puestos de trabajo propios, los cuales son conocidos por ellos mismos como *chazas*; su labor ha estado atravesada por las constantes contradicciones con la institucionalidad, pues, con la justificación de que el espacio público está siendo ocupado ilegalmente, se ha intentado regular la actividad con la intervención de la Policía; ello ha generado un ambiente de tensiones, pues en palabras de los comerciantes esta intervención se ha convertido en hostigamiento, donde las instituciones han aplicado medidas por fuera de los protocolos establecidos, esperando limitar su actividad a un espacio determinado. Un ejemplo de ello es la mención constante de la posibilidad de abrir procesos judiciales, adjudicar multas o quitarles las mercancías, además con múltiples intentos de desalojo del espacio donde están ubicados.

La situación del comercio informal se complicó el 14 de enero de 2019, cuando la Alcaldía empezó a implementar planes de acción para el desalojo de los comerciantes de la mano de la fuerza pública. Fue tan intensa esta intervención que muchas personas que se dedicaban a la actividad informal prefirieron retirarse del lugar. A otros, que se negaron a abandonar su forma de sustento, pasados unos días se les ofreció adherirse a un proceso de reubicación en la calle 30, al costado oriental de la estación de San Mateo. Algunos de ellos aceptaron al encontrar riesgoso la recurrente intervención de la Policía en el lugar. Por otra parte, quienes definitivamente no vieron viable la oferta de la

reubicación persistieron en el espacio, manifestando que no había garantías para aceptar una reubicación y que, si se llegaban a crear las condiciones de estabilidad laboral, podrían aceptar.

De este modo, los comerciantes informales empezaron a presentar estrategias y dinámicas propias del comercio informal, un claro ejemplo de ello son las negociaciones con la administración municipal; Hernando de Soto (1986) las denomina *la normatividad extralegal*, entendida como acuerdos o consensos a los que llegan los mismos comerciantes, incluso llegan a presentarse acuerdos con las mismas instituciones. Son un tipo de acuerdo que responde a las exigencias de la Alcaldía, pero se priorizan las necesidades de los comerciantes. De esta manera, se acuerda con la Policía el uso del espacio para el comercio de los productos a determinadas horas, por ejemplo, la ocupación de la acera justo al frente de la autopista donde en horas pico los comerciantes tienen que desplazarse hacia los costados del puente, durante el resto del día sí pueden ubicarse ahí. Con ello, se genera dentro del espacio un ambiente de tranquilidad, ya que los acuerdos que han llevado los comerciantes informales con la Policía reducen los esfuerzos a seguir manteniendo un conflicto, donde la Alcaldía no ha logrado un consenso real con los comerciantes en el cual se vean beneficiadas y conformes las dos partes.

Además, la Policía acordó con *el líder*, el representante de los comerciantes informales, que el número de chazas establecidas en el lugar no debe obstruir de manera significativa el tránsito de peatones en el espacio público. Bajo esa condición, podrían permanecer allí siempre y cuando fueran ellos mismos los encargados de no permitir el asentamiento de nuevas chazas, además de la posible comercialización de cualquier tipo de mercancías ilegales. Ello se prestó para una situación particular en donde los mismos comerciantes informales se convierten en sus propios vigilantes, restringiendo el espacio público de manera irónica pero razonable, dadas las condiciones.

Así, la producción del espacio público contiene las condiciones de una vida que resiste ante los imperantes intentos de privatización y homogeneización que pretenden los gestores de lo concebido, dando cuenta de que el espacio no solamente está determinado por las grandes tendencias que permiten o prohíben una serie de prácticas; también se moviliza a partir de las reivindicaciones locales, en este caso, las que realizan los comerciantes y vigilantes informales. Además, una de las características de esta población es que a lo largo de su vida han resistido ante la estigmatización y constante opresión ejercida por la institucionalidad y los ciudadanos que no encuentran cómoda la forma en que se establecen en el lugar, por lo que los comerciantes informales han tenido que ser constantes con su presencia para lograr el reconocimiento de quienes también habitan el espacio (Lefebvre, 1974).

La informalidad, un problema a escala global

Abordar el problema de la informalidad a través de lo urbano requiere hacer referencia sobre la producción de la escala espacial, en el entendido de que los problemas urbanos no pueden ser abordados solamente desde lo local, ya que también obedecen a dinámicas globales y nacionales que están en constante interacción con las ciudades. Esto se debe a que su actual organización se configura a partir de una dinámica mediada por los continuos procesos de globalización que promueve el capital, dando como resultado la configuración de un patrón de ciudad de carácter mundial (Brenner, 2013). De esa manera, resulta importante abordar lo urbano y la informalidad como una cuestión de escala, ya que en la actualidad son fenómenos que se encuentran asociados a los procesos más generales de la organización espacial.

Debido a que la ciudad se enmarca en las reglas de juego establecidas por la economía neoliberal globalizada, sería un error abordar el comercio informal urbano a partir de una sola escala de pensamiento, bien sea global o local, debido a que los constantes procesos de acumulación y distribución de capital por el mundo reconfiguran constantemente las formas en que se produce el espacio urbano. De esa manera, mientras el gran capital busca configurar lo global, en lo local aparecen expresiones que modifican continuamente el espacio, un claro ejemplo de ello es la reconfiguración del espacio público que hacen los trabajadores del comercio informal en Latinoamérica, claro está, donde cada espacio se encuentra marcado por las rupturas y continuidades particulares de cada uno.

Una evidencia de ello es la manifestación de la economía en países capitalistas, específicamente en América Latina, donde el trabajo informal hace parte de la vida cotidiana de los habitantes de las grandes urbes. Además, cumple un papel importante en el conjunto de actividades socioeconómicas, debido a que este representa un amplio número de los trabajadores urbanos, una muestra de ello es la cantidad de personas que trabajan en el sector en Latinoamérica, donde hay alrededor de 140 millones de habitantes trabajando en condiciones de informalidad, lo que representa casi el 50 % del total de trabajadores (Organización Internacional del Trabajo -OIT-, 2020).

Así, en un contexto mundial marcado por las continuas acciones del neoliberalismo, donde la precariedad e inestabilidad laboral son el denominador común, los índices de empleo informal son cada vez más altos, siendo este tipo de comercio uno de los sectores que mayor cantidad de trabajadores aporta. Esta situación provoca que dicha actividad se presente, sobre todo de aquellos que ven en el espacio público una oportunidad para tener una relativa estabilidad económica y que se ven envueltos constantemente en problemáticas debido a las acciones que tiene la institucionalidad frente al sector del comercio infor-

mal; es claro que no solamente el municipio de Soacha se encuentra afectado por dichas dinámicas, sino que se configura una serie de disputas en la escala global debido a las continuas formas por producir el espacio público.

Conclusiones

David Harvey (2012), al tratar el derecho a la ciudad, establece la importancia de los muchos intentos y aspiraciones urbanas que buscan cambiar la imagen de la ciudad. Sin embargo, el impacto del dominio del capitalismo ha insistido en imponer sus medidas, afectando las relaciones que pueda establecer la comunidad urbana. En muchos de los lugares del municipio de Soacha, los trabajadores del comercio informal llevan reivindicando su derecho a la ciudad, a partir de múltiples prácticas que han utilizado para mantener su trabajo y las relaciones que han establecido en él. Esta lucha ha sido diaria y lo seguirá siendo, debido a que ninguna parte está dispuesta a ceder, lo que hace que la lucha por el espacio se mantenga presente, sea un proceso en constante cambio y por ende inacabado.

Así, la reciente configuración del espacio es una muestra de la continua disputa, en la que el capital cumple un papel desde las prohibiciones, limitado por sus contradicciones institucionales que lo obligan a hacer excepciones, situación aprovechada por la constante participación de los agentes informales que viven el espacio público. Sin duda, abordar estas problemáticas conlleva a cuestionar la forma en que han venido operando las políticas públicas entorno al acceso del espacio público, lo que hace necesario repensar este tipo de dinámicas, tomando como voz principal la vivencia cotidiana de los gestores de lo informal y las formas en que ellos producen el espacio, con el propósito de garantizar el derecho a la participación equitativa de la ciudad.

Referencias

- Alcaldía de Soacha. (2000). *Plan de Ordenamiento Territorial*. Soacha.
- Alcaldía de Soacha. (2018). *Historia*. <http://www.alcaldiasoacha.gov.co/secretaria/secretaria-de-planeacion-y-ordenamiento-territorial/34-nuestro-municipio/18-historia>
- Alfonso, Ó. (2012). *Bogotá segmentada*. Universidad del Externado.
- Brenner, N. (2013). *Tesis sobre la urbanización planetaria* [En línea]. *Nueva Sociedad*, 243.
- De Soto, H. (1986). *El otro sendero*. Oveja Negra.

- Harvey, D. (2012). *Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana*. Akal.
- Lefebvre, H. (1971). *De lo rural a lo urbano*. Ediciones Península.
- Lefebvre, H. (1974). *La producción del espacio*. Capitán Swing.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT) (15 de abril de 2020). *Economía informal en América Latina y el Caribe*. <https://www.ilo.org/americas/temas/econom%C3%ADa-informal/lang-es/index.htm>
- PeriodismoPublico.com (30 de diciembre de 2019). *Recursos de las ZER en Soacha tienen inversión social*. <https://periodismopublico.com/recursos-de-las-zer-en-soacha-tienen-inversion-social>
- Ruiz, E. (2020). *Configuración del proceso de metropolización entre Bogotá-Soacha a partir del comercio informal. Caso específico: salida sur del Portal San Mateo* [Trabajo de grado]. Universidad Pedagógica Nacional.
- Soacha le pide al DANE revisar las cifras del Censo Nacional 2018. (2019). *El Tiempo*. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/bogota/soacha-pide-al-dane-revisar-las-cifras-del-censo-nacional-2018-319828>



Figura 1. Puente peatonal San Mateo-Soacha (2020)

Fuente: fotografía @Edwin Ruiz Rojas.

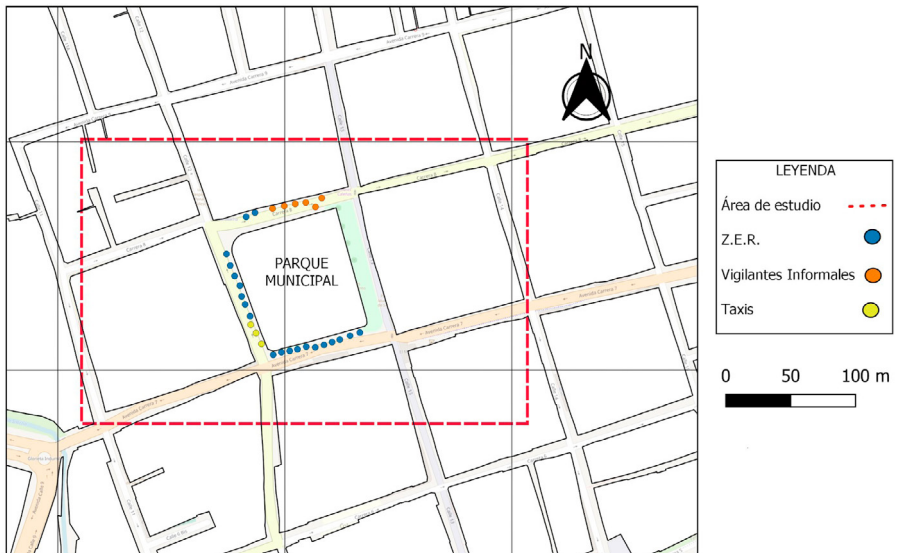


Figura 2. Zonas de estacionamiento parque municipal de Soacha (2019)

Fuente: elaboración propia.



Figura 3. Aparcamiento de ZER administrado por vigilantes informales

Fuente: Michael Martínez.

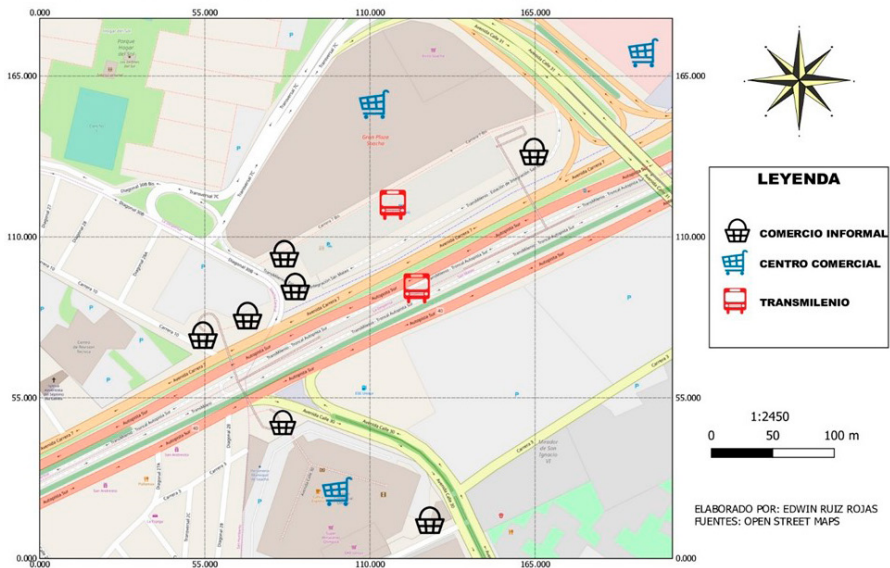


Figura 4. Circuito comercio formal-informal Soacha-San Mateo

Fuente: Ruiz (2020).

Capítulo 7. La producción del espacio urbano en Usme

Carlos Andrés González Ávila

El objetivo de este artículo es presentar un breve análisis de los distintos momentos y factores que dieron origen a la producción del espacio urbano en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, y cómo aquellos se han venido transformando en sus múltiples interacciones, siendo el centro de atención la autoconstrucción de vivienda, su producción formal, y la renta y el capital mineros como un elemento constante a lo largo del proceso de urbanización.

Este texto forma parte de una investigación más amplia titulada “Somos de barrio y tierra: la alfabetización territorial como propuesta educativa para organizaciones populares y comunidades habitantes de espacios de transición urbano-rural”, que además de ser mi trabajo de grado en la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), tuvo como pretensión ser un aporte a la Biblioteca Agroecológica El Uval, organización a la que pertenezco y que me llevó a hacer de la investigación otra manera de cumplir con los compromisos que tenemos como ser colectivo con nuestro territorio y nuestras comunidades.

La investigación urbana desde una apuesta narrativa

En las ciencias sociales se ha utilizado la escritura en primera persona como una vía válida tanto de método de exposición como de construcción de conocimiento, algunos ejemplos son el trabajo de Natalia Quiceno (2016) o el de Alfredo Molano (1985, 2001). Quizá se ha dejado atrás el debate sobre si le resta objetividad o solidez teórica el uso de este recurso, no obstante,

implica un trabajo difícil conciliar lo anecdótico o identificar algún exceso literario, de aquello que realmente permite arrojar luz sobre el problema que se decide investigar.

Como contrapunto a esta forma de exposición están las bases teóricas críticas, materialistas y de la geografía urbana que permiten una explicación sólida de la realidad siempre en aras de su transformación. Tal vez sea menos frecuente encontrar bajo estas estructuras de pensamiento formas discursivas de tipo biográfico, por ello trabajos como los de Jaramillo (1994), del lado de la geografía, y los de Zemelman (2005), por el lado de la epistemología, brindan herramientas para realizar análisis que puedan producir *conocimiento necesario* sobre un tema como la producción del espacio urbano.

El método del materialismo dialéctico histórico-geográfico propuesto por Harvey, tal y como es presentado por Delgado (2003), me permitió conciliar, de forma coherente, tanto el recurso discursivo de la exposición como el marco categorial que me permitiera analizar el problema. Esta conciliación se dio bajo dos premisas: el espacio es socialmente producido, por tanto, la figura y el papel que el espacio desenvuelva y exprese depende de las relaciones sociales que se den en un momento histórico determinado; segundo, que es preciso relacionar la historia y la geografía, y toda disciplina que se interese en la dimensión espacial de las dinámicas sociales, para analizar el espacio. Además, por las características de este método, el aumento o reducción en la escala espacial, desde el contexto internacional hasta lo que sucede en un barrio, es pertinente considerarlo para entender la complejidad de los fenómenos socioespaciales. Por esta razón, no hay divorcio posible entre los sujetos y las relaciones en las que se ven insertos y a la vez producen; por ello, escribir en primera persona e hilar la historia de vida de mi familia y la mía son un recurso totalmente válido, y necesario para mí, a la hora de analizar la producción del espacio urbano en Usme.

La llegada a Usme

Mi familia materna es de origen campesino, proviene de Tuta, un pueblo en el departamento de Boyacá. La llegada a Bogotá hacia los años 1950 se dio por la necesidad de encontrar ingresos económicos más estables. Se asentaron en el barrio Cundinamarca, aledaño a la Zona Industrial; esa primera vivienda se encontraba en los potreros todavía sin construir. Allí, el abuelo se dedicaba al cuidado de esos terrenos y a lotearlos para futuras construcciones.

Hacia la década del sesenta, los abuelos y sus dos hijas menores, una de ellas, mi mamá, terminan viviendo en una casa con solar en el barrio Tunjuelito, en el sur de la ciudad. Un muy mal negocio con respecto a la ubicación

que representa el barrio Cundinamarca, muy cercano al centro geográfico de la capital. A lo largo de esas dos décadas inició un proceso intenso de urbanización y crecimiento en Bogotá, que termina desbordando las intenciones de los planes urbanísticos que se tenían para ese entonces (Metrovivienda, 2011, p. 50).

Este fenómeno es compartido por las ciudades latinoamericanas, la creciente industrialización y la violencia en el campo son quizá los dos factores que provocan los éxodos masivos hacia las capitales. Para 1964, el 41,9 % de la población bogotana carecía de vivienda o de los servicios básicos, es decir unos 711 355 bogotanos (Torres Carrillo, 1993, p. 27). Algunas de esas familias constituyeron una fuente de ingresos para la familia ya que esa casa en Tunjuelito funcionó como inquilinato, la administración de las rentas quedarían en manos de mi mamá y tres hermanas más después de la muerte de ambos abuelos hacia principios de la década del setenta. Y, en esas mismas familias, se encontraría mi familia paterna que venía del Valle del Cauca, que huía de la violencia e intentaba reconstruir su vida desde cero.

La familia González vivió en diferentes lugares antes de parar en Tunjuelito; Tuluá y Pereira fueron algunas de las ciudades intermedias donde se radicaron por temporadas, entre tanto mi mamá se ocuparía como obrera en distintas empresas cuando intentaba consolidarse un “Estado de bienestar” y las garantías laborales eran estables. En 1988 nació mi hermana mayor, hija de un hombre que no se hizo responsable y dejó a mi mamá sola en su crianza. A principios de los años noventa llegó mi papá, el abuelo paterno, un hermano y tres hermanas más a la casa con solar y, para 1995, nació yo.

Soy el resultado, como muchas otras personas, del encuentro de migrantes campesinos que irían produciendo el espacio urbano popular que actualmente conocemos en los márgenes surorientales de Bogotá. Según los datos aportados por Bárcena (2001), en 1970 países como Argentina, Brasil y México contaban con el 78,4 %, el 55,6 % y el 58,9 % de población urbana, respectivamente; para 1990 esta población constituiría el 86,9 %, el 74,7 % y el 74,1 % en estos países. En Colombia, para 1970 la población urbana representaba el 57,7 % del total; en 1990, el 69,4 %. La ciudad latinoamericana para el momento de mi nacimiento se había consolidado como espacio fragmentado y de exclusión.

La casa-inquilinato fue vendida y repartida la herencia, lo que le correspondía a mi mamá era muy poco para adquirir una vivienda. En tal situación decidió unir fuerzas con la menor de todas las hermanas; la suma que lograron conformar entre las dos les permitió comprar una casa en obra gris, todavía más al sur, en el barrio Valles de Cafam II sector, de la localidad de Usme (figuras 1 y 2).

Antes de que se diera la compra de esta nueva casa no se sabía nada de Usme, salvo que quedaba lejos, por la avenida Caracas hasta llegar a Usme Pueblo –plaza central de lo que en la época de la Colonia se conoció como San Pedro de Usme–, y que a lo largo de este recorrido se encontraban varias canteras y minas de explotación de materiales para la construcción, especialmente gravas, arenas y arcillas.

El polígono que aparece en blanco sin traza urbana (ver figura 2), entre las avenidas Caracas y Boyacá, corresponde en su mayoría al Parque Minero Industrial del sur de Bogotá; hacia el costado occidental compartimos con Ciudad Bolívar el Relleno Sanitario Doña Juana, que recibe la basura de toda la ciudad y de algunos municipios cercanos, y que explotó en 1997 –mismo año en que llegamos a la localidad–, afectando a miles de habitantes del sur.

Particularmente, Valles de Cafam está conformado por dos modelos de producción de vivienda diferentes; en el I sector se encuentra una vivienda planificada destinada para policías y servidores públicos; el II sector, donde llegamos a vivir, corresponde a la autoconstrucción de vivienda. En la actualidad ambos sectores siguen activos, aunque en comparación, es la vivienda de interés social impulsada por el Estado y los capitales inmobiliarios los que han densificado el barrio y traído consigo la presencia de supermercados de cadena y dotaciones como parqueaderos.

Para las viviendas autoconstruidas, como el caso de mi familia, es común invertir en la construcción de nuevas plantas y así obtener rentas por el alquiler de apartamentos y habitaciones a otras familias. Mi mamá y mi tía, con los inicios de la apertura económica, perdieron empleos formales y, desde entonces, se dedicaron a trabajar como empleadas domésticas en casas de familiares o particulares que contaban con mejores condiciones de vida. Esto les impidió, entre otras cosas, acceder a pensiones, por ello las semanas que lograron cotizar fueron invertidas para obtener rentas; dirían ellas, “enterramos nuestro trabajo en la casa”.

Las dinámicas espaciotemporales, es decir, histórico-geográficas, que hemos vivido y producido como familia son las mismas que hoy subsisten y se yuxtaponen en la producción continuada del espacio urbano en Usme; la expansión de la ciudad es todavía intensa en esta localidad por disponer de amplios sectores rurales que han sido los que han sufrido las mayores presiones producto del modelo expansivo-desigual de ciudad.

La autoconstrucción

Como dije antes, las lógicas de producción del espacio urbano se yuxtaponen, conviven y crean relaciones sinérgicas entre ellas, hablo de la autoconstrucción y de la producción de vivienda formal impulsada por el Estado y el capital

inmobiliario. No obstante, es necesario darle a cada una tratamiento, pues los fenómenos varían en intensidad según las condiciones históricas que hacen de matriz de las lógicas socioespaciales.

Volviendo a la historia familiar tendré que hablar de La Formaleta, un negocio de la familia Uyazán Ávila,¹ al cual llegué a trabajar brevemente como obrero y que se dedicaba al alquiler de formaletas. Esta empresa se consolidó en los años sesenta y setenta, coincidiendo con el auge y fin del proceso de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), con los movimientos políticos revolucionarios de América Latina, especialmente la Revolución cubana y la respectiva contrarrevolución gringa con su Alianza para el Progreso impulsada por J. F. Kennedy.

En Colombia, la ISI no absorbió la oferta de mano de obra proveniente del campo, de hecho la tasa de desempleo llegó al 13 % en 1967 (Bejarano, 1980), fenómeno que se explica en gran medida por la inyección de capitales en los desarrollos tecnológicos, es decir, en los medios de producción mismos, acelerando la capacidad productiva sin el empleo de fuerza de trabajo. Bogotá y sus sectores populares se convirtieron en una preocupación para el Estado en cuanto amenaza política; paradójicamente la autoconstrucción haría de catalizador de estas demandas sociales atenuando las posibilidades de un estallido social.

Según Torres Carrillo (1993), la autoconstrucción se caracteriza por el hecho de que:

El mismo consumidor del bien final [la vivienda] es a la vez el productor directo, y ejerce el control técnico y el control económico de la producción. [...] Implica una reducción de costos mediante el uso de mano de obra familiar y el abaratamiento de la renta del suelo (ha sido adquirido por invasión o por urbanización pirata). (P. 40)

La Formaleta cumplió un papel importante durante aquellas décadas, sus mayores clientes fueron precisamente esas familias que por cuenta propia dieron respuesta a su necesidad de vivienda. Según cuenta mi primo Alexander, uno de los hijos de la familia Uyazán Ávila, y quien quedaría a cargo del negocio por varias décadas, La Formaleta cruzó la ciudad de punta a punta, yendo a barrios rodeados por campos de papa, cebolla y cereales —un paisaje similar puede verse actualmente en Usme—; su llegada simbolizaba la capacidad de la familia que les contrataba para poder “echar la plancha”, es decir, culminar la etapa de vivir en un *casalote* a constituir *la casa* de una o varias plantas.

1 Rosalba Ávila Espitia, hermana mayor de mi mamá, y Aristides Uyazán coformaron su hogar en el barrio Abraham Lincoln, en la localidad de Tunjuelito, a principios de la década del sesenta.

Mi primo describe el paisaje de aquellos años diciendo que “lo que no eran barrios, eran chircales y canteras”, refiriéndose a los sectores que hoy corresponden a Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal Sur. Esa descripción corresponde a uno de los modelos de poblamiento propuestos por Zambrano (2005), que consiste en asentarse en las proximidades de actividades económicas, manteniendo la vivienda cerca del trabajo; tales asentamientos terminaron rodeando los centros de explotación minera, como es el caso de barrios como La Fiscala o Chircales.

Los viajes de La Formaleta por estos años hacia Usme contaban únicamente con la avenida Caracas como vía de acceso, además, por lo expuesto, la urbanización se fue dando *a saltos*, según se ubicaran las canteras, las viviendas o los terrenos en proceso de loteo. No solo había clientes en la localidad, también había proveedores de materiales, pues aunque en sentido estricto La Formaleta no tiene dentro de sus servicios la oferta de gravillas, arenas o arcillas, cabía la posibilidad de que se les contratara incluyendo estas. El sector donde hoy funciona el Portal de Usme de Transmilenio, el Centro Comercial Altavista y los desarrollos inmobiliarios de interés social que le rodean eran para ese entonces canteras. No va a ser hasta la prolongación de la avenida Boyacá para conectar con la autopista al Llano a mediados de los años 1980 que se empiezan a construir desarrollos impulsados por el Estado y algunas empresas privadas, por ello La Formaleta va a tener como clientes durante estas décadas exclusivamente a los sectores populares de Usme (figura 3).

Sin embargo, ¿por qué se dan estas formas de producción de vivienda bajo el influjo de la Alianza para el Progreso? ¿No se supondría que las clases populares debieron ser *controladas* satisfaciendo sus necesidades en lugar de dejarles el campo abierto a su autoorganización? El Estado colombiano, bajo las lógicas de esta estrategia de *contención revolucionaria* y por medio de instituciones como la Caja de Vivienda Popular (CVP) y el Instituto de Crédito Territorial (ICT),

produjo entre 1964 y 1973 el 15 % de las viviendas en Bogotá, pero contrario a lo que se esperaba, solo el 21,8 % de los esfuerzos gubernamentales fueron a dar a los sectores populares, el 60 % benefició a las clases medias y el 13,2 % a las clases altas. (Torres Carrillo, 1993, p. 30)

Por esta razón La Formaleta tuvo menos *visitas* al occidente de la ciudad, donde se desarrollarían proyectos como Ciudad Kennedy y, prácticamente, dependería de la autoconstrucción para obtener ingresos.

A la par, en medio de los estertores de la ISI, y por los mismos años, de 1964 a 1973, la autoconstrucción constituyó el 49,7 % de la vivienda producida en Bogotá (Torres Carrillo, 1993). Se tiene entonces una oferta de vivienda estatal focalizada en estratos medios y el modelo de la autoconstrucción como única

vía para dar solución a las necesidades de las familias trabajadoras de los márgenes sociales y de las periferias, ahora, urbanas.

Hacia 2015, el negocio terminaría, debido a razones subjetivas, como el agotamiento de ese ritmo de vida y el deterioro en la salud, y otras objetivas, como una rentabilidad cada vez menor, producida, en parte, por una mayor oferta de soluciones habitacionales por parte del mercado formal, acompañadas de subsidios y estructuras de financiarización iniciadas en la década del ochenta pero aceleradas hacia finales de siglo y repotenciadas por los gobiernos nacionales de Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018).

Producción de vivienda formal

Como se vio, la oferta de vivienda formal tuvo unos alcances bastante limitados en la localidad; no obstante, con la llegada del neoliberalismo y la primera alcaldía de Enrique Peñalosa (1998-2000), la ciudad continuó su modelo expansivo. Teniendo en cuenta las amplias zonas de suelo rural de Usme, se vio la posibilidad de dar inicio a la urbanización impulsada por Metrovivienda, empresa de origen público, fundada en 1998, que tenía como una de sus principales funciones regular el mercado de suelos en Bogotá y así controlar la actividad de urbanizadores piratas, terreros y especuladores.

Las últimas tres décadas del siglo xx en América Latina estarían marcadas por las dictaduras, la experimentación del modelo neoliberal en Chile y su posterior imposición en la región, pero, además, por una creciente urbanización de los países. Según Bárcena (2001), en 1990 Argentina, Brasil y México contaban con una población urbana entre el 70 % y el 85 % del total, en Colombia era del 69,4 %.

Con la apertura económica consolidándose, una reprimarización de la economía latinoamericana produciría el deterioro del sector industrial, manifestando así lo que Hirsch (1999, citado por Katz, 2016, p. 79) sintetiza como la ofensiva del capital sobre el trabajo para recomponer la tasa de ganancia. Se daría inicio a una mayor incidencia del Estado en el sector de la construcción, y por medio del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como instrumento definido constitucionalmente,² se sentarían las bases para los proyectos inmobiliarios de interés social a gran escala en las periferias de Bogotá.

2 Vale la pena recordar que en 1991 se crearía una nueva Constitución Política producto de los diálogos de paz entre el Gobierno y algunas insurgencias, dentro de las más conocidas estaría el M-19. En el marco de esta transformación constitucional terminan instituyéndose mecanismos de planeación como el POT.

Con nuestra llegada a Valles de Cafam en 1997, asistimos a la desaceleración de la autoconstrucción de viviendas en el segundo sector del barrio. Pasaría alrededor de una década, hasta 2010, para que las viviendas se terminaran de construir y quedaran habilitadas para el arriendo de habitaciones y apartamentos, e iniciara la producción de soluciones habitacionales bajo el modelo de conjunto cerrado distribuido en torres —diferente a las urbanizaciones de casas bifamiliares sin cercamientos de los años ochenta— y la aparición de almacenes de cadena.

Un proceso similar al de Valles de Cafam se daba en la zona de frontera urbano-rural de la localidad, quizá la mayor diferencia radica en que la autoconstrucción sigue siendo dinámica, sobre todo en la zona alta de los cerros orientales, es decir, las estribaciones del parque Entre Nubes y veredas como Los Soches, El Uval, La Requilina y Chiguaza:

Según las cifras oficiales, la década de los años noventa resultó ser la más dinámica en cuanto al desarrollo de asentamientos informales con una participación del 32,5 % respecto del total. Paradójicamente, este periodo es señalado como el de menor crecimiento urbano subrayándose la desaceleración de los procesos que daban origen a la expansión de la ciudad en esta década. (AMB, Misión Siglo XXI, 1993, p. 89, citado por Torres y Rincón, 2011, p. 21)

Según el informe de gestión de Metrovivienda, para 2006, en la administración de la Bogotá Sin Indiferencia (2004-2008), se proyectaban 70 000 viviendas de interés prioritario y la urbanización de 500 hectáreas en la ciudad (Metrovivienda, 2006, p. 5). En el mismo informe, para el plan parcial Nuevo Usme, existía un potencial de 53 000 viviendas por construir, en un área de 949,96 hectáreas (Metrovivienda, 2006, p. 65).

Comparativamente, mientras en mi barrio el metabolismo de la autoconstrucción baja y se da el repunte de la producción formal, en el extremo suroriental de la localidad tanto la urbanización de origen popular como la impulsada por Metrovivienda aceleran la ampliación del borde urbano, creando así la frontera urbano-rural del suroriente bogotano y el inicio de conflictos territoriales que convocarían a la movilización de comunidades campesinas para contener a las inmobiliarias en sus intenciones de construir en territorios campesinos.

Dos modelos y una constante

En 2014 empecé a trabajar con lo que hoy se ha constituido como la Biblioteca Agroecológica El Uval (BAU), organización popular que ha desarrollado trabajo desde hace once años en las veredas La Requilina y El Uval, y que tuvo como

motivación contribuir a la organización de las comunidades rurales frente a la expansión urbana. Existía, además, una visión limitada frente a las relaciones urbano-rurales, más bien dicotómicas y que, por centrarse en la expansión urbana organizada por el Distrito, ignoraba las dinámicas expansivas impulsadas por los sectores populares.

Desde ese entonces y por tener un nivel de compromiso cada vez mayor, me fui interesando en las dinámicas socioespaciales que se daban en el territorio que, como organización, se decía defender. Claro, no es que no se defendiera, sino que la concepción de territorio que existía no correspondía a las complejas relaciones que lo van produciendo. Este pequeño ejercicio investigativo tuvo como una de sus pretensiones aportar a la comprensión de tales complejidades.

Actualmente puede decirse que hay un cambio de estrategia en la lógica de las inmobiliarias y el mercado formal. Por un lado, las organizaciones campesinas lograron contener el proyecto Nuevo Usme, constituyendo la propuesta de borde urbano-rural. No obstante la aceptación parcial de esta propuesta en el POT diseñado por parte de la segunda administración de Enrique Peñalosa (2016-2020), y posiblemente en el POT de Claudia López (2020-2024), sigue existiendo recelo frente a la garantía de que se respete este límite. Por otro lado, los capitales inmobiliarios han desarrollado proyectos *por saltos*. Puede que hayan retrocedido, temporalmente, en la idea de poder desarrollar Nuevo Usme; sin embargo, con la consolidación de barrios populares gracias a la legalización de sus predios, les ha sido más sencillo ir construyendo urbanizaciones de manera dispersa a lo largo de la vía a Usme, la misma avenida Caracas, pero que ya se prolonga hacia el páramo de Sumapaz, ganando espacio con menores o nulas resistencias de parte de las comunidades urbanas para la implantación de viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP).

Por citar algunos casos, para 2018 Metrovivienda estaba en el proceso de construcción de tres proyectos, Usme I, Usme III y Cantarrana; hace décadas que estos espacios dejaron de ser ocupados activamente por comunidades campesinas, eran terrenos con dueños ausentes que esperaban la oferta de compra de sus propiedades, además, al no alcanzar los procesos de loteo de las décadas del setenta y ochenta por parte de urbanizadores piratas, fueron quedando rodeados por barrios populares que irían peleando por su formalización para que llegaran las redes de servicios públicos a sus hogares, y la titulación de sus viviendas fuera legal. En otros términos, fueron lotes de engorde que especularon con la llegada del capital inmobiliario favorecido por el cambio en uso de suelo logrado por los pobladores de los barrios que le circundan y el impulso del gobierno distrital, vía Metrovivienda, de ofertar soluciones tipo VIS y VIP.

Así las cosas, los dos modelos no representan contradicción alguna para el modelo expansivo, como se ve, los grandes capitales son capaces de aprovechar las luchas por la vivienda de los sectores populares en su beneficio y, además, siguen consolidando un mercado en los bordes de la ciudad, pues no hay una vida organizativa activa en estos reductos de suelo rural, o mejor, de expansión, así que a la larga no hay resistencia. Es importante mencionar que como BAW hoy somos conscientes de la complicada situación de las comunidades del lado rural de la frontera, pues mientras el agro siga siendo inviable económicamente, la juventud de estas zonas seguirá emigrando a la ciudad, facilitando la presión sobre las poblaciones campesinas cada vez menos numerosas y más viejas.

Además de los dos modelos que han tenido protagonismos diferenciados, aunque en ocasiones coincidentes, hay, en la historia de la producción del espacio urbano en Usme, un tercer factor, menos explícito en los discursos académicos y políticos que analizan el fenómeno urbano en la localidad. Se trata del papel del capital minero representado por multinacionales, compañías locales legales o no, que no han cesado en la explotación de los recursos minerales y que participan de manera directa o indirecta de los beneficios que trae consigo la producción de espacio urbano, beneficios que van más allá de tener un mercado para sus mercancías.

Para dilucidar cómo el capital minero ha sido beneficiado de múltiples maneras por los procesos de producción de espacio urbano, vale la pena apelar a la distinción que hace Jaramillo (1994) entre *espacio construido* y *espacio urbano*:

[...] si la tierra urbana tiene la capacidad de generar espacio, debemos distinguir rigurosamente que ella no es en sí misma tal espacio: los hombres, para poder desarrollar las actividades que conocemos como urbanas, deben adaptar esta tierra en un proceso que les exige gasto de energía humana y otros recursos; en otras palabras, deben edificar la tierra. El suelo proporciona entonces el soporte para la creación de algo, *el espacio construido* [cursivas del autor], que es el que finalmente se consume como receptáculo de las actividades humanas. (P. 101)

En principio podría suponerse que es el hecho de producir espacio construido lo que beneficia al capital minero al depender de materias primas como las arenas y gravas para poder edificar, pero es necesario recordar que en Usme los primeros asentamientos urbanos se dieron alrededor de las canteras mismas, pues era el lugar de trabajo de las familias, es decir, la fuerza de trabajo, las familias y trabajadores de las minas, eran los compradores directos de los materiales que ellos mismos extraían. Es más, en algunos casos se prescindía del salario y se pagaba con mercancías que producían los mismos trabajadores, a este sistema de pago se le conoció como *el millar*, el cual consistía en que los primeros mil ladrillos que se producían serían la forma de pago a la familia trabajadora para que con ellos edificaran su casa.

Puede entenderse entonces que en los inicios de la urbanización de Usme las relaciones que existieron y sustentaron los primeros asentamientos no eran capitalistas, ya que se obviaba el salario en la relación entre la familia trabajadora y el terrateniente dueño de la mina; esto no quiere decir que estas relaciones, más cercanas a las formas de asociación del mundo rural, no fueran funcionales a las lógicas de capital, lo que sí es cierto es que no eran burgueses y obreros los actores que se relacionaron en estas primeras décadas del proceso urbanizador.

Este momento seminal del proceso de urbanización es de suma importancia, ya que posee el germen de las diversas manifestaciones que va a tener el capital minero según se den las relaciones entre el conjunto de recursos materiales y humanos que dependían de la actividad minera. La mayoría de estas manifestaciones tienen que ver con la renta, definida por Samuel Jaramillo (1994) como

[...] un mecanismo de la economía capitalista a través del cual se desvía una parte de la masa de plusvalía y se sustrae al torrente en el cual la competencia reparte el excedente global en proporción a los capitales avanzados y crea una tasa de ganancia general [...] surge cuando aparecen *circunstancias externas al capital* que de manera permanente crean distorsiones sobre el proceso de acumulación que *no son reproductibles a voluntad del capital*. (P. 95) (cursivas por fuera del texto original)

El terrateniente dueño de la mina va a capturar rentas en al menos dos momentos. El primero tiene que ver con la extracción de los recursos del subsuelo, y como lo ejemplifica “el millar”, en ocasiones ni siquiera tuvo que pagar salarios, solo necesitó del título de propiedad que le daba derecho exclusivo de explotar ese subsuelo y que tendría como comprador el mercado de la construcción. No bastando con eso, y por el hecho de ser el propietario, conserva el mismo suelo que, con el paso del tiempo y en la medida que distintos actores e intereses vayan emergiendo, va a convertirse en *suelo urbano*. Recordemos los viajes de La Formaleta, donde antes había minas ahora existe el Portal de Usme y los desarrollos inmobiliarios de Altavista. Entonces tenemos una ganancia doble. El rentista-minero-terrateniente tiene el sartén por el mango: posee una parte esencial de las mercancías que se precisan para producir *espacio construido*, para que, más tarde y según el avance de la frontera urbana, posea el *suelo urbano* una vez ha cesado de explotar sus canteras.

Además de este doble enriquecimiento, hubo una tercera fuente de ganancias, procedentes de una fracción del salario que los obreros destinaban a la compra de los materiales necesarios para construir, ellos mismos, su vivienda. Por tanto, la fuerza de trabajo, el *capital variable*, retornaba al capital constante con la adquisición de los recursos necesarios para que los trabajadores produjeran su vivienda, siendo esta una de las condiciones mínimas para la

reproducción de la fuerza de trabajo y que, como es claro, no fue garantizada por el dueño de la mina toda vez que el trabajador aportó de su propia fuerza de trabajo, y de la de su familia, para cumplir con el proceso de autoconstrucción. Básicamente pasó del sistema del *millar*, al de pagar salarios, manteniendo la lógica de circulación y acumulación del capital.

Desde finales de la década del ochenta hasta la actualidad, se estructuró una cuarta fuente de ganancia que ha consistido en el impulso dado por el Estado a la rama de la construcción, lo que ha repercutido, entre otras cosas, en la financiación de la vivienda. Así entonces, el capital minero ha garantizado el aumento de su tasa de ganancia al haber contado con una ingente demanda de materiales de construcción por parte de las constructoras, que además ha sido asegurado en el marco de las alianzas público-privadas, o más directamente por el Estado gracias a los programas de subsidios que ha brindado mediante créditos. Ahora bien, lo que se ha mantenido como el origen de estos ingresos reabsorbidos constantemente por el capital minero es la fuerza de trabajo, pues los trabajadores de las canteras continúan pagando, bien sea a los bancos o a los depósitos de materiales locales, las mismas materias primas para la obtención de su vivienda. Por último, vale la pena considerar la maximización de su ganancia en aquellos casos en los que el funcionamiento de las minas haya sido ilegal, pues en estos escenarios no llegan a darse los costos socioambientales de su actividad, llegando a casos en los que incluso nunca se usó licencia ambiental.³

No han importado los cambios políticos o económicos, tampoco la preponderancia de la autoconstrucción o de la producción de vivienda formal; el capital y las rentas mineras se han beneficiado siempre, se han adaptado a todos los escenarios y han sido el hilo conductor la necesidad, siempre insatisfecha, de vivienda por parte de las clases trabajadoras que viven en los bordes de la ciudad.

Conclusiones

La producción del espacio urbano en Usme reviste un alto grado de complejidad por el constante cambio de los factores y condiciones que interactúan en este fenómeno. Aunque sean constantes en su esencia, como la necesidad de vivienda o la renta derivada de la propiedad privada del suelo, sus manifestaciones cualitativas siempre estarán en constante mutación. Por ello, el análisis del

3 Un caso importante va a ser el de las minas de Potosí, en Ciudad Bolívar, en las inmediaciones del parque natural Cerro Seco, pues además de ser una de las minas más grandes de la ciudad, es también conocida la movilización social que buscaron el cese de actividades mineras en este territorio con organizaciones como “No le saque la piedra a la montaña”.

estado actual de la expansión urbana no puede caer en esencialismos dicotómicos, pues donde bien se podría ver un avance del campo popular –por ejemplo, en la organización comunitaria para la autoconstrucción o el turismo agroambiental como alternativa a la expansión urbana–, sabemos que es un escenario donde el capital puede entrar, fracturar comunidades y contar con recursos suficientes para soportar largos periodos de tiempo en aparente inactividad.

Por ello, la investigación comprometida debe señalar los vacíos conceptuales que existen en organizaciones y comunidades, facilitando una lectura más compleja de la realidad para que con ella se cualifique la comprensión de esta y así las acciones que permitan el cuidado de la vida común, la defensa del territorio y el respeto de condiciones de vida digna para quienes habitamos esta localidad, esta frontera urbano-rural, sean cada vez más efectivas.

Referencias

- Bárcena, A. (2001). Evolución de la urbanización en América Latina y el Caribe en la década de los noventa: desafíos y oportunidades. *ICE, Revista de Economía*, 1(790), 51-62. <http://www.revistasice.com/index.php/ICE/article/view/191>
- Bejarano, J. (1980). Industrialización y política económica (1950-1976). En M. Arrubla *et al.*, *Colombia hoy* (pp. 221-270). Siglo XXI.
- Delgado, O. (2003). La geografía radical: la producción social del espacio social. En *Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea* (pp. 79-102). Universidad Nacional de Colombia-Unibiblos.
- González, C. (2019). *Somos de barrio y tierra: la alfabetización territorial como propuesta educativa para organizaciones populares y comunidades habitantes de espacios de transición urbano-rural. El caso de la vereda “El Uval” en la localidad de Usme*. Universidad Pedagógica Nacional.
- Jaramillo, S. (1994). *Hacia una teoría de la renta del suelo urbano*. Ediciones Uniandes.
- Katz, C. (2016). *Neoliberalismo, neodesarrollismo, socialismo*. Batalla de Ideas.
- Metrovivienda. (2011). *Usme: historia de un territorio*. Bogotá.
- Molano, A. (1985). *Los años del tropel. Relatos de la Violencia*. Fondo Editorial Cerec-Cinep.
- Molano, A. (2001). *Desterrados. Crónicas del desarraigo*. El Áncora Editores.
- Quiceno, N. (2016). *Vivir sabroso: luchas y movimientos afrotrataños, en Bojayá, Chocó, Colombia*. Universidad del Rosario.

- Torres, A. (1993). *La ciudad en la sombra. Barrios y luchas populares en Bogotá 1950-1977*. Cinep.
- Torres, C. y Rincón, J. (2011). *Suelo urbano y vivienda social en Bogotá: la primacía del mercado y el sacrificio del interés general, 1990-2010*. Universidad Nacional de Colombia.
- Zambrano, F. (2005). Usme: urbanización y cambios en la vida urbana. En A. M. Henao y G. Henao (dir.), *Cátedra abierta de Bogotá en localidades: pasado, presente y futuro de la localidad de USME* (pp. 9-40). Cámara de Comercio de Bogotá. https://issuu.com/ollaartistica/docs/camara_de_comercio_usme-todo
- Zemelman, H. (2005). Sujeto y sentido: consideraciones sobre la vinculación del sujeto con el conocimiento que construye. En *Voluntad de conocer: el sujeto y su pensamiento en el paradigma crítico* (pp. 81-95). Anthropos.

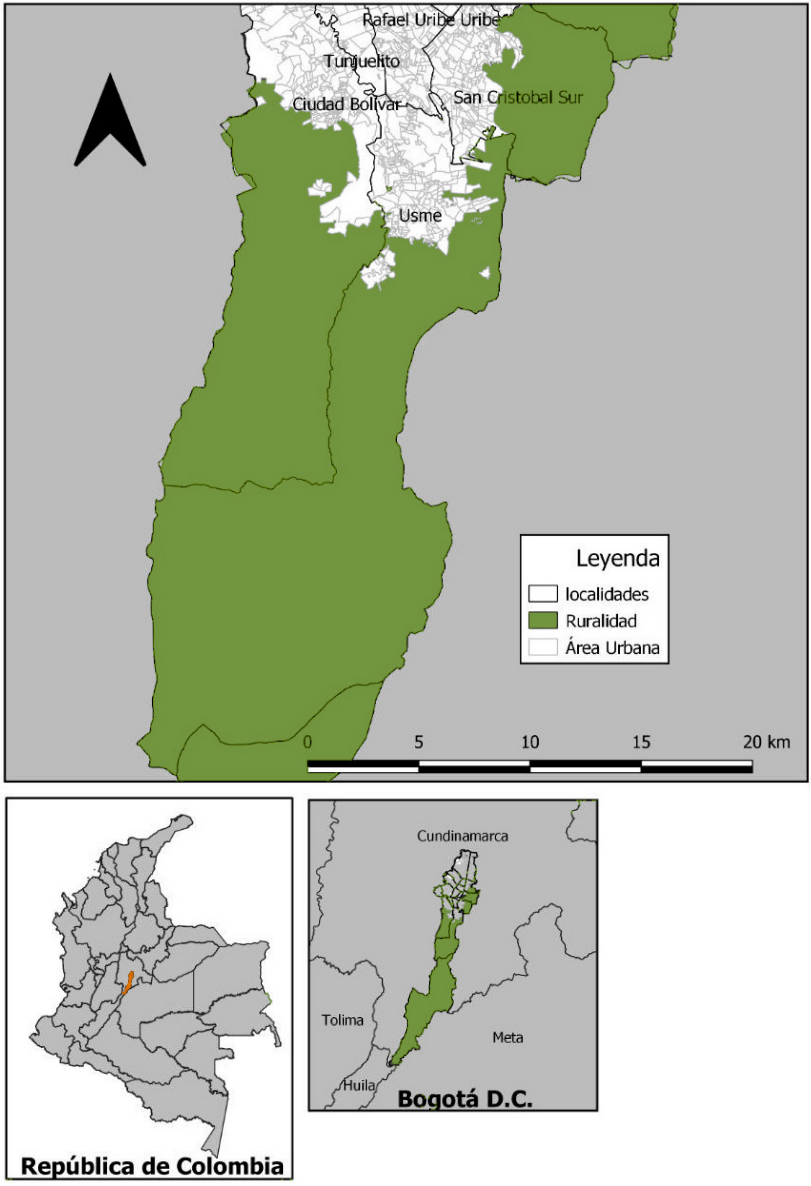


Figura 1. Ubicación localidad 5 de Usme

Fuente: González (2019),⁴

4 Si bien la elaboración es propia, también es colectiva en la medida en que las cartografías se deben a la disposición de Fabián Montejo, miembro del equipo de la Finca Faro de la BAU, geógrafo de la Universidad Nacional y amigo.

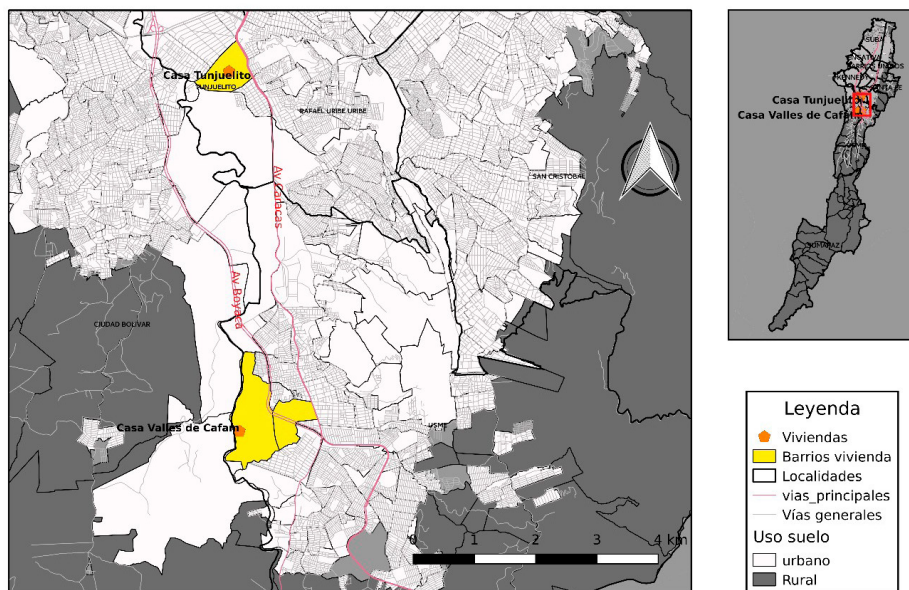


Figura 2. Lugares de vivienda de la familia materna

Fuente: González (2019).

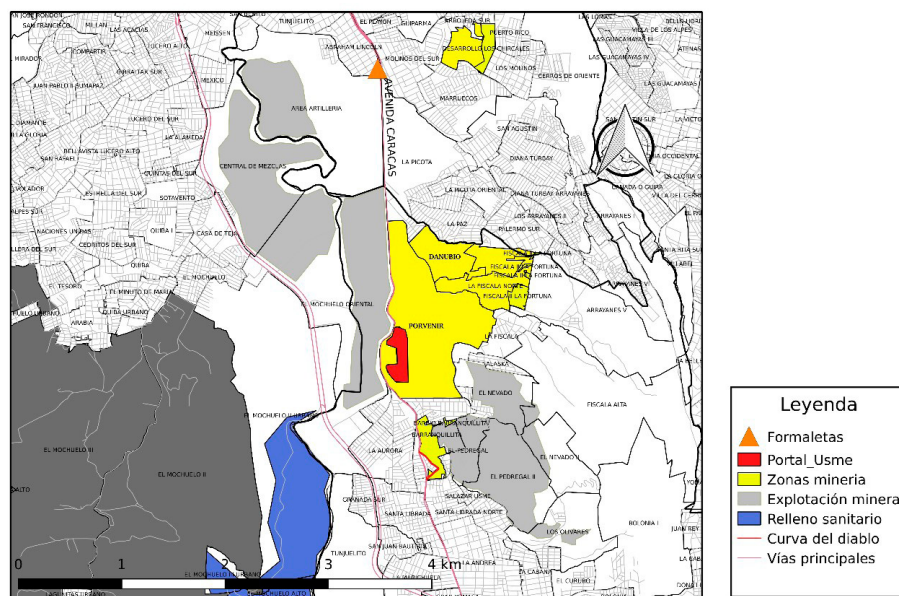


Figura 3. Canteras visitadas por La Formaleta

Fuente: González (2019).

Capítulo 8. Universidades como agentes urbanos

Carolina Botía Cella

Madisson Carmona

Durante las últimas dos décadas, las universidades privadas en Bogotá han experimentado un crecimiento exponencial no solo en el número de estudiantes matriculados, sino también en su área construida. Por una parte, es claro que la implementación de políticas públicas orientadas a aumentar la cobertura educativa en el nivel superior ha sido un claro aliciente para que las universidades privadas amplíen su oferta educativa y su presencia en el país. Así, de la mano de la expansión de créditos educativos otorgados por entidades financieras y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), junto con la estructuración de subsidios a la demanda bajo el modelo de créditos condonables como el programa Ser Pilo Paga (SPP), y la puesta en marcha de programas como Ceres (Centros Regionales de Educación Superior), cuyo objetivo es descentralizar la oferta educativa, las instituciones privadas de educación superior, gracias al impulso recibido por el Gobierno nacional, se posicionan como uno de los actores primordiales en la dinamización de este segmento de la educación en el país.

Por otra parte, es notorio que, de la mano del crecimiento de la cobertura de las universidades privadas en la capital, las instalaciones educativas se han modernizado y de ello da cuenta el ritmo constante de construcción de edificaciones destinadas a aulas, laboratorios y centros de enseñanza y extensión especializados. También ha contribuido, por un lado, la apertura de líneas de crédito de la Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter), inicialmente destinadas a entidades públicas y ahora extendidas a instituciones privadas; y, por otro lado, la llegada de fondos de inversión con intereses en el segmento educativo y la configuración corporativa-financiera de las universidades privadas en Colombia.

De lo anterior se derivan las preguntas orientadoras de este ejercicio de investigación: ¿por qué estas instituciones educativas privadas se fortalecen y aumentan su infraestructura en tan cortos periodos de tiempo? ¿Por qué son objeto de inversiones extranjeras si son entidades sin ánimo de lucro? ¿Cuál es el interés de estos fondos de inversión en capitalizar universidades privadas que, por principio legal, deben reinvertir todas las utilidades en su funcionamiento y no en la generación de dividendos para los inversionistas? Para acceder a la respuesta, aun cuando sea parcial, a estas preguntas, se sugiere que las universidades no pueden leerse únicamente en función de sus labores sustantivas –docencia, investigación, extensión y gestión académica–, toda vez que estas, sin renunciar a su sentido orientador, se comportan en las últimas décadas como agentes urbanos. Esto significa que más allá de simplemente ocupar algunos sectores de la ciudad o construir infraestructura, actúan e impulsan procesos de renovación urbana en sectores de alta valorización de la ciudad, y de allí que encuentren en la inversión inmobiliaria un espacio de oportunidades para valorizar su capital.

Este trabajo investigativo surge en conjunto con los ejercicios expuestos en los capítulos previos, a propósito de las sesiones de formación del Semillero de Investigación: Problemas Urbanos Contemporáneos, enfocadas a estudiar la renovación de periferias en su vínculo con el transporte, la movilidad, la vivienda y, por supuesto, las universidades en el espacio urbano. A partir de la exploración documental sobre la expansión de la infraestructura de las instituciones de educación superior (IES) y su agenciamiento en la transformación del espacio, se observa que aun cuando es un problema actual y de completa relevancia para comprender las dinámicas de mercantilización de la vida social, los estudios urbanos no se han ocupado de problematizarlo. De allí el interés, surgido desde el Semillero, por aportar elementos analíticos y metodológicos a esta discusión.

Los estudios urbanos y las universidades

En América Latina, la espacialización de las universidades es un tema que aun con su relevancia no ha sido desarrollado ampliamente. Los trabajos que se encuentran sobre las universidades y la ciudad se enmarcan mayoritariamente en la historia de las ciudades universitarias y del cambio que los barrios han evidenciado desde el asentamiento de los complejos universitarios. Al respecto, la investigación de Silvia Arango (2012) destaca que el origen de las ciudades universitarias en América Latina es consecuencia de los esfuerzos de los gobiernos progresistas desde la década del cuarenta, para quienes la creación de claustros universitarios resultaba una avanzada en el desarrollo económico e intelectual del país.

Adicionalmente, Arango (2012) señala que existieron dos procesos de construcción innovadores en América Latina que, arquitectónicamente, marcaron un hito en la construcción y formación del espacio urbano, estos son: 1) la ciudad universitaria ligada a la vida urbana ubicada en lugares centrales del casco urbano y conectada con la ciudad a través de calles, pensada para agrupar las sedes distribuidas por toda la ciudad, y 2) la ciudad universitaria independiente, la cual corresponde a claustros universitarios grandes que buscan no intervenir en las dinámicas de la ciudad consolidada y zonifican sus propias funciones en su interior, en donde también se encuentran espacios abiertos para la circulación de peatones y automóviles, un ejemplo de estas es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Ciudad de México; la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), en Bogotá, o la Universidad de São Paulo (USP), en São Paulo.

En cuanto a la relación ciudad/universidad y los conflictos que esta plantea, Sandra Mondragón (2014) logra presentar un contexto histórico, no solo de las principales universidades en Bogotá, sino de los factores que incidieron en el desarrollo de estas, como las matrículas y los programas de prestación de servicios. La autora señala dos etapas importantes en la expansión del sistema universitario: la primera es la de planificación estatal y la segunda es la del mercado internacional –en la que figura la Ley 30 de 1992– que en medio de la privatización y mercantilización dio paso a la expansión del sector privado.

Sobre las universidades y su agenciamiento en la ordenación y renovación de los sectores en los que estas se han construido, se presenta la investigación de Beatriz García y Olga Ceballos (2009). Allí se plantea que la localización de los centros universitarios e instituciones de educación superior (IES) en áreas ya consolidadas de la ciudad promueve el desarrollo de *barrios universitarios* que no solo prestan el servicio educativo, sino también toda una oferta de servicios de alimentación, entretenimiento, vivienda, entre otros. Las autoras abordan la configuración del perímetro del barrio universitario en el que se localiza la Pontificia Universidad Javeriana, y, a partir de ello, analizan los vínculos entre este y algunos barrios aledaños. En este marco espacial, se discuten asuntos como la oferta de vivienda estudiantil y también cómo estos usos de suelo se han diversificado en torno a la presencia de esta universidad privada.

En Latinoamérica, también existen algunos documentos de prensa que documentan la presencia de fondos de inversión transnacionales que operan en los mercados de capitales y, bajo vehículos financieros como los *real estate investment trusts* (REIT), adquieren no solo universidades, sino también centros educativos de educación básica (Piedrahita, 2011a, 2011b; Carmona, 2016). En el Norte Global, se encuentra una variedad de artículos que, si bien no responden precisamente al abordaje de las universidades como agentes que contribuyen a ordenar el espacio urbano, orientan debates sobre el agenciamiento de las

comunidades que se posicionan frente a la participación de las universidades en la economía de las ciudades. A este respecto, Gordon Lafer (2003) expone la importancia de la organización y movilización política como un elemento que puede contrarrestar el dominante poder del mercado laboral de las universidades, que se expande y se fortalece principalmente en ciudades que están desindustrializadas y no cuentan con otras bases económicas estables en sus agendas. En esta misma dirección, otros autores (Benneworth y Hospers, 2007) exponen los puntos de estabilidad que proveen las universidades en ciudades desindustrializadas, por cuanto permiten *desbloquear* sus economías para atraer inversiones de capital en diversos sectores de servicios especializados.

En adición, Darren Smith, aborda el concepto de *studentification* (estudiantificación), que pretende equilibrar los debates sobre gentrificación en lo que respecta a los cambios en las unidades habitacionales de las grandes ciudades del mundo. En ese sentido, se desarrolla la discusión sobre cómo las ciudades se ven transformadas no solo en los centros en los que se localizan las universidades, sino también en barrios residenciales en los que se ha creado un conglomerado de *casas de ocupaciones múltiples*, las cuales han causado fricciones en lo que corresponde a áreas estudiantiles y su nexa con poblaciones locales de bajos recursos (Sage *et al.*, 2013). Este concepto de *studentification* también es abordado por otros investigadores como Matt Mosey (2017) de la Universidad de Lincoln.

Finalmente, en “Educación superior y financiarización”, Diego Alejandro Guevara (2013) expone la influencia de las dinámicas económicas dominantes sobre los enfoques y la financiación de la educación superior, y plantea un panorama en el que hay dos ejes asociados a la inversión de capital financiero a la oferta y demanda en la educación superior. Esta lectura desde la economía aporta a uno de nuestros elementos de análisis, relacionado con los vínculos de las IES y grandes capitales financieros. Asimismo, permite explorar la transición de la educación como derecho a la educación como mercancía en el marco del neoliberalismo y la financiarización.

Como se puede observar, si bien han existido abordajes tanto en el Norte Global como en América Latina, los enfoques han sido de carácter económico, histórico y arquitectónico en la mayoría de los casos; en ese sentido, se ha estado perdiendo de vista el enfoque espacial, el cual vincula los procesos de producción del espacio urbano y la expansión de las universidades—de la mano de políticas tanto educativas como urbanas—, de ahí que el aporte que se busca realizar en el presente artículo para la discusión en Latinoamérica resida en conceptualizar las universidades (privadas y públicas) como agentes inmobiliarios, que, en el caso de las privadas, han avanzado en la configuración dos clústers de servicios educativos en la capital (Centro histórico y Chapinero) y, en el caso de las

públicas, por un lado asistente al acelerado deterioro de su infraestructura y, por otro, han visto inmersas como agentes pasivos en políticas de renovación urbana, debido a que están localizadas en zonas estratégicas de la ciudad en donde existe una fuerte presión por cambios en los usos del suelo. Ambos casos, el de universidades privadas y de universidades públicas, se abordarán en las siguientes páginas.

El marco del neoliberalismo y la educación superior en Colombia

Con el propósito ya señalado, es importante recordar que en la ciudad neoliberal se dan unos procesos específicos que se interconectan con la privatización, la liberalización, la revitalización o la desposesión de los espacios más rentables de la ciudad, con el objetivo de incrementar la circulación del capital globalizado y el consumo productivo de las clases más altas (Olivera Martínez, 2013). En este sentido, la ciudad neoliberal se manifiesta a partir de: una gestión público-privada que orienta las políticas urbanas de ordenamiento territorial y una reestructuración económica del capital que se conecta con 1) proyectos de renovación urbana, 2) inversión de grandes capitales financieros que circulan en sectores especializados de las ciudades, y 3) el apoyo de los gobiernos en sus diferentes escalas.

De acuerdo con lo anterior, a partir de 1990 –en el gobierno de César Gaviria y con la Constitución Política de 1991–, Colombia se abrió paso a la implementación de políticas neoliberales. En el campo de la educación superior es primordial la promulgación de la Ley 30 de 1992, que se constituye en su marco legal y normativo. Allí se contemplan, además de disposiciones sobre la estructura de las IES públicas y su financiamiento, que las IES privadas deben funcionar como entidades sin ánimo de lucro, lo cual indica que los dividendos generados en el cumplimiento de sus labores misionales deben ser invertidos en su fortalecimiento, y por tanto los recursos allí generados no pueden ser desviados para aprovechamiento particular de los propietarios.

Sin embargo, aun cuando en esta condición normativa se podría advertir un eventual freno para la aparición de universidades o fundaciones universitarias privadas, en realidad, desde el momento de entrada en vigencia de la Ley, el ritmo de crecimiento de estos establecimientos ha crecido de forma vertiginosa. No ocurre así con las IES públicas que, por las diversas restricciones presupuestales amparadas en este marco normativo y sus modificaciones posteriores, ha impedido no solo el fortalecimiento de las ya existentes en 1992, sino la creación de nuevas IES nacionales, departamentales o municipales-distritales.

Es de notar que del marco normativo no solo participan la Constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992, pues a lo largo de estos 30 años se han sucedido reformas y decretos reglamentarios que, por un lado, se han encargado de asfixiar la educación superior pública y, por otro, han abierto mayores espacios para la expansión de la oferta privada. A ello, contribuyen además las políticas de acreditación y aseguramiento de la calidad que por limitado sentido de la realidad parecen estar diseñadas para favorecer a las IES privadas en desmedro de las públicas, toda vez que se imponen estándares curriculares, de investigación e internacionalización que requieren inversiones cuantiosas que estas últimas no están en capacidad de sufragar.

Tomando como referencia este neoliberal, a continuación se expondrán cuatro ámbitos problemáticos a través de los cuales se avanzará en la argumentación sobre el papel de agentes inmobiliarios que cumplen las IES privadas: 1) la expansión del crédito educativo, 2) el implementación del programa SPP, 3) la llegada de inversionistas extranjeros al sector de la educación superior y 4) la participación de las IES privadas en la estructuración y ejecución de los planes parciales de renovación urbana.

La expansión de los créditos educativos

Creado en 1950 en el marco de la proliferación de políticas modernizadoras en América Latina, el Icetex se ha constituido en las últimas décadas en la principal institución promotora de los créditos educativos en el país. Por medio de una estrategia de centralización de los recursos destinados por el Gobierno nacional al apoyo de la formación profesional y posgradual, esta institución ha logrado consolidar un amplio portafolio de servicios. El grado de sofisticación financiera del Icetex, que en cierta medida lo aleja de sus propósitos iniciales, se refleja de forma patente en la inclusión en el Grupo Bicentenario, *holding* financiero estatal creado mediante el Decreto 2111 de 2019 y que persigue centralizar en un solo ente la administración de las instituciones públicas que participan en diversos sectores del mercado financiero del país. Este *holding* se crea como resultado de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la cual Colombia se vinculó en 2020, y muestra cómo, en el caso particular del Icetex, la educación migra de ser un derecho básico consagrado en la Constitución a una mercancía financiarizada.

De acuerdo con Fedesarrollo (2016), el Icetex ha cumplido sus metas en cuanto a cobertura, y para el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se propuso ampliar la cobertura del 46,1 % en 2014, al 57 % en 2018, y llegar al 67 % en 2025; adicionalmente, el mismo Plan permitió extender la cobertura hacia las instituciones de educación superior, con el fin de que estas produjeran mejoras

en calidad. Esto es de radical importancia, pues el Icetex solo ofrece créditos a estudiantes que deseen ingresar a instituciones acreditadas, y para lograr la acreditación, las entidades educativas deben buscar las mejoras en calidad, que también están dadas por espacios (infraestructuras) aptos para el aprendizaje y la socialización de los estudiantes. Asimismo, los recursos que sostienen al Icetex pasaron de \$775 000 millones de pesos en 2011 a más de \$1,5 billones en 2015, esto con base en los aportes estatales, que pasaron de \$114 560 millones a \$916 419 millones en 2015, coincidiendo con la puesta en marcha del programa SPP en 2015 (Fedesarrollo, 2016, p. 26).

En este mismo punto, universidades como el Externado entregan becas-crédito a estudiantes de pregrado, lo cual evidencia tanto una expansión como una incursión en nuevas líneas de financiación o de créditos especializados para el acceso a la educación superior:

El programa contempla entregar las becas-crédito bajo la siguiente modalidad, el 35 % de la matrícula deberá ser aportado por el estudiante mientras que el 65 % de la matrícula restante será a manera de beca-crédito. De este valor, se condona gradualmente cada semestre hasta completar el 35 % del total del costo del programa académico; y el 30 % restante, será el crédito que deberá pagar el estudiante al concluir sus estudios. Es importante tener en cuenta que esta beca-crédito no contempla gastos de ningún otro tipo más allá de la matrícula y lo estipulado en el Programa. (Universidad Externado de Colombia, s. f.)

Además del Icetex, existe una línea de cooperativas, como la Cooperativa Financiera Confiar, Fincomercio y otras líneas como la del Banco Bogotá y el Banco AV Villas, los cuales se han visto inmersos y favorecidos por el reacomodo del mercado del crédito educativo, que a su vez ha tenido lugar por los cambios de dueños o reestructuraciones de grandes bancos y corporaciones (Semana.com, 2018). Es de notar que la expansión decidida del crédito educativo en el país, tanto el promovido por el Icetex como por las instituciones financieras algunas de ellas articuladas con las IES, se da luego de la crisis hipotecaria de 2008-2009, toda vez que en la búsqueda de mercados que permitieran posicionar sus productos crediticios, grandes fondos de inversión y banco transnacionales encontraron en los países del capitalismo dependiente un puerto seguro.

Programa Ser Pilo Paga

La historia oficial del programa Ser Pilo Paga (SPP), reproducida por el Ministerio de Educación de Nacional (MEN) en cabeza de Gina Parody, y bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, ha posicionado una mirada de este como una idea que, surgida de años de estudio del profesor Roberto Zarama en la Universidad de los Andes, permitiría que estudiantes de bajos ingresos pudieran acceder a la

educación superior. Para Roberto Zarama, principal ideólogo del programa SPP, “invertir en llevar estudiantes a universidades acreditadas genera una tasa de retorno más alta” (citado por Lozada, 2018), de allí que los esfuerzos del Gobierno nacional en la ampliación de la matrícula se concentraron en promover, por la vía de la transferencia de recursos públicos a IES privadas acreditadas, en el entendido de que ello funcionaría como un mecanismo de democratización, pues al tiempo que el MEN imponía mayores requisitos para la acreditación que solo podrían ser cumplidos por las instituciones del sector privado, recortaba angustiosamente las transferencias a las IES públicas.

De acuerdo con los planteamientos del programa, el crédito educativo otorgado sería condonable en su totalidad si el beneficiario terminaba sus estudios en el periodo establecido de tiempo, y de no ser así, el estudiante (de bajos recursos y con escasas oportunidades para pagar un crédito) tendría que efectuar una devolución del total recibido desde que ingresó a la universidad. Los efectos nocivos de este estímulo a la matrícula en las IES privadas no solo se sintieron en la economía de las familias endeudadas, sino en la difícil adaptación de los estudiantes a ambientes universitarios elitizados en los que los rigores de la segregación, el rechazo y el estigma promovieron que los estudiantes *beneficiados* por el programa desistieran de continuar sus estudios universitarios allí.

Este programa fue ampliamente criticado y cuestionado por cuanto sus parámetros seguían reproduciendo el acceso desigual a la educación, y adicionalmente por concentrar el presupuesto en un número reducido de universidades privadas localizadas en las principales ciudades del país, con lo cual, además, no se rompía con las dinámicas de centralización de la oferta de la educación superior en el país. El 90 % del total de los desembolsos del SPP en el periodo de 2015 al 2018 fue recibido por IES privadas, mientras que las IES públicas recibieron únicamente el 9 % (Mora y Múnera, 2018). Zamara, en entrevista concedida a Alejandro Lozada (2018), aduce que este desequilibrio se debió tanto a las inercias históricas de las IES públicas que por medio de exámenes de admisión limitan el acceso, como a la naturaleza democratizadora del programa, pues abrió la puerta de instituciones de élite a estudiantes que de otra manera no hubieran podido acceder a ellas. Además, el autor del programa comenta, en términos justificatorios, que el SPP fue diseñado no para las universidades privadas, sino para las públicas, pero que en una situación de mercado este otorgó la capacidad de decisión a los estudiantes.

Entre los recursos del SPP que se dirigieron al sector privado, se evidencia una práctica monopólica, pues el 46 % de estos fueron recibidos por cinco de las 29 universidades acreditadas que participaron del programa. Así, como se muestra en la figura 1, la Universidad de los Andes en Bogotá, de donde emerge el programa, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Norte en Barranquilla

recibieron, entre 2015 y 2018, \$362 000 millones de pesos para atender a 9609 estudiantes, mientras que las universidades públicas Nacional, del Valle y Antioquia, con \$61 000 millones (el 16 % de lo recibido por las tres anteriores) atendieron a 3662 estudiantes, lo que corresponde al 38 % del total de estudiantes que llegaron a los Andes, Javeriana y del Norte. Esto muestra que con una inversión por estudiante sensiblemente inferior en las IES públicas el número de estudiantes cubierto supera las cifras de las IES privadas. Se concluye que la historia oficial, estructurada cuidadosamente por el MEN y el Gobierno nacional, en compañía de medios de comunicación encargados de difundir las bondades del programa, elude tres elementos de fondo: la masiva transferencia de recursos públicos a entidades privadas, la ineficiencia en la asignación de estos recursos y el deterioro de lo público orquestado desde una institución que por décadas ha servido como centro de pensamiento de políticas neoliberales en el país.

Con base en lo anterior, si bien el SPP ha promovido que estudiantes ingresen a estas universidades privadas, se ha podido rastrear que a partir de los recursos promovidos por el Gobierno, se ha incurrido en una construcción de edificios que no corresponde necesariamente al aumento de estudiantes o a la ampliación de la cobertura: se construyen edificios que no son destinados a los fines educativos, sino a la venta de servicios, como los centros de convenciones, un ejemplo de ello es el Centro Javeriana o el Hall 74 de la Universidad Sergio Arboleda. Así, se empieza a trazar un perfil de las universidades privadas de altos ingresos, que marca la tendencia de estas instituciones a la venta de servicios especializados, para lo cual requieren infraestructura.

Las inversiones de capital extranjero en las universidades privadas

Como se ha insistido, con la apertura de las economías latinoamericanas a la implementación de políticas neoliberales, diversos sectores de la vida social han sido ocupados por intereses del capital financiero. Así, desde la banca estatal, pasando por empresas de servicios públicos domiciliarios (telefonía, agua, electricidad y gas), el transporte público y, por supuesto, la educación, la marcha de las dinámicas de privatización ha avanzado desde la década de 1980 en el marco de los planes de ajustes estructural promovidos por el Consenso de Washington, y el resultado es la configuración de un clima ideológico de desprestigio de lo público que allanó el terreno para que la inversión privada se erigiera como garantía de uso racional de los recursos.

En el caso de la educación superior, los rasgos más visibles de la configuración de dinámicas neoliberales se encuentran tanto en la estructuración de programas como el SPP, la ampliación del crédito (condonable) educativo, como en el arribo de fondos de capital transnacional que invierten en empresas del sector

educativo. Si bien la magnitud de este proceso en el país es inferior a casos como el chileno o el brasileño, esto no quiere decir que el mercado sea poco atractivo. Dos empresas son las más interesadas en invertir en las IES de Colombia; por un lado, está Laureate Education Inc., y por otro Whitney University System (Ilumno) (Piedrahita, 2011a). Estas tienen en común tres elementos importantes: cotizan en la bolsa de Nueva York, ninguna ha fundado alguna IES, pues todas las que están en su poder han sido compradas y ambas tienen en los puestos directivos destacadas figuras de la política estadounidense: Bill Clinton, en la primera, y Jeb Bush, en la segunda. Laureate, para el 2011, a tan solo 12 años de su creación, tenía a su cargo 67 instituciones, y más de la mitad en ocho países de Latinoamérica.

Un aspecto que se debe destacar en la influencia de estas corporaciones en el sector educativo es que operan bien bajo modalidades de compra directa de universidades y bien con la firma de convenios de cooperación académica para internacionalización, capacitación docente o investigación. Esta última modalidad llama la atención, pues corresponde a eventuales estrategias legales que buscan eludir el escrutinio sobre la incidencia de las corporaciones transnacionales en los destinos de las universidades asociadas a estos convenios. En Bogotá, la Universidad Jorge Tadeo Lozano es la única IES que tiene un convenio de cooperación vigente con Laureate Education Inc., mientras que Whitney University System (Ilumno) participa desde 2006 en el Politécnico Grancolombiano, en términos de una *alianza bajo contrato comercial* que va desde la tercerización en áreas de administración, hasta la gestión de contabilidad, finanzas, mercadeo y control de las áreas de desarrollo tecnológico, estas últimas orientadas a generar plataformas de educación virtual de alcance mundial.

Por otra parte, Whitney University System (Ilumno) también anunció en 2012 el inicio de la alianza, en los mismos términos del Politécnico Grancolombiano, con la Fundación Universitaria del Área Andina (Celis, 2012). Asimismo, de acuerdo con Ochoa (2016), la Escuela de Administración de Negocios (EAN) y la Fundación Universitaria Los Libertadores, estuvieron bajo el radar de esta corporación. Es de notar, en el caso particular del Politécnico, que su origen, en la década de 1980, estuvo ligado a los intereses del Grupo Empresarial Grancolombiano, un importante conglomerado empresarial y financiero cuyo propietario fue el empresario Jaime Michelsen, quien se vio envuelto, a tan solo dos años de la fundación de la universidad de la que fue artífice, en un proceso legal por manejo indebidos de las inversiones del Grupo Empresarial.

Si bien, como se refirió, Laureate Education, Inc. es la corporación con menor presencia en el país, su trayectoria permite describir, en términos amplios, las dinámicas de financiarización que operan en el sector de la educación básica, media y superior. Este conglomerado educativo ha recibido inversiones de

fondos de capital como Affinity Equity Partners y de la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial, que le han permitido ampliar su portafolio de servicios educativos en países del capitalismo avanzado como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y España, y en América Latina con una importante presencia en Chile, Brasil y Colombia, entre otros países (Carmona, 2016). Ahora bien, como resultado de la pandemia de la covid-19, es importante resaltar que Laureate Education, Inc. ha reestructurado su presencia en el continente, para lo cual ha firmado acuerdos de venta de universidades en Chile (país en el cual tenía su mayor presencia en la región), Panamá y Brasil.

Por otra parte, de acuerdo con documentos institucionales de Laureate Education, Inc. los cambios en sus operaciones en América Latina tienen por objeto fortalecer la oferta educativa en nuevos canales virtuales como la plataforma Coursera, en la que el fondo de inversión Affinity Equity Partners tiene participación accionaria. Un camino similar, en términos de fortalecimiento de la educación superior virtual, ha seguido el Politécnico Grancolombiano, que luego de la articulación con Whitney University System (Ilumno) ha experimentado, junto con universidades como la del Minuto de Dios, uno de los mayores crecimientos en el número de estudiantes matriculados y, de ellos, un porcentaje significativo en programas virtuales, que las ha llevado a adelantar importantes procesos de regionalización.

Estas corporaciones transnacionales han configurado amplias redes académicas, por lo cual son cuestionables los objetivos que corresponden a cobertura y ganancia, por cuanto la construcción de edificios y expansión de la infraestructura no se destina a los estudiantes que ingresan (Piedrahita, 2011b).

Políticas de renovación urbana

En el despliegue de políticas neoliberales vinculadas con el nuevo empresarismo urbano, el desarrollo de planes parciales por parte de agentes privados, en este caso IES privadas, ocupa un lugar destacado (figura 2). Tal es el caso de la Universidad de los Andes, ubicada en una zona de renovación urbana del centro de la ciudad, y quien estructuró el Plan Parcial Triángulo de Fenicia (Cideu, s. f.), aprobado mediante el Decreto 420 de 2014 de la Alcaldía de Bogotá. Este Plan Parcial, de acuerdo con la Universidad, busca ampliar la infraestructura académica y al tiempo integrar al campus universitario predios aledaños no consolidados. Para la ejecución del Plan Parcial, la Universidad propuso vincular a los propietarios y moradores de la zona a la propuesta, con el objetivo de generar un ambiente sostenible en el que los habitantes tradicionales del barrio no se vieran afectados por los cambios en los precios del suelo derivados de esta dinámica expansiva del campus.

Ahora bien, las IES no solo participan en las dinámicas de renovación urbana por la vía de la estructuración de planes parciales, como la Universidad de los Andes, sino también por la compra de predios aledaños a las sedes centrales con el objetivo de configurar *agrupaciones y conjuntos universitarios* (Mondragón, 2014, pp. 152-154), en los cuales se busca el aprovechamiento del *tejido urbano ya desarrollado* (p. 152). En este rubro se ubican universidades como Externado, Javeriana, Rosario o Sergio Arboleda, quienes han logrado consolidar sus campus universitarios por medio de dos recursos: integrando edificaciones aledañas que han sido adaptadas a las necesidades de las labores misionales o demoliendo edificaciones para allí construir instalaciones no solo destinadas a las labores propiamente vinculadas con la misión de las universidades, sino también centros de eventos y convenciones.

Ahora, si bien las IES privadas han participado de forma activa tanto en la formulación de planes parciales como, por la vía de la configuración de conjuntos universitarios, en el impulso de dinámicas de renovación urbana, las IES también se han visto afectadas por los intereses inmobiliarios que encuentran en los predios céntricos de estas una oportunidad de valorización. Así, en el caso de la Universidad Nacional de Colombia (UN), no es esta la que plantea y diseña el plan de renovación, sino la que se ve amenazada por tales planes. El Plan de Renovación del Centro Administrativo Nacional (CAN) y su Plan Parcial proponía, en los primeros borradores del proyecto, la inclusión de predios de la UN como los edificios administrativos de la unidad Uriel Gutiérrez (antiguas residencias estudiantiles Camilo Torres) y el Hospital Universitario, los cuales ocupan aproximadamente un área de 38 000 m² (Agencia de Noticias UN, 2012).

Ante estas intenciones del gobierno distrital, las directivas de la Universidad Nacional y la comunidad estudiantil realizaron varios pronunciamientos en contra y, finalmente, la Secretaría de Planeación realizó una modificación en la que estos terrenos se excluían del Plan Parcial. No obstante, cabe resaltar que los planes parciales, al ser instrumentos que articulan objetivos del ordenamiento territorial, en términos de gestión del suelo, permiten la expropiación, y es por ello que, si bien en las modificaciones se excluyeron los predios señalados, la institucionalidad, junto con la presión del capital inmobiliario (el Grupo Empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo ha sido uno de los principales promotores de este Plan de Renovación, pues beneficiaría los predios que posee sobre la calle 26, en los cuales plantea desarrollar un complejo de edificios corporativos), está en capacidad de generar cambios en el uso del suelo que llegarían a afectar el campus de la UN.

Las universidades como agentes inmobiliarios

Como se ha visto, las políticas neoliberales se han manifestado, para el caso de las IES públicas, en la apertura de estas a capitales transnacionales, el otorgamiento de créditos educativos que han tenido como resultado el aumento de la matrícula y en la transferencia directa de recursos, como ocurrió con el programa SPP. En cuanto a las IES públicas, las manifestaciones más palpables se ubican en la dramática reducción de los presupuestos de funcionamiento que han tenido como resultado, entre otros, la dificultad para modernizar las plantas físicas que tras años de construcción acusan signos de avanzado deterioro.

En la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), encargada de la formación de educadores, se hace evidente que desde la política de Revolución Educativa de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006/2006-2010), y debido al aumento en el número de estudiantes que ello representó, las edificaciones en servicio rebasaron su capacidad, lo que condujo al actual problema de hacinamiento y deterioro de las edificaciones. Frente a este problema, la UPN estructuró, desde la rectoría de Óscar Ibarra (2003-2010), el proyecto de construcción de una nueva sede en predios ubicados en el norte de la capital (Valmaría), para lo cual se contó con los diseños elaborados por el reconocido arquitecto Rogelio Salmona. Luego de varios años de intermitencias en el desarrollo del proyecto, en 2007 se construyeron en este predio, con el objetivo de aliviar los problemas de hacinamiento en la sede central, aulas provisionales para alojar las actividades formativas de la Facultad de Educación Física. De esta forma, lo que se planteó como una solución provisional que sería la antesala de la construcción del nuevo campus, se convirtió en una solución permanente.

En este contexto, y ante las dificultades de obtener financiamiento directo del Gobierno nacional para la construcción del nuevo campus y modernizar la sede de la calle 72, ubicada en una de las zonas de mayor valorización de la ciudad (uno de los sectores financieros de la capital), el rector Adolfo Atehortúa (2014-2018) propuso la estructuración de una alianza público privada (APP) que liberaría recursos para aliviar la crisis de infraestructura de la Universidad. Así, en septiembre de 2017, durante un acto de rendición anual de cuentas, se presentó ante la comunidad universitaria el proyecto de APP, en los siguientes términos:

[El proyecto] lo financia por completo la empresa privada, la garantía es que se planea por etapas para no tomar riesgos como en Reficar. La ventaja es que no se invierte ni un peso. No sabemos montos, estudios de factibilidad, solo que los pagan ellos... Se trata de hacer una universidad moderna con la tierra que no estamos usando. (Atehortúa, 2017)

Con un lenguaje propio de los pioneros inmobiliarios a los que alude Neil Smith (2012), el rector sostiene que los predios de la Universidad, particularmente los del Instituto Pedagógico Nacional (IPN),¹ son tierra no usada, cuando en realidad corresponden a las zonas verdes en las que los y las estudiantes desarrollan sus actividades físicas y recreativas.

Este bien intencionado intercambio, presentado como tabla de salvación para la comunidad universitaria, fue estructurado, según consta en las actas del Consejo Superior Universitario en las que se presentó el proyecto, por la desarrolladora inmobiliaria Hitos Urbanos de propiedad de Álvaro Rincón Muñoz,² relacionado con las altas esferas del poder político y económico del país. Así, la Universidad buscaba por medio de la APP entregar a Hitos Urbanos una de sus sedes (El Nogal) y un porcentaje de las áreas verdes del IPN, a cambio de la construcción de nuevas edificaciones en la sede principal. Finalmente, y como resultado del fuerte rechazo de importantes sectores de la Universidad y el Instituto a esta APP, la propuesta se archivó, no sin antes haber abierto un debate sobre lo lesivo que era para la Universidad ceder su patrimonio a una desarrolladora inmobiliaria que lo tomaría para incorporarlo a las dinámicas de especulación con el suelo urbano.

La Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca (Unicolmayor) también entra en el panorama de la organización del espacio en función del capital. Su particularidad reside en que es la única universidad pública que no cuenta con una sede propia, y se ha localizado históricamente en un predio aledaño al Museo Nacional. En 2014, a partir de la intención declarada por el Ministerio de Cultura de ampliar las instalaciones del Museo, la Unicolmayor y el Colegio Nacional Policarpa Salavarrieta recibieron orden de desalojo por parte del Ministerio de Educación y de Planeación Nacional, para la cual tenían un plazo de cumplimiento de cinco años, que se vencía en mayo de 2019. Ante la ausencia total de recursos para la compra del predio de la nueva sede y, adicionalmente, ante la organización estudiantil que se ha manifestado en cuanto a las implicaciones que el traslado tiene, la Unicolmayor no ha emprendido acciones para reubicarse en la nueva sede, lo cual también ha paralizado los procesos de acreditación institucional.

1 Centro de educación básica y media adscrito a la Universidad Pedagógica Nacional, quien lo financia con cargo a su presupuesto. Su sede se encuentra localizada en unas de las zonas de mayor valorización del norte de la capital.

2 En un informe periodístico del 10 de abril de 2020, el portal InSight Crime, se habla de presuntos vínculos entre Rincón y un narcotraficante colombiano radicado en España, quienes, a través de Hitos Urbanos, habrían estructurado un entramado legal para el lavado de dinero.

En este caso no se puede perder de vista que el proyecto de ampliación de Museo Nacional, localizado en el barrio San Diego,³ se encuentra articulado con proyectos de renovación urbana del centro de Bogotá, y de ello da cuenta la destrucción de viviendas tradicionales del barrio para dar paso a torres de apartamentos destinados a habitantes de ingresos altos. Así, el sector en el que se encuentran el Museo Nacional y la Unicolmayor se ha ido configurando como el centro internacional de la capital, en la que hay actualmente procesos de turistificación del espacio, de establecimiento de clústeres de servicios especializados para el consumo y el entretenimiento. Adicionalmente, hay un plan de renovación puesto en marcha en sector: Plan Parcial Estación Metro 26 (Alcaldía de Bogotá, 2020). De esta forma, con un discurso amparado en la expansión de las industrias creativas y la activación cultural, del cual el Museo participa activamente, se cierra la puerta para que la Unicolmayor continúe desarrollando sus actividades misionales en el predio que actualmente ocupa.

Localizada en un estratégico sector del centro de la capital, la Universidad del Rosario (UR) oficializó en enero de 2020 la compra del histórico edificio de El Tiempo. Las directivas de la universidad indican que esta compra permite articular, por medio de la sucesiva compra de edificios aledaños al Claustro del Rosario, un campus que, más allá de las funciones misionales, se convierta en un referente cultural del centro de la ciudad (Universidad del Rosario, 2020). Ahora bien, a la compra del edificio El Tiempo, cuyo costo fue de siete millones de dólares, se suma la adquisición de la antigua sede de este periódico localizada en la calle 26, que corresponde, como se refirió antes, a uno de los ejes de desarrollo inmobiliarios más importantes de la ciudad. Lo anterior resalta el papel de agente inmobiliario de esta IES privada, máxime cuando en su plan de inversiones contemplado en la Hoja de Ruta 2025 y cuyo presupuesto es de 210 millones de dólares (Semana.com, 2020), se contemplan la compra y renovación de inmuebles, así como el desarrollo del Plan Parcial El Rosario, ubicado en el sector de Torca, en el norte de la ciudad, y en el cual se proyecta la ampliación del campus existente.

En este contexto, y teniendo en cuenta lo señalado en párrafos anteriores, el alto valor del suelo en los sectores de inversión de la Universidad del Rosario ubica a esta institución educativa en un lugar privilegiado de inversiones. En esta medida, de acuerdo con las tendencias urbanísticas asociadas a los programas

3 Inicialmente los predios de este barrio estaban englobados en La Perseverancia, construido en las primeras décadas del siglo xx para albergar a los obreros de la cervecería Bavaria. Fue con la construcción de la carrera quinta que este quedó segregado de La Perseverancia.

de renovación urbana que se proyectan para el centro ampliado de la ciudad, la Universidad podrá tomar parte en las dinámicas de anticipación inmobiliaria (Alfonso, 2012), de las cuales estará en capacidad de captar los diferenciales de renta generados al momento del avance de los procesos de renovación.

Para terminar de exponer el amplio mapa del papel de las universidades en la producción del espacio, se observa el caso de la Universidad Sergio Arboleda (USA), institución de educación superior privada localizada en la localidad de Chapinero de Bogotá, fundada en 1984 en un sector aledaño a uno de los ejes financieros más importantes de la capital y a la Universidad Pedagógica Nacional. El análisis de la USA se inscribe en un proyecto de investigación sobre renovación urbana en periferias centrales de Bogotá, particularmente la localidad de Chapinero, y dado que este momento se encuentra en ejecución, la presente revisión se limitará a observar cómo en este caso se reproducen las prácticas inmobiliarias implementadas por otras IES en privadas en el centro de la ciudad.

El trabajo de campo realizado en el sector donde se ubican los predios de la USA (figura 3), complementado con un ejercicio de mapeo de la evolución de los predios de esta, llevó, en primer lugar, a identificar las prácticas inmobiliarias y, en segundo lugar, a preguntar por el sentido de disponer de una infraestructura física que, como en el caso de otras universidades privadas, sobrepasada las necesidades de docencia e investigación. Como resultado de esta exploración, se observa una tendencia a la adquisición de inmuebles que, construidos en las décadas de 1930 y 1940, se destinaron inicialmente a usos residenciales, para luego cambiar de régimen de uso de suelo para servicios y comercio. En este primer caso, la USA adquirió estos inmuebles para ser demolidos y proceder a la construcción de edificaciones en altura con lo cual se aumenta el aprovechamiento por metro cuadrado de suelo, además, se ve la recurrencia de la adquisición de lotes en los que funcionan parqueaderos institucionales, hecho que aumenta las preguntas por la subutilización de suelo aprovechable para desarrollo inmobiliarios en sectores con un alto potencial. Eso abre una hipótesis, ya trazada en varios momentos de este capítulo, sobre el papel especulativo de estos predios en asocio con lo que Neil Smith (2012) define como *formación de potenciales diferenciales de renta*.

Por otra parte, llama la atención cómo algunos propietarios de edificios aledaños a la USA comentan que esta institución se ha valido de maniobras de acoso inmobiliario para lograr acceder a la compra de edificios sobre los que planea expandirse. Uno de los entrevistados sostuvo que la institución, valiéndose del peso de su equipo jurídico, generó presiones indebidas a arrendatarios de un edificio de propiedad horizontal ubicado sobre la carrera 15, para de esa

manera poder negociar una compra expedita con quienes poseían una participación mayoritaria en las propiedades de este. Si bien este proceso de compra, según refirió el entrevistado, no se concretó, sí permite entender las cuestionables prácticas inmobiliarias seguidas por esta Universidad, que dicho sea de paso ha salido beneficiada por el Gobierno nacional 2018-2022, toda vez que tanto el presidente como otros altos funcionarios son egresados de allí, y esto le ha permitido captar cuantiosos recursos para el desarrollo de proyectos de consultoría para el Estado.

Conclusiones

Las universidades como agentes inmobiliarios, con participación en ejercicios de especulación, configuran una fuerza importante en las ciudades, por cuanto han tenido la posibilidad de desplegar recursos que apuntalan altas inversiones e intervenciones que transforman el territorio y proveen rentas. Uno de los asuntos clave en estas dinámicas es el manejo de un discurso que promueve la idea de revitalización o renovación de las ciudades como un *proyecto comunitario*, que vincula a todos los habitantes de la zona que se pretende intervenir, lo cual se manifiesta particularmente en el caso de la Universidad de los Andes con el Plan de Renovación Urbana del Triángulo Fenicia, y adicionalmente en las intenciones de las alianzas público-privadas.

La ausencia de controles políticos sobre las actividades económicas de las universidades privadas representa la forma en que la participación del Estado es mínima en la preservación de las universidades públicas, mientras que recrea condiciones de rentabilidad para los agentes inmobiliarios de la ciudad y los grupos financieros con pretensiones sobre el negocio de la educación superior (Smith, 2012); ello visto claramente tanto en las políticas educativas como en la financiación para la expansión de los créditos educativos. Lo anterior configura un panorama en el cual la educación superior asiste a su propia mercantilización y hace indispensable cuestionar los mecanismos de inserción del capital financiero al mercado de la educación en Colombia. Además, como sostiene Ochoa (2016), este cuadro de participación de las universidades privadas en las dinámicas de renovación y especulación urbana conduce a preguntar por el carácter de entidades sin ánimo de lucro que estas poseen.

La geografía urbana de las universidades y, en este caso, la manera en que estas operan se halla vinculada profundamente con el modelo de la ciudad neoliberal, en la que el mercado inmobiliario tomado por las dinámicas de la financiarización (Lapavitsas, 2016) configura complejos circuitos de acumulación y reproducción del capital. Así, llama la atención cómo la Universidad

Sergio Arboleda (ElTiempo.com, 2016) posee terrenos⁴ en sectores de la ciudad en los cuales no tiene interés en construir infraestructura educativa, pero en el cual sí operan dinámicas de consolidación de proyectos de vivienda de interés social. Esto conduce a preguntar por la finalidad de estas propiedades que no se vinculan con las actividades sustantivas de esta Universidad.

Este ejercicio de revisión de las actuaciones inmobiliarias de las universidades privadas en la ciudad de Bogotá y el asedio inmobiliario del que son objeto de las universidades públicas, si bien no responde a cabalidad a los interrogantes formulados al inicio del capítulo, abre una veta de investigación, desde perspectivas críticas en geografía, que invita a pensar las dinámicas de neoliberalización de la educación superior pública en Colombia más allá de los habituales análisis sobre desfinanciamiento, crecimiento del crédito educativo y políticas de acreditación y calidad. Por ello, se considera que, para comprender la complejidad de los alcances del neoliberalismo y su racionalidad mercantilista, es indispensable espacializar las actuaciones de estos agentes educativos-inmobiliarios, pues, tal como se observa, estas instituciones educativas no solo ocupan el espacio, sino que también lo convierten en un activo de alta valorización.

Finalmente, es preciso referir que, en 2011, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos cursó una reforma a la Ley 30 de 1992 que contemplaba, entre otras medidas, cambiar el régimen de entidades sin ánimo de lucro de las instituciones de educación superior, para que se pudiera abrir un espacio de oportunidades para que estas generaran dividendos que no necesariamente tuvieran que reinvertirse en el su ejercicio misional. Esta propuesta de reforma contó con el rechazo multitudinario de los estudiantes de las universidades públicas del país, y desembocó en el denominado paro estudiantil de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) constituida, por diversas organizaciones estudiantiles, como órgano deliberativo y de representación ante el ejecutivo. El resultado de esta movilización fue el archivo de la reforma por parte del MEN y el Gobierno nacional. Sin embargo, esta movilización no conjuró el impulso mercantilista de las grandes corporaciones transnacionales educativas, quienes aun sin haber salido beneficiadas por la fallida reforma, se han ocupado de encontrar mecanismos legales para saltar la restricción del lucro. De lo contrario no se podría entender cómo estas corporaciones han aumentado su presencia en el país y cómo las universidades que han resistido a la compra también se han

4 “El terreno, ubicado en la transversal 5J con 49C, es de propiedad de la Universidad Sergio Arboleda, que a través de una querrela, interpuesta en el 2008, reclamó los 19 680 metros cuadrados donde hoy se calcula que habitan 350 familias, es decir, unas 1500 personas” (ElTiempo.com, 2016).

lanzado a buscar en las dinámicas inmobiliarias mecanismos de lucro. Como se ha insistido, si bien este postulado se mantiene en el marco de una hipótesis de trabajo, los indicios apuntan en esta dirección ya señalada.

Referencias

- Agencia de Noticias UN. (22 de noviembre de 2012). *Plan de renovación urbana del CAN desconoce a la UN* [En línea]. http://agenciadenoticias.unal.edu.co/index.php?id=1937&L=2&tx_ttnews%5Btt_news%5D=50136&cHash=b28882eea15f9a7e0ea09f58553f0a19
- Alcaldía de Bogotá. (2020). *10 megaproyectos de renovación urbana y desarrollo urbano en Bogotá*.
- Alfonso, Ó. (2012). *Bogotá segmentada. Reconstitución histórico-espacial de la estructuración residencial de una metrópoli latinoamericana*. Universidad Externado de Colombia.
- Arango, S. (2012). *Ciudad y arquitectura. Seis generaciones que construyeron la América Latina moderna*. Fondo de Cultura Económica.
- Atehortúa, A. (6 de abril de 2017). *Audiencia Pública: Rendición de cuentas UPN, vigencia 2015 – II / 2016 - I*. [Presentación ante los egresados]. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia.
- Benneworth, P. y Hospers, G.-J. (1 de diciembre de 2007). The new economic geography of old industrial regions: universities as global - local pipelines. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 25(6), 779-802. <https://doi.org/10.1068/c0620>
- Carmona, E. (23 de agosto de 2016). ¿Quiénes son los dueños de Laureate y de la Universidad Andrés Bello de Chile? *Alainet.org*. <https://www.alainet.org/es/articulo/179670>
- Celis, T. (29 de agosto de 2012). *Whitney manejará servicios de la Fundación del Área Andina*. Recuperado de <https://www.larepublica.co/empresas/whitney-maneara-servicios-de-la-fundacion-del-area-andina-2019268>
- Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (Cideu). (s. f.). *Renovación urbana “Triángulo de Fenicia”*. <https://www.cideu.org/proyecto/renovacion-urbana-triangulo-de-fenicia/>
- ElTiempo.com. (14 de diciembre de 2016). *Por ‘t ierreros’, más de 450 familias están a punto de perderlo todo*. Recuperado de <https://www.eltiempo.com/bogota/familias-afectadas-por-los-tierreros-a-punto-de-perderlo-todo-44372>
- Fedesarrollo. (2016). *Financiación de la educación superior a través del Icetex: estimación de necesidades de recursos a futuro y propuestas de mecanismos de fondeo*. Bogotá.

- García, B. y Ceballos, O. (2009). *Barrios y universidades. El vecindario de la calle 45 en Bogotá*. Pontificia Universidad Javeriana.
- Guevara, D. (2013). Educación superior y financiarización. En C. Giraldo (comp.), *Política social contemporánea en América Latina* (pp. 331-355). Ediciones Desde Abajo.
- Lafer, G. (2003). *Land and labor in the post-industrial university town: remaking social geography*. University of Oregon.
- Lapavitsas, C. (2016). *Beneficios sin producción. Cómo nos explotan las finanzas*. Traficantes de Sueños.
- Lozada, A. (30 de octubre de 2018). Lo bueno, lo malo y lo feo de Ser Pilo Paga [En línea]. *ElUniandino.com*. <https://www.eluniandino.com/post/lo-bueno-lo-malo-y-lo-feo-de-ser-pilo-paga>
- Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2010). *La Revolución Educativa 2002-2010*. Bogotá.
- Mondragón, S. (2014). *Universidad y ciudad: desarrollo de las universidades en Bogotá 1950-1990*. Universidad Nacional de Colombia.
- Mora, A. y Múnera, L. (2018). “Ser pilo no paga”: privatización, desigualdad y desfinanciamiento de la universidad pública en Colombia. *Revista de Ciencia Política*, 14(27), 115-142.
- Mosey, M. (2017). Studentification: the impact on residents of an English city [En línea]. *Geoverse*. <https://www.brookes.ac.uk/geoverse/original-papers/studentification--the-impact-on-residents-of-an-english-city/>
- Ochoa, P. (5 de septiembre de 2016). Mercachifles. *ElTiempo.com*. <https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/paola-ochoa/mercachifles-paola-ochoa-columnista-el-tiempo-54229>
- Olivera Martínez, P. (2013). *La polarización social en la ciudad contemporánea. El re-escalamiento de los espacios del neoliberalismo*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Piedrahita, F. (1.º de mayo de 2011a). Universidades con ánimo de lucro: historias tristes de otros países. *EstudiantesdeDoxa.com*. <https://www.estudiantesdedoxa.com/2011/06/universidades-con-animo-de-lucro.html>
- Piedrahita, F. (10 de agosto de 2011b). ¿Gran inversión de las Universidades con ánimo de lucro? Una ilusión. *Icesi.edu.co*. <https://www.icesi.edu.co/unicesi/todas-las-noticias/564-gran-inversion-de-las-universidades-con-animo-de-lucro-una-ilusion>
- Sage, J., Smith, D. y Hubbard, P. (18 de enero de 2013). The diverse geographies of studentification: living alongside people not like us. *Housing Studies*, 27(8). https://www.researchgate.net/publication/263417997_The_Diverse_Geographies_of_Studentification_Living_Alongside_People_Not_Like_Us

- Semana.com. (24 de mayo de 2018). *Cómo se mueven los créditos de educación superior en Colombia* [En línea]. <https://www.semana.com/edicion-impres/caratula/articulo/asi-se-mueven-los-creditos-de-educacion-superior-en-colombia/258625/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20un%20an%C3%A1lisis,con%20otras%20formas%20de%20pago>
- Semana.com. (24 de enero de 2019). *La expansión de las obras en las universidades* [En línea]. <https://www.semana.com/edicion-impres/negocios/articulo/en-que-van-las-obras-de-infraestructura-en-las-universidades/266401/>
- Semana.com. (30 de enero de 2020). *Es oficial: Universidad del Rosario compró el emblemático edificio de El Tiempo* [En línea]. <https://www.semana.com/educacion/articulo/universidad-del-rosario-compro-el-emblematico-edificio-de-el-tiempo/649954>
- Smith, N. (2012). *La nueva frontera urbana. Ciudad revanchista y gentrificación*. Traficantes de Sueños.
- Universidad del Rosario (30 de enero de 2020). *Edificio El Tiempo: sede de la Universidad del Rosario*. <https://www.urosario.edu.co/Periodico-NovaEtVetera/Nuestra-U/Edificio-El-Tiempo-sede-de-la-Universidad-del-Rosa/>
- Universidad Externado de Colombia (s. f.). *Bienestar Universitario entregará becas-crédito a estudiantes de pregrado*. <https://www.uexternado.edu.co/bienestar-universitario/programa-de-becas/>

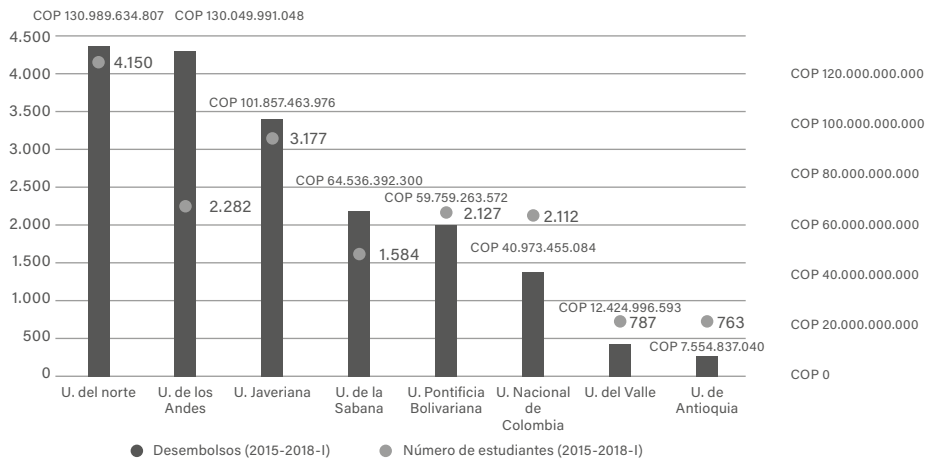


Figura 1. Concentración de recursos SPP

Fuente: Mora y Múnera (2018).

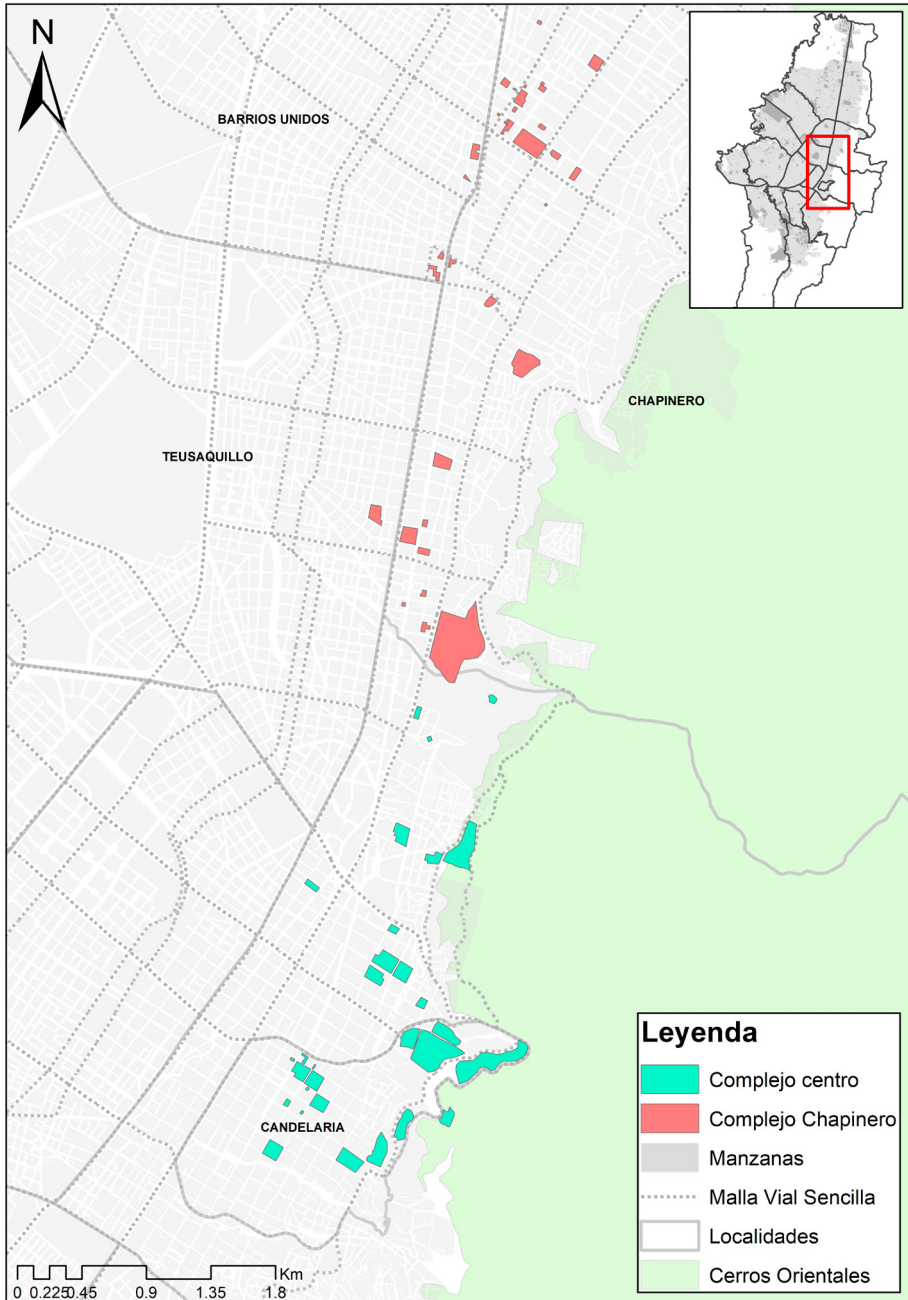


Figura 2. Principales universidades de los complejos universitarios Centro y Chapinero, Bogotá

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo.

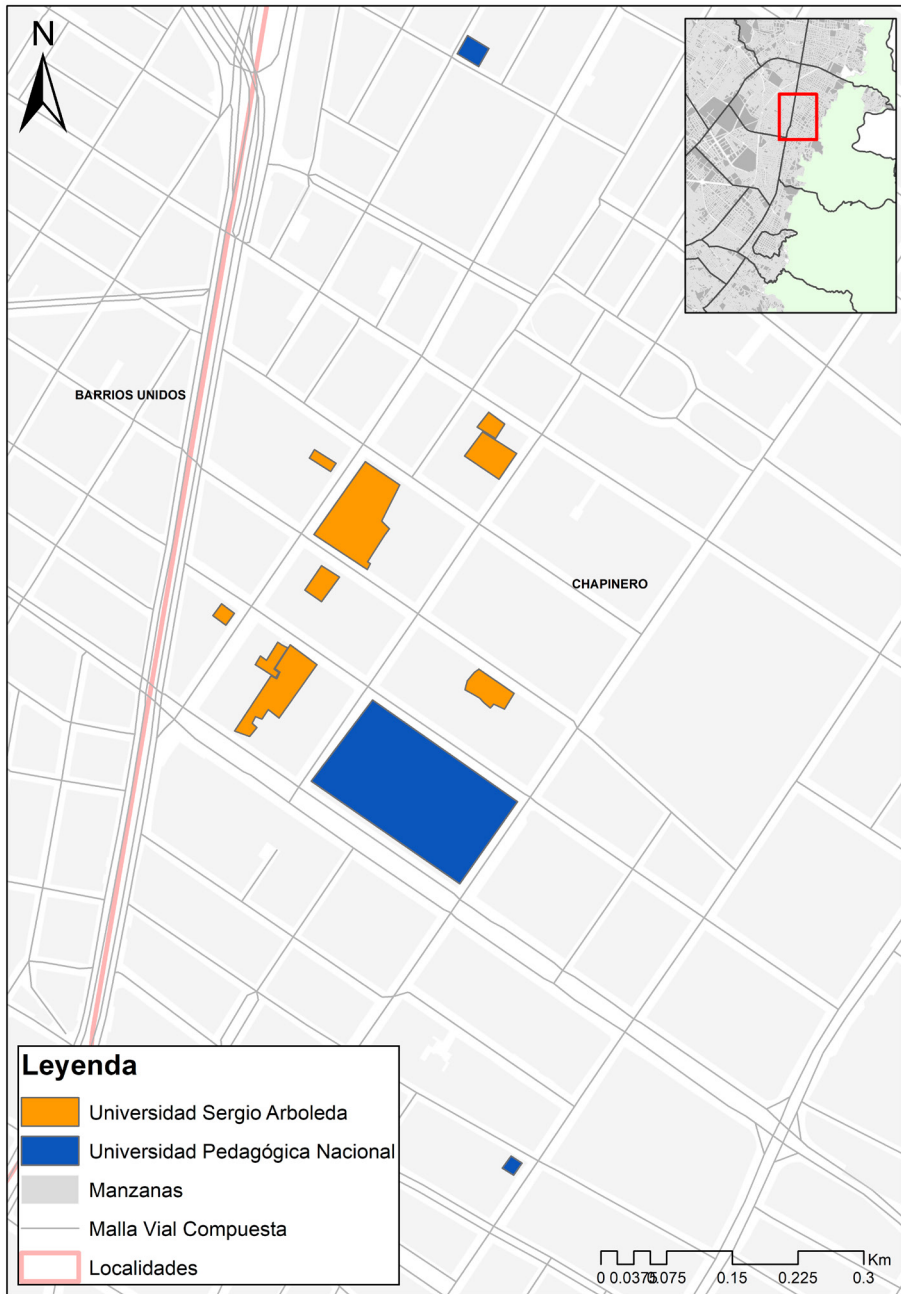


Figura 3. Predios de la Universidad Sergio Arboleda en la localidad de Chapinero

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo.

Sobre los autores

Madisson Yojan Carmona Rojas. Doctor en Geografía, maestro en Ciencias Sociales y Humanidades y licenciado en Ciencias Sociales. Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Coordinador del Semillero de Investigación Problemas Urbanos Contemporáneos.

Iván Felipe Murcia Sánchez. Habitante de los cerros, trabajador social y magíster en Estudios Políticos Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Colombia. Posee experiencia en intervención comunitaria y sistematización de experiencias. Es investigador junior en procesos sociales y desarrollo urbano. Integrante de la Colectiva Huertopía.

Lina Daniela Valcárcel Gómez. Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Caminante y tejedora de procesos de educación popular y organización comunitaria. Desarrolló su trabajo de grado sobre sufrimiento ambiental y riesgo en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá. Posee experiencia en investigación de problemáticas urbanas y ambientales. Integrante de la Colectiva Huertopía y del Semillero de Investigación Problemas Urbanos Contemporáneos.

Jhody Katerine Sánchez Beltrán. Habitante de los cerros, licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional y estudiante de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con experiencia en investigaciones alrededor del desplazamiento y la gestión urbana del riesgo, corredores ecológicos en la ciudad y la Educación Popular Ambiental. Integrante de la Colectiva Huertopía.

Moisés Cubillos Rodríguez. Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional e integrante del Semillero de Investigación Problemas Urbanos Contemporáneos. Ha desarrollado trabajo comunitario y barrial en la localidad de Usme, Bogotá. Ha sido ponente en eventos académicos nacionales y latinoamericanos. Sus intereses investigativos son: riegos y vulnerabilidad urbana, informalidad y expansión urbanas.

Martín Andrés Díaz Sanabria. Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional e integrante del Semillero de Investigación Problemas Urbanos Contemporáneos. Sus intereses investigativos se centran en el fenómeno de la informalidad y la financiarización del espacio construido. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Docente de educación básica.

Jessica Alejandra Gómez Gómez. Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional e integrante del Semillero de Investigación Problemas Urbanos Contemporáneos. Su trabajo de grado versó sobre segregación residencial en la localidad de Suba, Bogotá. Ha participado como organizadora y ponente en eventos académicos nacionales e internacionales.

Michael Steven Martínez Munar. Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional e integrante del Semillero de Investigación Problemas Urbanos Contemporáneos. Fue monitor de investigación en el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha participado como organizador y ponente en eventos académicos nacionales e internacionales.

Edwin Giovani Ruiz Rojas. Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional e integrante del Semillero de Investigación Problemas Urbanos Contemporáneos. Fue monitor de investigación en el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha participado como organizador y ponente en eventos académicos nacionales e internacionales y como autor de un artículo de investigación en la *Revista Ciudades, Estados y Política*, del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia.

Carlos Andrés González Ávila. Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional e integrante del Semillero de Investigación Problemas Urbanos Contemporáneos. Es miembro de la Biblioteca Agroecológica “El Uval”, en la localidad de Usme, Bogotá. Posee experiencia en promoción y gestión de la lectura con BiblioRed y la Biblioteca Nacional de Colombia. Ha sido organizador y ponente de eventos académicos nacionales y latinoamericanos.

Carolina Botía Cella. Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional e integrante del Semillero de Investigación Problemas Urbanos Contemporáneos. Es coautora de la *Antología impresentable. Poesía y resistencia*. Ha participado en talleres de poesía y narrativa en la ciudad de Bogotá. Organizadora y ponente en eventos académicos nacionales e internacionales sobre estudios urbanos. Su campo de especialización es financiarización urbana y desarrollo geográfico desigual.



Universidad Pedagógica Nacional

Editorial Universidad Pedagógica Nacional

*Del aula y el barrio. Reflexiones sobre la producción desigual del espacio urbano se editó en Bogotá, en el año 2022, a 38 años de la publicación en inglés del libro *Desarrollo desigual. Naturaleza, capital y la producción del espacio*, de Neil Smith.*

«Ignis, aer, aqua et terra sunt partes
semper existentis», Platón.

Las autoras y los autores de la presente compilación ofrecen una propuesta de lectura de los procesos de producción desigual del espacio urbano basada en la teoría urbana crítica. A partir del trabajo adelantado por el Semillero de Investigación: Problemas Urbanos Contemporáneos, se plantea el análisis de diversos casos que permiten comprender el espacio urbano como producto de tensiones políticas. En la obra se revisan las relaciones que se establecen entre habitantes de los territorios y los entes y agentes de la administración pública, así como con los capitales privados; los efectos que los procesos de desarrollo económico tienen en el crecimiento de la infraestructura educativa pública; los enfoques de análisis sobre el trabajo informal en América Latina, al igual que sus tensiones con los poderes institucionales públicos; las dinámicas de acceso al suelo y la vivienda en el continente, en relación con las prácticas de autoconstrucción y los nuevos procesos de urbanización enmarcados en un “acoso del capital inmobiliario”; y la segregación entre pares en relación con experiencias de exclusión socioespacial. Se trata de propuestas que articulan planteamientos teóricos críticos con realidades sociales, a partir de la voz de estudiantes, egresados y docentes. Se pretende, tal como lo señalan sus páginas iniciales, establecer un diálogo que inicie a nuevos momentos de trabajo educativo y comunitario.

ISBN: 978-628-7518-39-1



9 786287 518391 >